



ANALES DEL CONCEJO

DE BOGOTÁ, D.C.

PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 3913 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO ABR. 24 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

PROYECTO DE ACUERDO NO 386 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL USO DE LA BICICLETA EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO”.....	30032
PROYECTO DE ACUERDO NO 387 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA DE TALENTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, “BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL TALENTO INFANTIL” EN EL DISTRITO CAPITAL”.....	30034
PROYECTO DE ACUERDO NO 388 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA DE TALENTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, “BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL TALENTO INFANTIL” EN EL DISTRITO CAPITAL”.....	30052
PROYECTO DE ACUERDO NO 389 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROTOCOLO “PREGUNTA POR ÁNGELA” EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DISTRITALES, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y COPROPIEDADES DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y EN RIESGO DE FEMINICIDIO EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	30061
PROYECTO DE ACUERDO NO 390 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS Y SOCIALES OTORGADOS POR EL DISTRITO CAPITAL A AQUELLOS CIUDADANOS BENEFICIARIOS QUE ESTÉN SIENDO INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS O CONTRAVENCIONES EN EL MARCO DE UNA MANIFESTACIÓN PÚBLICA”.....	30072
PROYECTO DE ACUERDO NO 391 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS CAMBIOS DE NOMENCLATURA VIAL EN EL DISTRITO CAPITAL”.....	30089
PROYECTO DE ACUERDO NO 392 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA -CEA- Y OTROS ORGANISMOS DE TRÁNSITO QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ DEBEN FORTALECER LA EDUCACIÓN VIAL EN CULTURA CIUDADANA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL EN CONDUCTORES E INSTRUCTORES”.....	30098
PROYECTO DE ACUERDO NO 393 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA DESCONGESTIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE BOGOTÁ, SE PROPENDE POR SU FORTALECIMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”.....	30118
PROYECTO DE ACUERDO NO 394 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TEJO COMO DISCIPLINA DEPORTIVA, MOTOR ECONÓMICO Y EXPRESIÓN CULTURAL EN EL DISTRITO CAPITAL”.....	30133

Pág.

<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 395 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA CÁTEDRA DE EDUCACIÓN EN CULTURA Y USO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS COLEGIOS DE BOGOTÁ”.....	30148
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 396 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA Y SE FORTALECEN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA C-127 DE 2023”.....	30164

PROYECTO DE ACUERDO NO 386 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL USO DE LA BICICLETA EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO "****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

Fomentar y fortalecer el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible entre los funcionarios de las entidades distritales, mediante la implementación de un sistema integral de incentivos, que incluye la concesión de tiempo libre remunerado y la promoción de infraestructura adecuada para su utilización.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

- Artículo 2 – Constitución Política de Colombia: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
- Artículo 334 – Constitución Política de Colombia: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.

- Sentencia T-154 de 2013 – Corte Constitucional

En cuanto al derecho al medio ambiente, promovido mediante el uso de medios alternativos como la bicicleta, la Corte Constitucional destacó su importancia en la Sentencia T-154 de 2013. En este fallo, se subraya la relevancia de las políticas dirigidas a la protección ambiental, considerándolo un tema de interés general vinculado directamente al derecho a la vida. Frente a la salvaguarda de este derecho y de la integridad personal, la Corte ha establecido que la autoridad del tránsito goza de una amplia facultad de intervención.

Del orden Nacional:

- Ley 336 de 1996 – Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte.

Artículo 3°. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

- Ley 1503 de 2011 – “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”.

Promueve hábitos seguros en la vía y aborda mejoras en procedimientos y elementos para la seguridad vial de los usuarios de bicicletas.

- Ley 1811 de 2016 “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito”

Artículo 1° (...) “La presente ley tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana”

Del orden Distrital:

- Acuerdo 663 de 2017 “Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital”

Artículo 1°. (...) La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, promoverá una estrategia institucional que fomente e incentive el uso de diferentes medios alternativos y sostenibles de transporte, con el fin de generar la racionalización del uso del vehículo particular, promover la protección al medio ambiente y contribuir a una movilidad socialmente responsable con la ciudad.

- Decreto Distrital 672 de 2018 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones”

Artículo 17°. Subdirección de la Bicicleta y el Peatón. Son funciones de la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón: (...) 3. Elaborar las políticas, planes, programas, proyectos, conceptos y lineamientos de transporte no motorizado, en Bogotá D.C., 4. Liderar la coordinación interinstitucional para el desarrollo de políticas públicas, planes, programas, proyectos, lineamientos y estrategias en materia de transporte no motorizado en Bogotá D.C., (...) y 9. Definir e implementar programas, planes, proyectos, protocolos, acciones e instrumentos para la promoción del uso de la bicicleta y la caminata como modos de transporte. (...).

•Decreto 813 de 2017 “Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclista 2017-2026”

El Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 de Bogotá busca reducir la accidentalidad vial enfocándose en la protección de usuarios vulnerables como los ciclistas. Para esto, planea implementar capacitaciones en seguridad vial para ciclistas, identificar y mejorar caminos seguros para bicicletas, y realizar auditorías de seguridad vial en proyectos de infraestructura.

•Acuerdo 804 del 2021 “Por medio del cual se declara la bicicleta como medio de transporte prioritario en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones para fortalecer su uso”

Declara la bicicleta como modo (sic) de transporte prioritario en Bogotá para la superación de la crisis producto del COVID-19 y el desarrollo de una ciudad sostenible en el largo plazo, y plantea los siguientes objetivos:

1. Promover y facilitar el distanciamiento físico, como medida para enfrentar el COVID- 19.
2. Prevenir la congestión del sistema de transporte público masivo.
3. Facilitar la movilización segura de los ciudadanos en escenarios de post cuarentena, o de reactivación económica sectorial.
4. Contribuir a la mejora de la calidad del aire de la ciudad.
5. Fomentar la actividad física.

Así mismo en el artículo 1 se estipula que, “Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad realizará de manera prioritaria y urgente los ejercicios de redistribución del espacio vial y otras acciones que considere necesarias, con el objetivo de proveer el ciclo de infraestructura que permita una circulación bajo condiciones de seguridad.”.

•Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital (CONPES D.C.) 015 de 2021 “Política Pública de la Bicicleta 2021-2039”

Su objetivo general “Mejorar las condiciones físicas, socioeconómicas y culturales de la ciudad para el uso y disfrute de la bicicleta” Se pretende fomentar su desarrollo mediante la consecución de cinco objetivos específicos que incluyen:

1. “Más seguridad personal” con el que se busca optimizar las condiciones de seguridad personal para la ciudadanía que usa la bicicleta en Bogotá.
2. “Mayor seguridad vial” pretende proteger a los ciclistas de la ciudad frente a siniestros viales asociados al uso de la bicicleta.
3. “Más y mejores viajes en bicicleta” desarrolla acciones en pro de mejorar la experiencia de viaje de los ciclistas en Bogotá.
4. “Más bici para todas y todos” con el que se quiere fortalecer la cultura en torno a la bicicleta.

La promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte no solo busca aliviar la congestión vehicular, sino que también genera beneficios ambientales, sociales y económicos que impactan positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Este proyecto encuentra su fundamentación en diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lo que amplía su impacto y aborda aspectos adicionales.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La creciente adopción de la bicicleta como medio de transporte en Bogotá no solo evidencia una transformación significativa en los hábitos de movilidad de la ciudad, sino que también destaca la importancia de incrementar los incentivos y promover aún más el uso de este medio sostenible. Este aumento sustancial, evidenciado en los resultados de la Encuesta de Movilidad 2019, no solo se traduce en números impresionantes, como los 880.000 viajes diarios en bicicleta, sino que también refleja un cambio cultural hacia una movilidad más consciente y saludable. Esta cifra muestra un importante aumento del 37,85% en comparación con 2015, cuando se registraban 639.643 viajes diarios en bicicleta según la misma encuesta. Es decir que en solo 4 años el uso de la bicicleta prácticamente se ha duplicado.

En un contexto donde la bicicleta se posiciona como el medio de transporte más utilizado para trayectos menores a 5 km y representa el 65% de los desplazamientos en la ciudad, según un estudio de la Universidad Libre¹, es imperativo reconocer la necesidad de fortalecer los incentivos para consolidar este cambio positivo. Además, la bicicleta no solo contribuye al bienestar físico individual, sino que también juega un papel crucial en la mitigación del cambio climático al reducir las emisiones de CO₂ y generar un significativo ahorro económico anual.

Por otra parte, se estima que alrededor de 240.000 personas usan la bicicleta a diario en Bogotá para ir a trabajar o estudiar, de acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2017. Esta tendencia ascendente se ve reflejada en la continua expansión de la infraestructura para bicicletas impulsada por la ciudad. Bogotá cuenta actualmente con más de 540 km de ciclorutas, la red más extensa de Latinoamérica.^{2 3}

En términos económicos, se estima que las actividades directamente relacionadas con la bicicleta generan cerca de 32.000 empleos en Bogotá, una cifra equivalente a la del sector turismo en la ciudad.⁴ Por otra parte, el uso de la bicicleta en reemplazo de vehículos motorizados representa un ahorro anual de 1,27 billones de pesos en emisiones de CO₂. A nivel individual, se calcula que los usuarios de bicicleta ahorran un promedio de 41.087 pesos mensuales en tiempo de transporte en comparación con otros medios.

A pesar de los beneficios ya evidentes, es crucial destacar que el acceso equitativo a la infraestructura ciclable y los incentivos asociados no es uniforme en todas las áreas de la ciudad, especialmente en las localidades de estratos bajos (1 y 2). La concentración de esfuerzos y recursos en estas zonas vulnerables es esencial para garantizar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades de acceder a los beneficios de la movilidad en bicicleta y que se promueva una transformación inclusiva y sostenible en toda Bogotá.⁵

Finalmente, el incremento sostenido en el uso de la bicicleta en Bogotá es un testimonio elocuente de la aceptación y adopción generalizada de un modo de transporte más saludable y respetuoso con el medio ambiente. La significativa participación de la comunidad en la movilidad en bicicleta no solo demuestra un cambio cultural positivo, sino que también resalta la necesidad apremiante de reforzar y expandir los incentivos asociados. La bicicleta no solo representa una alternativa eficiente para trayectos cortos, sino que también contribuye de manera tangible a la salud pública, la reducción de emisiones de CO₂ y el ahorro económico a nivel individual y colectivo. Sin embargo, la disparidad en la infraestructura disponible, particularmente en áreas de bajos recursos, subraya la urgencia de dirigir inversiones específicas para garantizar una movilidad en bicicleta equitativa y accesible para todos los ciudadanos.

¹ Universidad Libre. (2018). Caracterización de biciusuarios en Bogotá. Bogotá: Universidad Libre.

² BID. (2015). Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta. BID.

³ Alcaldía de Bogotá. (2019). Infraestructura para bicicletas en Bogotá. Recuperado de <https://bogota.gov.co/>

⁴ SDE-DEDE. (2019). Caracterización de la economía de la bicicleta en Bogotá. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

⁵ Encuesta Multipropósito. (2017). Movilidad en bicicleta en Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación.

Contexto internacional

En el ámbito internacional, la promoción de la bicicleta como medio de transporte sostenible se ha consolidado como una estrategia integral para abordar desafíos relacionados con la movilidad, la salud, el medio ambiente y el desarrollo urbano. Diversos países, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Alemania, han implementado iniciativas y políticas que ofrecen incentivos económicos y fiscales, reflejando un compromiso global con los principios de desarrollo sostenible y la mitigación de impactos adversos.

Esta orientación internacional no solo busca aliviar la congestión vehicular, sino también mejorar la salud y el bienestar ciudadano, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear entornos urbanos más sostenibles. Experiencias exitosas en naciones europeas, como Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Alemania, evidencian un interés común en transformar la movilidad urbana mediante estímulos económicos para el uso de la bicicleta.

En España, la Estrategia Estatal de la Bicicleta y las iniciativas privadas, como las de la empresa Ingeteam, reflejan el creciente interés por fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. La visión de la bicicleta como una alternativa sostenible se extiende por toda Europa, donde países como Francia y Países Bajos han implementado innovadoras iniciativas para recompensar económicamente a quienes eligen la bicicleta en lugar de vehículos motorizados, promoviendo entornos más amigables y reduciendo la presencia de automóviles en las ciudades.

Estos programas no solo destacan el aspecto ecológico, sino también los beneficios para la salud individual y colectiva. En países líderes en el uso de la bicicleta, como Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Alemania, la inversión en infraestructura ciclista, incentivos fiscales y programas de subsidios ha contribuido al éxito de esta modalidad de transporte.

Los Países Bajos, reconocidos mundialmente como el paraíso de las bicicletas, han establecido un modelo con una infraestructura ciclista bien desarrollada y segura, incluyendo carriles exclusivos, semáforos específicos y amplios estacionamientos. En Dinamarca, donde aproximadamente el 27% de los viajes se realizan en bicicleta, la inversión en carriles y rutas ciclistas bien señalizadas ha sido fundamental. Suecia, con alrededor del 17% de sus desplazamientos en bicicleta, ha implementado políticas y programas, como incentivos fiscales y subsidios, para fomentar su uso. Alemania, donde cerca del 12% de los viajes son en bicicleta, destaca por su extensa red de carriles y estacionamientos.

A nivel global, la bicicleta no solo responde a problemas de movilidad; además, se posiciona como una herramienta clave para enfrentar el cambio climático y mejorar la calidad de vida. Estas iniciativas son ejemplos inspiradores que demuestran cómo la bicicleta se está convirtiendo en un pilar fundamental para construir ciudades más sostenibles y saludables en todo el mundo.

Acerca de la derogatoria del acuerdo xxxx de 2016

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS ODS⁶:

- ODS 3 - Salud y Bienestar:

La promoción del uso diario de la bicicleta no solo reduce la congestión vehicular, sino que también fomenta la actividad física, mejorando la condición física y cardiovascular de los ciudadanos y contribuyendo a la prevención de enfermedades relacionadas con la inactividad. El proyecto, al incentivar el uso de la bicicleta entre los funcionarios del distrito, impactará

⁶ Naciones Unidas. *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

directamente en su bienestar y calidad de vida, promoviendo hábitos saludables y previniendo enfermedades cardiovasculares, respiratorias y musculoesqueléticas.

Esta iniciativa se alinea con las metas específicas del ODS 3, que incluyen:

- Meta 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, así como promover la salud mental y el bienestar. El fomento del uso de la bicicleta contribuye a la promoción de la salud cardiovascular y física, apoyando la meta de reducir las enfermedades no transmisibles.
- Meta 3.9: Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. El uso de la bicicleta como alternativa al transporte motorizado contribuye a la reducción de la contaminación del aire, mejorando la calidad ambiental y la salud general de la población.

- ODS 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles:

La bicicleta, como medio de transporte no motorizado, no emite CO₂ ni otros contaminantes atmosféricos, mejorando significativamente la calidad del aire. Además, la promoción de su uso impulsa el desarrollo de infraestructuras amigables para ciclistas, haciendo las ciudades más sostenibles y accesibles. La adopción masiva de la bicicleta propuesta por este proyecto reducirá la huella de carbono, la contaminación atmosférica y auditiva generada por el parque automotor, mejorando la eficiencia del sistema de movilidad y disminuyendo los tiempos de viaje.

Esta iniciativa se alinea con las metas específicas del ODS 11, que incluyen:

- Meta 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público. La promoción del uso de la bicicleta contribuye directamente a ofrecer un sistema de transporte sostenible y seguro, cumpliendo con esta meta.
- Meta 11.6: De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluyendo la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales. El fomento del ciclismo como medio de transporte ayuda a reducir la huella ambiental de las ciudades, especialmente en términos de calidad del aire y gestión de desechos.
- Meta 11.7: De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. La promoción del uso de la bicicleta contribuye a la creación de entornos urbanos más accesibles y seguros, fomentando el acceso a zonas verdes y espacios públicos.
- Meta 11.a: Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. La promoción del ciclismo contribuye a la creación de ciudades más integradas y sostenibles, fortaleciendo los lazos entre áreas urbanas y rurales.
- Meta 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados para construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Aunque el proyecto no se centra directamente en la construcción de edificios, la promoción del ciclismo puede contribuir indirectamente al desarrollo sostenible y la resiliencia urbana.

- ODS 13 - Acción por el Clima:

La bicicleta es una alternativa ecológica al transporte motorizado, ya que no utiliza combustibles fósiles, contribuyendo así a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la mitigación del cambio climático. El proyecto tiene un papel crucial en la acción por el clima al promover la bicicleta como una alternativa sostenible.

Esta iniciativa se alinea con las metas específicas del ODS 13, que incluyen:

- Meta 13.1: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. La promoción del uso de la bicicleta contribuye a la resiliencia climática al reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mitigando así los riesgos asociados al cambio climático.
- Meta 13.2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. El proyecto propuesto, al fomentar la movilidad sostenible, aborda directamente las medidas para mitigar el cambio climático en el ámbito local.
- Meta 13.3: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. La promoción del uso de la bicicleta no solo tiene beneficios ambientales, sino que también contribuye a sensibilizar y educar a la población sobre alternativas sostenibles en la movilidad urbana.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” contempla dentro de sus propósitos centrales la promoción de una movilidad sostenible para la ciudad.

Específicamente, el Propósito 4 plantea “Hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible”. Para ello, una de las estrategias es el mejoramiento integral de la red de ciclorutas de la ciudad, con el fin de aumentar el número de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte.

En este contexto, el Artículo 106 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 *“Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020- 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”* adopta la política pública de la bicicleta, buscando mejorar las condiciones para su uso y disfrute. Dentro de sus énfasis se encuentra el fortalecimiento de la cultura en torno a este medio, la seguridad vial para ciclistas, y la articulación interinstitucional para su gestión.

Asimismo, el Artículo 107 contempla la implementación del Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá, como parte del Programa Estratégico de Movilidad Sostenible.

Estos elementos demuestran la importancia conferida por el Plan de Desarrollo Distrital al fomento del uso de la bicicleta, en línea con el presente proyecto de acuerdo que busca incentivar este medio de transporte sostenible entre los funcionarios de las entidades distritales.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente “Bogotá Reverdece 2022 – 2035”, compilado en el Decreto 555 de 2021

El presente proyecto de acuerdo se alinea con la visión integral del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito Capital. En respuesta a la Política de Movilidad Sostenible y Descarbonizada, la iniciativa busca priorizar modos de

transporte activos y de bajas emisiones, reflejando un compromiso con la transformación del modelo de movilidad urbana y la creación de un entorno más amigable con el medio ambiente.

El artículo 3 está orientado hacia una movilidad sostenible y segura, enfocándose en corredores verdes y la construcción de infraestructuras clave como líneas de metro y cables aéreos.

Artículo 3. Políticas de largo plazo del ordenamiento territorial del Distrito Capital: (...) 2. Política de Movilidad Sostenible y Descarbonizada. Se orienta a privilegiar los desplazamientos en modos de transporte activos, de cero y bajas emisiones. El eje estructurador de la movilidad es el peatón y el desarrollo de un sistema de corredores verdes de alta y media capacidad, que cambien el modelo la movilidad urbana, descarbonicen el sistema de transporte público, conecten la ciudad con la región, soporten una ciudad de proximidad, cuidadora e incluyente, mejoren las condiciones de accesibilidad de las zonas de origen informal e incorpore el desarrollo orientado al transporte y la revitalización alrededor de las infraestructuras de movilidad. Esta Política se soporta en la construcción de cinco líneas de metro, dos regiotram y siete cables aéreos, que junto con la consolidación de corredores verdes y una red de infraestructura peatonal y de cicloinfraestructura buscan establecer una movilidad sostenible y segura en el marco de la descarbonización de los viajes en el Distrito capital.” (Subrayado fuera de texto)

El artículo 103 concreta principios rectores en el componente urbano, enfatizando el impulso del uso de la bicicleta mediante la implementación de la Ciclo-Alameda del Medio Milenio y la expansión de cicloalamedas.

“Artículo 103. Principios rectores del ordenamiento en el componente urbano. Los principios rectores del ordenamiento territorial de Bogotá, definidos en el componente general, se concretan en estrategias, proyectos y medidas normativas que, en el suelo urbano, apuntan a los siguientes objetivos: (...) 4. Impulsar, aún más, el uso de la bicicleta, generando mejores condiciones (facilidad de uso, continuidad, seguridad vial y seguridad en general) para su adopción, como medio de transporte, por mujeres, personas mayores, niños y niñas, a través de:

- a. La implementación de la Ciclo-Alameda del Medio Milenio y la consolidación de una red de cicloalamedas con la cualificación de la existente Ciclo-Alameda del Porvenir, como ejes articuladores del transporte en bicicleta y otros modos de micromovilidad.*
- b. Más cicloparqueaderos de uso público y privado y fácilmente accesibles.*
- c. Cicloinfraestructura adicional a implementar en la ciudad.”.*

VII. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1º del artículo 12:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.”*

De igual forma, el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 confiere al alcalde Mayor la atribución de “Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos”. De esta manera, el presente Proyecto de Acuerdo establece un marco general, dejando a cargo

del gobierno distrital, en el ejercicio de su capacidad reglamentaria, desarrollar y poner en práctica lo dispuesto en esta iniciativa normativa.

VIII. IMPACTO FISCAL

El artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente:

“Artículo 7. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. (...)”

Y el Acuerdo 741 de 2019 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá), en su Capítulo IX, Artículo 67, indica que los proyectos de acuerdo deben contener requisitos mínimos, en los que se incluye en el literal d. Análisis del impacto fiscal del proyecto.

El presente proyecto se encuentra en línea con el programa "Al trabajo en bici" del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, mediante el cual el Distrito promueve e incentiva el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible entre los funcionarios públicos. Si bien la iniciativa busca fomentar esta práctica entre los funcionarios distritales, no implica la ejecución de nuevos gastos o reducción de ingresos que afecten el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Los lineamientos y estrategias planteadas se enmarcan en la política pública distrital de movilidad sostenible y uso de la bicicleta, por lo que su implementación se realizará con los recursos humanos y presupuestales actuales de las entidades competentes. En consecuencia, el proyecto no requiere concepto previo de la Secretaría Distrital de Hacienda al no representar impacto fiscal adicional.

IX. REFERENCIAS

Alcaldía de Bogotá. (2019). Infraestructura para bicicletas en Bogotá. Recuperado de <https://bogota.gov.co/>

BID. (2015). Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta. BID.

Encuesta de Movilidad. (2019). Resultados preliminares Encuesta de Movilidad 2019. Bogotá: Secretaría Distrital de Movilidad.

Encuesta Multipropósito. (2017). Movilidad en bicicleta en Bogotá. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación.

Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

SDE-DEDE. (2019). Caracterización de la economía de la bicicleta en Bogotá. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Universidad Libre. (2018). Caracterización de biciusuarios en Bogotá. Bogotá: Universidad Libre.

Atentamente,
JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
H. Concejal de Bogotá D.C.
Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 386 DE 2025

PRIMER DEBATE

**“POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL USO DE LA BICICLETA EN LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO”**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1°. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto fortalecer e incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible entre los funcionarios públicos que laboran en las entidades distritales, promoviendo así un entorno laboral más saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Artículo 2°. Beneficios e incentivos. Con el propósito de fomentar el uso de la bicicleta, las entidades distritales otorgarán a los funcionarios públicos que se desplacen en bicicleta a su lugar de trabajo, el beneficio de un permiso remunerado de un (1) día laboral por cada treinta (30) días laborables efectivos trabajados.

Adicionalmente, se establecerán convenios con establecimientos autorizados para ofrecer descuentos en la adquisición de bicicletas y accesorios, facilitando así la movilidad en bicicleta.

Parágrafo Primero. Las condiciones y procedimientos para acceder a estos beneficios serán reglamentados por cada entidad, garantizando equidad y transparencia en su aplicación.

Parágrafo Segundo. En cualquier circunstancia, el beneficio del permiso remunerado no podrá exceder los límites establecidos en la Ley 1811 de 2016.

Artículo 3°. Infraestructura e instalaciones. Las entidades públicas deberán adecuar sus espacios, asegurando condiciones de comodidad y seguridad para los funcionarios que utilicen la bicicleta como medio de transporte. Se priorizará la creación de áreas de estacionamiento seguro para bicicletas y vestuarios, incentivando así el uso de este medio de movilidad.

Artículo 4°. Capacitación y comunicación. La Secretaría Distrital de Movilidad y las entidades distritales implementarán programas de capacitación y comunicación dirigidos a los funcionarios públicos. Estos programas abordarán los beneficios del uso de la bicicleta, proporcionarán información sobre incentivos, ofrecerán recomendaciones técnicas y presentarán la normatividad existente para promover y facilitar la movilidad en bicicleta.

Artículo 5°. Participación en actividades. Las entidades distritales fomentarán la participación de sus funcionarios en eventos y campañas comunitarias que promuevan el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible.

Facilitarán la asistencia de los servidores públicos a estas actividades, brindarán apoyo logístico a los organizadores según sus capacidades, y reconocerán la participación destacada de funcionarios que contribuyan a generar conciencia ciudadana sobre los beneficios de la bicicleta.

Las entidades coordinarán su respaldo a dichas iniciativas, garantizando su integración constructiva a la gestión institucional y fortaleciendo así la cultura ciclista en la ciudad.

Artículo 6°. Seguimiento. La Secretaría Distrital de Movilidad realizará seguimiento semestral al cumplimiento de este Acuerdo. Se presentará un informe semestral detallado al Concejo de Bogotá sobre los avances y resultados obtenidos, con el objetivo de evaluar la efectividad de las medidas implementadas.

Artículo 7º. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y Cúmplase

PROYECTO DE ACUERDO NO 387 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA DE TALENTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, "BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL TALENTO INFANTIL" EN EL DISTRITO CAPITAL"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto impulsar la participación activa y la visibilización de los talentos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diversos campos artísticos, culturales, científicos, deportivos y tecnológicos, para su desarrollo integral y reconocimiento en la sociedad se a través de la creación de la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil" como un evento de interés cultural de carácter distrital.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

***Artículo 2. Son fines esenciales del Estado.** (...) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

***Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños.** la vida, la integridad física, la salud, (...) la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. (...) Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.*

***Artículo 71. Expresión Artística.** La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.*

De orden legal:

Ley 1098 DE 2006. "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"

ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN AMBIENTE SANO. (...) La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. **PARÁGRAFO.** El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.

De orden Distrital:

DECRETO 340 DE 2020 POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES:

Artículo 1. Naturaleza. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, perteneciente al Sector Cultura, Recreación y Deporte, es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera.

Artículo 2. Objeto. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas y vinculada y la sociedad civil.

Artículo 3. Funciones. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, tendrá las siguientes funciones básicas:

- a. Formular estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica.
- b. Diseñar estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible.

(...)

DECRETO 599 DE 2013 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO, LA EVALUACIÓN Y LA EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN PARA EL REGISTRO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL –SUGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”:

Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto:

- 1. Establecer el funcionamiento e integración del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital, en adelante y para efectos de lo previsto en este decreto se denominará - SUGA y se adopta la ventanilla única virtual.
- 2. Crear el Comité del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital - SUGA y establecer sus funciones.

3. *Determinar las características y clasificación de las aglomeraciones de público, así como los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las actividades que impliquen aglomeraciones de público en el Distrito Capital, a través de la ventanilla del SUGA. Así como los procedimientos que se deben observar para la habilitación de escenarios de artes escénicas.*

4. *Establecer los requisitos y procedimiento para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados, en espacio público, en estadios y demás escenarios deportivos.*

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

A nivel nacional y distrital, se han implementado diversas estrategias para fomentar las habilidades y potencialidades de aquellos individuos destacados que, debido a sus características particulares, requieren de una orientación y apoyo específicos. En este contexto, la ciudad de Bogotá debe estimular estos talentos en niños, niñas y adolescentes para asegurar su pleno desarrollo.

“Todo colegio tiene estudiantes que poseen elevado potencial para el aprendizaje en niveles avanzados, la solución de problemas creativos y la motivación para seguir un trabajo de excelencia y rigor. Más que fuentes de adquisición de información, los colegios deben ser lugares para el desarrollo de talentos en todos sus estudiantes. (...) Los métodos tradicionales de escolaridad pueden llevar al fracaso la intención de hacer de los colegios lugares de desarrollo de experiencias enriquecedoras para el talento creativo de los jóvenes. (...) El Modelo de Enriquecimiento Escolar comprende estrategias para incrementar el esfuerzo del estudiante, su gozo y desempeño, así como para integrar un rango de experiencias de aprendizaje de nivel avanzado, junto con destrezas de pensamiento, en todas las áreas curriculares.”⁷

Las actividades lúdicas, cuando se integran en el ámbito distrital, se convierten en una herramienta fundamental para acercar a los niños a aprendizajes significativos en entornos agradables y atractivos. Esto favorece el desarrollo de sus habilidades de manera natural. Como resultado, se generan niños felices, con habilidades fortalecidas, afectuosos, dispuestos a participar en el aula, curiosos y creativos. Estos ambientes también promueven la ampliación del vocabulario y mejoran la convivencia, lo que, a su vez, capta el interés de las familias, incentivando su participación en eventos de la comunidad.

Es vital considerar la feria lúdico-pedagógica como un espacio adecuado para reflexionar sobre los métodos, significados y didácticas involucrados en los procesos educativos y de formación infantil. Además, ofrece una oportunidad para analizar críticamente los aprendizajes de los estudiantes de la licenciatura en educación. Bajo estas circunstancias, el análisis en torno a la feria lúdico-pedagógica permite profundizar en las competencias que deben desarrollar los futuros profesionales de la educación, entendiendo que una formación coherente de los educadores de la etapa infantil contribuye de manera significativa al desarrollo integral de la primera infancia.

En Bogotá, aunque existen numerosos eventos masivos que buscan integrar y destacar talentos y habilidades en diversas áreas, muchos de ellos carecen de una participación integral de niños, niñas y adolescentes. Estos

⁷ S. Renzulli, Joseph. (2008). *La educación del sobredotado y el desarrollo del talento para todos*. Revista de Psicología, vol. XXVI, núm. 1. Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, Perú.

eventos suelen centrarse en el público adulto o en competencias específicas que no siempre consideran el potencial y las capacidades de los más jóvenes.

La falta de inclusión de niños, niñas y adolescentes en estos eventos representa una oportunidad perdida para fomentar su desarrollo y visibilizar su creatividad, talento y habilidades. Bien lo ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia C-449-03 al precisar la importancia que tiene la actividad recreativa y deportiva en el desarrollo integral del ser humano y en la promoción social de la comunidad, la cual se destaca en mayor medida el propio ordenamiento Superior al reconocer expresamente que dicha actividad reviste el carácter de derecho fundamental y prevalente en el caso de los niños. Por lo tanto, integrar a este grupo en la programación de eventos masivos no sólo enriquecerá la experiencia colectiva, sino que también permitirá construir una sociedad más equitativa, donde se valore y promueva el aporte de las nuevas generaciones en todos los ámbitos de la cultura, el deporte, el arte y la tecnología.

Como sucede con el *Festival de Talentos ‘Jóvenes capaces’ con más de 10.000 estudiantes*. El evento se desarrolla en una jornada única con 210 instituciones educativas con una participación de 132.712 estudiantes, y la jornada extendida se implementa en 305 colegios con una participación de 281.691 niños y jóvenes. Alrededor de 30 actividades se desarrollarán en estos días en torno al arte, ciencia, cultura y deporte en 10 escenarios de la ciudad.

También es el caso de la Feria de Talentos para habitantes de calle, que cuenta con la participación de más de 40 habitantes de calle de la zona norte de la capital. Se desarrolla en medio de la “Jornada de Desarrollo Personal”, en la que se realizan diferentes actividades lúdicas, pedagógicas y rumba aeróbica entre otras actividades programadas en el Centro de Desarrollo Comunitario, de la subdirección local de la Secretaría de Integración Social, en Usaquén.

Por último, como sucede con la Feria de talentos y productividad con centenarios y personas mayores de Ciudad Bolívar. El evento se realiza en el marco de la celebración del “Mes del Envejecimiento y la Vejez”, en la localidad de Ciudad Bolívar.

En ese sentido, el proyecto busca integrar a niños, niñas y adolescentes de todas las localidades de Bogotá en la participación de un evento masivo, donde tengan la oportunidad de mostrar sus habilidades y talentos. Este enfoque inclusivo pretende no solo visibilizar las capacidades de los jóvenes, sino también proporcionarles un espacio seguro y significativo para expresar su creatividad y potencial.

El propósito principal de este proyecto es incentivar el crecimiento personal y profesional de los participantes, promoviendo un sentido de pertenencia y confianza en sus propias habilidades. Al brindarles la oportunidad de ser protagonistas en un evento de gran magnitud, se les motiva a seguir desarrollando sus talentos, lo cual contribuirá positivamente a su formación integral y a la construcción de un futuro lleno de oportunidades.

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia realiza una descripción del derecho a desarrollarse desde la primera infancia con los ODS de la siguiente forma:

Los 17 ODS y sus 169 metas impactan de manera directa o indirecta en el bienestar de la infancia y su implementación representa una clara apuesta por un modelo social y político

que ponga en el centro a los niños. Además, la Agenda 2030 ayuda a ampliar la mirada hacia nuevas dimensiones del bienestar infantil asociadas con la equidad, el desarrollo económico, el medio ambiente y el cambio climático, la promoción de la paz y la protección. Garantizar el bienestar y la realización de los derechos de la infancia no es sólo un compromiso de los países que han suscrito la CDN, sino también una condición esencial para alcanzar los ODS para todos. (UNICEF, 2024)

El bienestar infantil es un pilar fundamental para el éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La implementación de la Agenda 2030 no solo refuerza el compromiso global con los derechos de los niños, sino que también subraya que sin asegurar su bienestar, es imposible lograr un desarrollo sostenible integral. Los ODS proporcionan un marco amplio que integra diversas dimensiones cruciales para el desarrollo infantil, lo que resalta la importancia de poner a los niños en el centro de las políticas y acciones globales.

- *El derecho a alcanzar el máximo potencial en la vida es igual para todos los niños y niñas del mundo.*
- *Hay contextos sociales y económicos que lo dificultan, más allá de las posibilidades de cada niño o niña y su familia.*
- *La pobreza y la dificultad de acceso a un trabajo decente impiden a muchas familias lograr un desarrollo pleno para sus hijos.*

Es importante que el distrito se acoja a la Agenda 2030 porque al hacerlo, se compromete a un conjunto de metas globales que no solo buscan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos en general, sino que también colocan un énfasis particular en el bienestar infantil. Adoptar esta agenda significa que el distrito prioriza la equidad, el desarrollo sostenible, la protección ambiental, la paz y los derechos humanos, con un enfoque especial en los niños como futuros ciudadanos. Esto no solo mejora el presente y futuro de los niños del distrito, sino que también asegura un desarrollo más equilibrado y sostenible para toda la comunidad. Además, al alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el distrito contribuye a los esfuerzos globales para combatir problemas como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, lo que tiene un impacto positivo tanto a nivel local como mundial.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”

El proceso pedagógico permite garantizar un fortalecimiento de ambientes educativos que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Esto implica contar con un equipo humano altamente cualificado que trabaje en condiciones de calidad y pertinencia, lo que asegura que cada niño y niña reciba una educación adaptada a sus necesidades y potencialidades. Un ambiente pedagógico y cultural bien diseñado no solo se enfoca en la transmisión de conocimientos, sino que también fomenta el crecimiento emocional, social y cognitivo de los NNA, creando una base sólida para su futuro desarrollo académico y personal.

Las propuestas curriculares y pedagógicas centradas en las capacidades y potencialidades de los niños y niñas son esenciales para el desarrollo de habilidades en áreas clave como el juego, el arte, la literatura y los lenguajes expresivos. Estas áreas permiten a los estudiantes explorar su creatividad, mejorar su capacidad de comunicación y fortalecer su pensamiento crítico. Así, el presente proyecto de acuerdo se alinea con las metas y propuestas del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital

2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, creando una feria de talentos con el propósito de formar individuos más completos y capaces de enfrentar los desafíos del mundo moderno:

Artículo 12. Programas del objetivo estratégico “Bogotá confía en su potencial”. *Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá confía en su potencial”:*

12.1. Programa 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. (...)

En cuanto a jornadas complementarias, se adelantará un trabajo articulado con distintos aliados, como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas, gracias al cual los niños, niñas y jóvenes de la ciudad tendrán acceso a espacios de formación artísticos y deportivos garantizando una formación integral.

(...)

16.5. Programa 36. Innovación Pública para la generación de la confianza ciudadana. (...) *Adicionalmente, en colaboración con IBO y las Secretarías de Planeación, Educación, Integración Social y Gobierno, se generarán líneas de trabajo con niños, niñas y adolescentes en espacios de cocreación y laboratorios de innovación que incentivan su participación incidente y formación en innovación pública.*

(...)

Artículo 122. Coordinación interinstitucional para la atención integral a la primera infancia. (...) *La gestión intersectorial para la atención integral tendrá como propósito orientar acciones conjuntas, articuladas e intencionadas por parte de todos los actores corresponsables en el territorio distrital, esto en función de garantizar que todos los niños y niñas entre los cero (0) y los cinco (5) años en Bogotá D.C. se vinculen en condiciones de igualdad, equidad y calidad a los distintos programas y modalidades de atención integral a la primera infancia (AIPI) de carácter oficial o privado que sean prestados por parte de la oferta del Distrito Capital o el ICBF.*

Proceso Pedagógico- *Diseño y fortalecimiento de ambientes educativos y pedagógicos que favorezcan el desarrollo de las niñas y niños con equipo humano cualificado y en condiciones de calidad y pertinencia. - Propuestas curriculares y pedagógicas centradas en las capacidades y potencialidades de los niños y niñas - Desarrollo de capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y los lenguajes expresivos. (...)*

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que

faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

VII. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

El presente proyecto no genera ningún impacto fiscal adicional, solo traza una ruta adicional dentro del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2024-2027 y el Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la cual puede llevarse a cabo con el presupuesto actual.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

H. Concejal de Bogotá D.C.
Centro Democrático

PRIMER DEBATE**“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA DE TALENTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, “BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL TALENTO INFANTIL” EN EL DISTRITO CAPITAL”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto crear la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil" como un evento de interés cultural de carácter distrital, cuyo propósito es impulsar la participación activa y la visibilización de los talentos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diversos campos artísticos, culturales, científicos y tecnológicos, promoviendo así su desarrollo integral y su reconocimiento en la sociedad.

Artículo 2. Aplicación. La Administración Distrital, en coordinación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se encargará de la organización y logística de la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil". Esta feria se llevará a cabo anualmente.

Artículo 3. Articulación con el Sector Privado. La Administración Distrital vinculará al sector privado y creará alianzas con diversos sectores, como el entretenimiento y el deporte, con el objetivo de captar ofertas educativas para los niños, niñas y adolescentes que por su talento se destaquen en la Feria.

Artículo 4. Reglamentación. La administración distrital reglamentará el presente acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación, estableciendo los espacios, tipos de actividades y participación que permitan la realización de la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil" en el Distrito Capital.

Artículo 5. Vigencia. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su promulgación.

Publíquese y Cúmplase

PROYECTO DE ACUERDO NO 388 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo establecer beneficios tributarios para los propietarios o poseedores de inmuebles comerciales afectados por la ejecución de obras públicas en el Distrito Capital de Bogotá. A través de la exención del impuesto predial durante el periodo de afectación, se busca aliviar las cargas económicas que dichas obras generan en los contribuyentes, brindando un alivio fiscal mientras persista la afectación.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

ARTÍCULO 1: *“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”*

ARTÍCULO 317. *Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. (...)*

ARTÍCULO 338: *“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”*

De orden legal:

LEY 1386 DE 2010: *por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones*

LEY 788 DE 2002: *Las entidades territoriales pueden disminuir las sanciones y simplificar*

De orden Distrital:

DECRETO 352 DE 2002 *"por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital".*

DECRETO 807 DE 1993 *"por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones".*

DECRETOS DISTRITALES 601 DE 2014 y 777 DE 2019: (...)

RECAUDA: *Registra y legaliza los recaudos de ingresos corrientes tributarios y no tributarios, recursos de capital y transferencias al D.C. a las cuentas bancarias que administra, para generar información oportuna y confiable, así como establecer la disponibilidad de los recursos.*

PAGA: *Realiza la disposición y el giro de recursos para cumplir con compromisos distritales según la orden que le imparten las entidades distritales ejecutoras.*

ADMINISTRA EL PORTAFOLIO DISTRITAL: *Realiza el manejo y negociación de las inversiones según las normas vigentes, nacionales y distritales y las políticas hacendarias."*

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La construcción de obras civiles tiene un impacto significativo en la vida diaria de los ciudadanos y comerciantes de una comunidad. Desde la planificación hasta la finalización de un proyecto de construcción, las personas se ven afectadas de diversas maneras. El propósito de este trabajo es analizar en detalle cómo estas obras impactan en la vida de los ciudadanos y comerciantes, considerando aspectos como la movilidad, el acceso a servicios, el medio ambiente, la economía local y la calidad de vida en general.

Se explorarán casos específicos de obras civiles y cómo éstas han afectado a las comunidades circundantes, destacando tanto los aspectos positivos como los desafíos y dificultades que enfrentan los residentes y los empresarios. Además, se examinarán posibles soluciones y buenas prácticas que puedan minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios para todos los involucrados con exención de impuestos al contribuyente. Este análisis permitirá comprender mejor la complejidad de las obras civiles y cómo estas influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos y comerciantes en una comunidad.

Ahora bien, en la actualidad las obras que se encuentran en ejecución no tienen un avance significativo, a pesar de haber tenido el Plan de Desarrollo de Claudia Lopez, lo único que se logró completar fue la firma de los contratos. Por tanto, este es el caso de las metas relacionadas con la construcción de espacio público y ciclorrutas, las cuales se ejecutan mayormente dentro de proyectos de intervención integral, como las

troncales y vías de la malla vial principal. En estos proyectos, se realizan obras que abarcan dentro el avance de otros proyectos. Por tanto, el progreso físico de estas metas depende de la finalización y entrega de las obras viales. En consecuencia, continuarán en ejecución al concluir la presente administración y el Plan de Desarrollo.

No Meta PDD	Meta PDD	Unidad	Meta PDD- IDU	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA PDD (corte jun-2023)	% EJECUCIÓN ACUMULADA PDD (corte jun-2023)	Proyección Ejecución (corte 2023)	% Proyección Ejecución (corte 2023)	Proyección Total Contratado PDD (31 May 2024)	% Proyección Total Contratado PDD (31 May 2024)
240	240 Conservar 1.505.155 m2 espacio público (IDU 1.405.155, UMV 1.000.000)	M2	1.405.155,00	1.295.098,56	92%	1.729.910,49	123%	1.931.303,57	137%
241	241 Construir 2.718.592 m2 espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	M2	2.718.592,00	582.950,73	21%	1.092.979,73	40%	2.910.650,69	107%
242	242 Construir o reforzar 135 Puentes peatonales	Pte P. Construido	15,00	2,00	58%	5,00	83%	26,00	107%
		Pte P. Mantenido	120,00	76,00		107,00		119,00	
376	376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	Cable	0,60	-	0%	0,02	78%	0,60	100%
		Estructuración	2,00	-		2,00		2,00	
377	377 Conservar 190 km de cicloinfraestructura (IDU 110, UMV 80)	Km ciclorrutas	110,00	61,02	55%	76,90	70%	92,96	85%
378	378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km. de malla vial (IDU938) (UMV1370)	Km-carril	938,00	678,01	72%	852,45	91%	1.008,67	108%
380	380 Construir 146 km-carril de malla vial. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	Km-carril	146,00	91,58	63%	153,07	105%	440,68	302%
381	381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura (224 IDU, 56 SDM)	Km ciclorrutas	224,00	26,38	12%	48,50	22%	170,40	76%
382	382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	Pte V. Construido	17,00	1,00	3%	6,00	52%	33,00	152%
		Pte V. Reforzado	12,00	-		9,00		11,00	
383	383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	Estrategias	0,25	-	0%	0,25	100%	0,25	100%
388	388 Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos	Cicloparqueadero	5.000,00	1.703,00	34%	4.327,00	87%	7.024,00	140%
392	392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	Km-carril	360,00	359,00	100%	378,56	105%	457,56	127%
393	393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio	Estaciones	43,00	26,00	60%	32,00	74%	42,00	98%
396	396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	Patios	6,00	3,00	50%	4,00	67%	6,00	100%
397	397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	Km	29,60	6,90	23%	16,81	57%	46,03	156%
398	398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	Km	20,00	-	0%	-	0%	20,00	100%
402	402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur	Implementación	1,00	-	67%	1,00	100%	1,00	100%
		Estructuración	2,00	2,00		2,00		2,00	
482	482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales.	%	93,59	94,78	101%	93,59	100%	93,59	100%
483	483 Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para la entidades del sector Movilidad, en el marco de la Política de MIPG.	%	84,40	91,50	108%	84,40	100%	84,40	100%

Fuente: Informe de gestión y resultados del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 2023

Frente a esta situación, en Bogotá, las obras civiles ejecutadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tienen un impacto significativo sobre la propiedad privada de los ciudadanos y comerciantes, particularmente en términos de adquisición y reubicación de predios. Durante los últimos años, el IDU ha avanzado en la compra de más de 3,800 predios para la construcción de proyectos viales estratégicos, de los cuales 2,896 ya han sido adquiridos. Estos incluyen áreas claves como la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali, que concentran un alto volumen de expropiaciones necesarias para el avance de la infraestructura de movilidad. El proceso afecta a propietarios y comerciantes, quienes deben ceder sus terrenos, en muchos casos con la promesa de compensaciones económicas basadas en avalúos comerciales.

Sin embargo, la expropiación de predios puede tener consecuencias negativas para los afectados, en particular para los pequeños comerciantes, quienes ven afectadas sus fuentes de ingresos debido a las demoliciones y alteraciones del entorno comercial. En varios casos, como en los tramos de Transmilenio, se ha reportado

una disminución del comercio local y un incremento en la percepción de inseguridad debido a la falta de planeación adecuada en la reutilización de los espacios. Estos problemas se agravan cuando los terrenos expropiados no se utilizan de inmediato, generando áreas abandonadas que empeoran la dinámica comercial y social.

El IDU ha intentado mitigar estos efectos mediante compensaciones justas y la planeación a largo plazo de los usos de los predios. Sin embargo, se requiere un esfuerzo adicional para asegurar que la adquisición de los predios, que puede afectar más de 1,300 propiedades, se lleve a cabo de manera equitativa y con planes claros para la reactivación de las zonas afectadas.

La implementación de descuentos en el impuesto predial para los inmuebles afectados por obras civiles en Bogotá es una medida viable para compensar los impactos negativos que estas intervenciones pueden generar en propietarios y comerciantes. Las obras de infraestructura, como la construcción de troncales o ampliaciones viales, a menudo implican alteraciones significativas en el entorno urbano, que pueden afectar tanto el valor comercial de las propiedades como la calidad de vida de sus residentes. Establecer descuentos en el impuesto predial para los inmuebles que se encuentran dentro de los polígonos de intervención no solo sería una forma de aliviar la carga financiera de los afectados, sino también de generar un mayor sentido de justicia en los procesos de renovación urbana.

La propuesta de descuentos en el impuesto predial se puede fundamentar en la lógica de compensación por los perjuicios temporales derivados de las obras. Durante el tiempo en que una zona está intervenida, los inmuebles suelen ver afectada su valorización debido a la reducción en la accesibilidad, el ruido y la disminución de clientes para los comercios. En muchos casos, el valor del inmueble baja mientras se realizan las obras, pero los propietarios continúan pagando un impuesto predial calculado con base en un valor catastral que no refleja estas circunstancias. Reducir este impuesto hasta la finalización de las obras permitiría equilibrar las cargas y proteger la estabilidad económica de los propietarios afectados.

Además, esta medida incentivaría un mayor apoyo ciudadano a los proyectos de infraestructura pública, los cuales, si bien son necesarios para el desarrollo de la ciudad a largo plazo, pueden enfrentar resistencia debido a los inconvenientes que causan durante su ejecución. Al ofrecer descuentos en el impuesto predial, las autoridades demostrarían una mayor sensibilidad ante las preocupaciones de la ciudadanía y contribuirían a generar una percepción más favorable de estos proyectos. Esto, a su vez, podría acelerar los procesos de adquisición de predios y disminuir las tensiones entre la Administración Distrital y los contribuyentes afectados, promoviendo una mayor colaboración en la ejecución de los proyectos de ciudad.

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Los ingresos fiscales son fundamentales para que Bogotá pueda llevar a cabo proyectos clave que impulsen el desarrollo urbano y social, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La recaudación proveniente de la tributación directa e indirecta permite a la administración distrital financiar obras de infraestructura, movilidad, espacio público y programas sociales. En los últimos años, Bogotá ha implementado acuerdos y políticas fiscales que buscan no solo mejorar la recaudación a través de los pagos de valorización, sino también garantizar que estos ingresos se inviertan en proyectos sostenibles y equitativos. Entre estas políticas destacan iniciativas que promueven el desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos a través de la modernización de la infraestructura vial, la construcción de ciclorrutas y la expansión de sistemas de transporte público más eficientes y amigables con el medio ambiente.

“Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”

“Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”

“Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países”

“De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional”

“Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”

Sin duda, los proyectos de infraestructura en Bogotá deben procurar el menor impacto posible en la calidad de vida de los ciudadanos mientras se desarrollan. Para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, al mismo tiempo, salvaguardar el bienestar de los habitantes afectados por estas obras, es necesario implementar mecanismos que proporcionen alivios fiscales. Estos alivios tributarios, como descuentos en el impuesto predial o reducciones en otros tributos locales, permitirían que los propietarios y comerciantes afectados por las intervenciones mantuvieran una estabilidad económica durante la ejecución de las obras.

Propuestas como la exoneración parcial de impuestos a quienes se vean directamente afectados por demoras, ruidos, cierres viales u otros inconvenientes temporales contribuirían a equilibrar el impacto negativo de las intervenciones urbanísticas. Este tipo de incentivos permitiría que los proyectos avanzaran de manera óptima, mitigando las tensiones entre la administración y los ciudadanos, y garantizando que la ciudad avance hacia el cumplimiento de los ODS sin sacrificar la calidad de vida de quienes habitan las áreas intervenidas.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”

ARTÍCULO 316. Alivios tributarios para obligaciones tributarias susceptibles de discusión. Reglamentado por el art. 1, Acuerdo Distrital 236 de 2024. Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios de los tributos distritales, que a la fecha de publicación del presente acuerdo tengan obligaciones tributarias en mora y respecto de las cuales no se haya proferido liquidación oficial o que, habiéndose proferido no se encuentren en firme, podrán descontar el ochenta por ciento (80%) de los intereses y sanciones causados, siempre que, a más tardar el 13 de diciembre de 2024, paguen el ciento por ciento (100%) del capital adeudado y el veinte por ciento (20%) de los intereses y sanciones causados a la fecha de pago.

Tratándose de sanciones por no envío de información, el responsable podrá descontar el ochenta por ciento (80%) del valor adeudado siempre que, a más tardar el 13 de diciembre de 2024, pague el veinte por ciento (20%) de la sanción liquidada a esa fecha. Tratándose de sanciones propuestas o determinadas por la

Administración Tributaria Distrital que no se encuentren en firme, deberá acreditarse el pago del veinte por ciento (20%) señalado en el respectivo acto administrativo.

(...)

Implementar un beneficio de exención tributaria para quienes estén al día con sus pagos incentivaría tanto el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales como la cancelación de deudas pendientes, fortaleciendo las finanzas del distrito. Esta estrategia actuaría como un incentivo directo, motivando a los contribuyentes a mantenerse al corriente para aprovechar la exoneración de ciertos tributos o parte de ellos, lo que podría aliviar su carga financiera.

Al ofrecer este tipo de incentivos, se estimularía el flujo de ingresos tributarios que son esenciales para alcanzar las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. El distrito contaría con más recursos de manera constante, lo que permitiría financiar proyectos de infraestructura, programas sociales y obras públicas, como aquellas relacionadas con el espacio público y la movilidad.

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

VII. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 7o, establece que el impacto fiscal de todo Proyecto de Acuerdo debe ser explícito y compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual en la respectiva Exposición de Motivos deberán incluirse expresamente los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional que se generaría para financiar tales costos.

Conforme lo anterior, este proyecto de acuerdo tendría un impacto fiscal toda vez que las disposiciones propuestas se refieran específicamente a beneficios tributarios mediante descuentos en el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio, lo cual afectaría el recaudo programado para las vigencias fiscales 2024-2027. En este caso, los costos relacionados con la implementación de esta iniciativa requieren

ser cuantificados y evaluados previamente por parte de la Administración Distrital. Sobre este asunto, se sugiere que la Secretaría Distrital de Hacienda pueda pronunciarse durante la discusión de esta iniciativa con el fin de conocer el respectivo impacto fiscal y el concepto previo de viabilidad de las respectivas propuestas, toda vez que esta iniciativa es competencia de la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. al tratar asuntos de carácter tributario.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

H. Concejal de Bogotá D.C.

Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 388 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer beneficios tributarios a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles comerciales afectados por la ejecución de obras públicas en el Distrito Capital de Bogotá, mediante la exención del pago del impuesto predial durante el tiempo que dure la afectación.

Artículo 2. Definición de afectación por obras públicas. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá como inmueble afectado aquel que, por motivo de la ejecución de obras públicas, enfrente limitaciones en su uso, acceso y/o aprovechamiento económico, y que cuente con una declaración de afectación expedida por la entidad competente mediante acto administrativo.

Artículo 3. Alcance. Los beneficios establecidos en este acuerdo serán aplicables a todos los inmuebles comerciales ubicados en el Distrito Capital de Bogotá que se vean afectados por obras públicas, según lo determine la autoridad competente.

Artículo 4. Procedimiento. Los propietarios o poseedores de inmuebles comerciales afectados por obras públicas deberán presentar una solicitud escrita ante la Secretaría Distrital de Hacienda para acceder a la exención del impuesto predial. Esta solicitud deberá incluir el acto administrativo expedido por la entidad competente que declare la afectación del inmueble. La Secretaría Distrital de Hacienda verificará la validez de la documentación presentada y, de cumplirse los requisitos, expedirá una resolución de exención aplicable al período fiscal correspondiente.

La Administración Distrital reglamentará los requisitos que deben acreditar los contribuyentes para acceder a esta exención.

Parágrafo. La exención se renovará automáticamente cada año mientras permanezca vigente el acto administrativo que certifique la afectación. En caso de que la situación de afectación cese, la exención será revocada de manera inmediata.

Artículo 5. Reconocimiento de exenciones. La Secretaría Distrital de Hacienda, deberá verificar si el contribuyente cumple con los requisitos para acceder al beneficio del no pago del impuesto predial unificado, siempre y cuando se encuentre al día en el pago por concepto de impuestos distritales o demás obligaciones tributarias.

Parágrafo. Los pagos efectuados antes de declararse la exención no serán objeto de devolución o compensación.

Artículo 6. Tiempo. La exención del impuesto predial será aplicable durante el período en el que la afectación permanezca vigente, conforme lo determine el acto administrativo expedido por la autoridad competente.

Parágrafo. El plazo para presentar la solicitud de exención será de 90 días contados a partir de la expedición del acto administrativo de afectación. En caso de que el solicitante no presente la solicitud dentro de este plazo, perderá el derecho a solicitar la exención para el período fiscal en curso.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 389 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROTOCOLO “PREGUNTA POR ÁNGELA” EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DISTRITALES, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y COPROPIEDADES DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y EN RIESGO DE FEMINICIDIO EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto institucionalizar el Protocolo "Pregunta por Ángela" como estrategia y mecanismo para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en establecimientos de comercio, propiedades de uso residencial sujetas al régimen de propiedad horizontal y entidades públicas distritales, proporcionando un mecanismo discreto y eficaz para solicitar ayuda en situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad.

II. SUSTENTO JURÍDICO

La aplicación adecuada y uso oportuno del Protocolo "Pregunta por Ángela" representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en el mundo, la cual tiene como objetivo principal prevenir y atender la violencia contra las mujeres en espacios de trabajo, entretenimiento y/o vivienda.

El protocolo se fundamenta en diversos marcos normativos que reflejan el compromiso del Estado colombiano con la equidad de género y la protección de las mujeres. De igual manera, en principios constitucionales y legales, como la igualdad y la no discriminación, esenciales en el Estado social de Derecho.

A continuación, se presentan los instrumentos normativos y jurisprudenciales que sustentan la expedición del presente proyecto de acuerdo distrital.

• **DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 43. “La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.”

• **BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD**

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

(...) b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; (...)

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Artículo 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia

Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género. CIM/RES. 209/98 y AG/RES. 1732.

RECOMENDAR A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

1.1. Formular políticas públicas y estrategias e implementar acciones dirigidas a promover los derechos humanos de la mujer.

1.10. Desarrollar mecanismos que permitan el fácil y oportuno acceso de las mujeres a la justicia, en particular a aquellas de menores ingresos o sin ingresos, adoptando medidas que doten de mayor transparencia, eficiencia y eficacia a la labor jurisdiccional.

• **DE ORDEN LEGAL**

Ley 51 de 1981: Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmado en Copenhague el 17 de julio de 1980.

Ley 248 de 1995: Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.

Ley 1257 de 2008: Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres:

“Art. 1 La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.”

Ley 599 de 2000: Por la cual se expide el Código Penal.

“ARTÍCULO 210A. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.”

“ARTÍCULO 206. Acto sexual violento. Modificado por el art. 2, ley 1236 de 2008. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.”

“ARTÍCULO 207. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Modificado por el art. 3, ley 1236 de 2008. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años.”

• **DE ORDEN DISTRITAL**

Acuerdo Distrital 676 de 2017: Por el cual se establecen lineamientos para prevenir la violencia basada en género y el feminicidio en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones.

*Artículo 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos para adoptar oportunamente medidas tendientes a prevenir la discriminación y **la violencia basada en género** y evitar la materialización del delito de Feminicidio; al igual que adoptar acciones para mejorar la atención integral, asistencia y protección de las mujeres víctimas de tentativa de feminicidio, y de las víctimas indirectas de este delito.*

Las medidas de prevención y atención previstas en el presente Acuerdo se desarrollarán en el marco de un sistema de alertas tempranas tomando en consideración el enfoque diferencial y territorial para brindar condiciones de igualdad y equidad en la inclusión de la mujer.

Acuerdo Distrital 828 de 2021: Por el cual se establece el diseño, la implementación, monitoreo y evaluación de un plan distrital en prevención de violencia por razones de sexo y género con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual:

ARTÍCULO 4. ACCIONES MÍNIMAS. Las entidades que forman parte de la Administración Distrital, en el marco de sus competencias y del Plan Distrital en prevención de violencia por razones de sexo y género, con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual, desarrollarán las siguientes acciones mínimas:

- 1. Incluir en sus programas de inducción y reinducción institucional la socialización y sensibilización de contenidos relacionados con la prevención de violencia por razones de sexo y género, con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual y las rutas de atención vigentes en el Distrito Capital.*
- 2. Realizar de forma periódica la socialización y sensibilización de los contenidos referidos en el numeral primero cuando las dinámicas sociales, económicas y de salud puedan exacerbar la violencia por razones de sexo y género, con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual.*
- 3. Garantizar que los servidores públicos y contratistas tengan a su disposición, para consulta permanente, la oferta institucional y las rutas de atención vigentes en el Distrito Capital, que responden a la problemática de violencia por razones de sexo y género, con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual.*
- 4. La Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco del “Modelo de empresas que Tejen y Protegen Familias”, apoyará en los procesos de prevención de violencias por razones de sexo, género, con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual, a las empresas del sector privado que así lo soliciten; así como, socializará las rutas establecidas por el Distrito para su prevención y atención.*

Acuerdo Distrital 927 de 2024: Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

Artículo 31. Estrategia para la prevención y atención del acoso sexual en el espacio público. La administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de la Mujer, conjuntamente con la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, de acuerdo con sus competencias diseñarán e implementarán una estrategia que incluya medidas específicas para prevenir y atender el acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, para la protección de las mujeres.

● JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

Sentencia SU 080/20. Exige de la totalidad de los actores que conforman la vida en sociedad, el compromiso no solamente de evitar la comisión de actos que discriminen y violenten a la mujer, sino el de adelantar acciones que en armonía con el cumplimiento de las obligaciones propias de un Estado social de derecho, generen un ambiente propicio para que de manera efectiva, la mujer encuentre en el Estado, la sociedad y en sus pares -hombres y mujeres-, la protección de sus derechos, elevados a la categoría de Derechos Humanos, como lo es precisamente el derecho a vivir libre de violencia y en general, a no ser discriminada.

Sentencia T-140/2021. Establece que las autoridades judiciales y operadores/as jurídicos/así, como quienes desarrollan su actividad en las relaciones entre particulares, deben aplicar un análisis centrado en el género al abordar y gestionar las denuncias por violencia y/o discriminación contra las mujeres.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Protocolo "Pregunta por Ángela" o “Ask for Angela” es una iniciativa diseñada para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en espacios de trabajo, entretenimiento y vivienda tanto nocturno como diurno, proporcionando un mecanismo discreto y eficaz para solicitar ayuda en situaciones de riesgo.

La campaña “Ask for Angela” se originó en el condado de Lincolnshire, en Inglaterra, Reino Unido. Consistía en colocar carteles en los baños de restaurantes, bares y discotecas dirigidos a las mujeres. Estos carteles planteaban preguntas como: “¿Estás en una cita que no está funcionando?”, “¿Tu cita de Tinder no es quien decía ser en su perfil?” o “¿Te sientes incómoda?”. La idea era que si una mujer se encontraba en una situación de riesgo o peligro, podía acercarse discretamente a la barra y preguntar por “Ángela”. El personal del local entendería que necesitaba ayuda y tomaría

medidas, como llamar a un taxi o a la policía, según la gravedad de la situación. En resumen, esta estrategia tenía como objetivo brindar una solución segura a las mujeres sin alertar a su acompañante o posible agresor.⁸

De acuerdo con Asobares (S.F), los objetivos principales que persigue la implementación del protocolo son los siguientes:

1. *“Capacitar a propietarios y personal de los establecimientos nocturnos incluidos en el proyecto acerca de la estrategia y pautas de atención para mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo de acoso o violencia física o sexual en esta zona. La capacitación será acompañada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades locales.*
2. *Implementar una campaña articulada entre las autoridades nacionales y locales, la Federación Colombiana de Municipios, la Asociación de Ciudades Capitales, y los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, con el objeto de fomentar en la comunidad comportamientos de autocuidado por medio del reconocimiento de escenarios de riesgo a su integridad en espacios de entretenimiento nocturno o diurno con expendio de bebidas alcohólicas; así como de prevención de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y de concientización sobre el respeto a su vida e integridad.*
3. *Generar una articulación entre las autoridades y entidades del orden nacional y municipal, vinculadas a la estrategia, que permitan prevenir y dar una respuesta a las mujeres que puedan estar en situaciones de riesgo en establecimientos nocturnos o diurno con expendio de bebidas alcohólicas.*
4. *Lograr que las autoridades municipales o distritales implementen el otorgamiento del reconocimiento “Sello Seguro” para establecimientos de entretenimiento y venta de bebidas y alcohólicas, teniendo como criterio el cumplimiento del protocolo “Pregunta por Ángela”.*

La seguridad de las mujeres en espacios nocturnos abiertos al público es una preocupación creciente en nuestra ciudad. La exposición a situaciones de acoso y violencia, tanto física como sexual, en estos entornos, representa un riesgo significativo para las mujeres, limitando su libertad y afectando su bienestar emocional y físico. En este contexto, la finalidad es promover comportamientos y políticas de protección que reduzcan estas situaciones de vulnerabilidad. La implementación de medidas preventivas y educativas, así como la creación de entornos más seguros, contribuirá a la anticipación de conductas violentas en contra de la mujer, sino también permitirá la mitigación de factores de riesgo al interior de este tipo de establecimientos.

Una estrategia clave para abordar este problema es diseñar y articular un protocolo de auxilio entre los sectores público y privado que apunten a la discreción, socorro y ayuda de la mujer en escenarios públicos. Estos protocolos deben ser aplicados especialmente en espacios de rumba y de entretenimiento nocturno, donde las mujeres son particularmente vulnerables. La colaboración entre las autoridades distritales, los propietarios de establecimientos y el personal es esencial para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier incidente.

Además, es crucial capacitar a los propietarios y al personal de los establecimientos nocturnos de la ciudad de Bogotá incluida en el proyecto acerca del protocolo de ayuda para mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de acoso o violencia física o sexual en esta área. La formación debe enfocarse en el reconocimiento de señales de peligro, la intervención discreta y segura, y la coordinación con las autoridades pertinentes. Al fortalecer el conocimiento y la capacidad de respuesta de quienes operan en estos espacios, se puede crear un entorno más seguro y acogedor para todas las mujeres que deseen disfrutar de la vida nocturna de manera libre y sin temor.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en colaboración con diversas entidades como la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de la Mujer, el Instituto Distrital de Turismo y la Policía Metropolitana de Bogotá, llevó a cabo un ejercicio piloto entre abril y mayo de 2022. Durante este periodo, la Secretaría Distrital de la Mujer capacitó al personal de establecimientos nocturnos en las localidades de Chapinero, Usaquén, Fontibón, Kennedy, La Candelaria y Teusaquillo. Como resultado, 300 establecimientos adquirieron el conocimiento y el compromiso necesarios para brindar apoyo y asistencia a mujeres que requieran ayuda mediante el uso de la frase “Pregunta por ANGELA”.

⁸ <https://asobares.org/pregunta-por-angela-2/>

No obstante, esta política aún no ha sido formalizada ni institucionalizada como parte de las políticas del Distrito Capital para la prevención de violencias en contra de las mujeres de manera integral y establecer un marco de corresponsabilidad entre el sector público y privado.

Por otra parte, el presente proyecto de acuerdo pretende introducir como novedad **la implementación del protocolo en las propiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal**. Como se detallará más adelante, se ha observado un incremento en los casos de violencia intrafamiliar. Este protocolo permitirá que los administradores de las copropiedades puedan recibir denuncias de manera discreta y activar las rutas de atención con las entidades correspondientes para una respuesta inmediata. Este aspecto se complementa con lo contemplado en el proyecto de ley “Por medio de la cual se reforma la Ley 675 de 2001, referente al régimen de propiedad horizontal en Colombia y se dictan otras disposiciones”, en lo que respecta a la violencia intrafamiliar, estableciendo lo siguiente:

“Artículo 58B. Protocolo violencia intrafamiliar. La Propiedad Horizontal deberá contar con un protocolo de articulación con las entidades competentes, a fin de activar la ruta cuando en la propiedad horizontal se presenten casos de violencia intrafamiliar.”

Por lo tanto, el presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo fundamental implementar el protocolo ‘Pregunta por Ángela’ en el Distrito Capital. Bajo el liderazgo de la Secretaría de la Mujer, se pretende institucionalizar y estandarizar este protocolo en el Distrito Capital, fundamentándose en la necesidad urgente de garantizar la seguridad y protección de las mujeres en estos entornos

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

A lo largo de los seis años de funcionamiento, desde su creación en Lincolnshire, el protocolo se ha ido expandiendo por el mundo gracias a la viralización en redes. Países como Francia, Argentina, Portugal, Australia o España han llevado a cabo esta campaña.

De manera innovadora en **España**, el protocolo catalán, usa tapas para vasos para prevenir que sean introducidas drogas como burundanga y pretender que las potenciales víctimas puedan estar protegidas desde el inicio y evitar que tengan que recurrir al plan ‘Ask for Angela’.

En otros países como **Argentina**, La Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina (FEDRA) ha anunciado su adhesión a la Asociación Internacional de Ocio Nocturno, incluyendo la implementación del protocolo “Ask for Angela” en locales de ocio nocturno. La FEDRA ha incorporado distintivos internacionales de seguridad y calidad, como el International Nightlife Safety Checked (INSC) y la Triple Excellence in Nightlife, destacando el compromiso con la seguridad y la excelencia en el sector. Esta medida representa un avance significativo en la prevención y protección dentro de los espacios de ocio nocturno en Argentina, siguiendo un modelo que ha sido adoptado en varios países alrededor del mundo.⁹

Por su parte, **en Francia**, la ciudad de Lyon realizó un piloto en el distrito 7, el cual resultó en la decisión de ampliar la implementación del protocolo a toda la ciudad. Esta expansión se justificó debido a que se consideró necesario el involucramiento de todos los establecimientos comerciales y una adecuada coordinación con las autoridades para transformar estos espacios en entornos urbanos seguros. Además, el gobierno local decidió proporcionar a los establecimientos un kit que incluye carteles para distribuir en sus locales y una pegatina para exhibir en sus escaparates.¹⁰ En ese sentido, se logra evidenciar que este protocolo ha sido ampliamente acogido a nivel internacional. Además, es importante destacar el apoyo brindado por los gobiernos locales para su implementación efectiva.

CIFRAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN BOGOTÁ

El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género en Bogotá (OMEG) de la Secretaría de la Mujer reveló datos sobre los delitos sexuales cometidos contra mujeres en la ciudad:¹¹

En 2024, se registraron 6,004 presuntos delitos sexuales de 136,428 presuntos delitos contra mujeres, de los cuales 617 ocurrieron en calles o vías públicas. En 2017, el número de presuntos delitos sexuales fue de 3,511, con 682 casos en espacios públicos. El número total de delitos sexuales aumentó entre estos tres años, con una variación de casi el doble de casos y se observó un aumento en las denuncias de agresiones en espacios públicos, con 65 casos más reportados.

⁹<https://www.nightlifeinternational.org/es/actualidad/item/4557-locales-de-ocio-nocturno-de-argentina-implementaran-el-protocolo-ask-for-angela-contra-agresiones-sexuales>

¹⁰ <https://www.themayor.eu/en/a/view/lyon-embraces-the-ask-for-angela-system-to-fight-street-harassment-12303>

¹¹ **OMEG - Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá.** <https://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html#>

En cuanto al transporte público, una encuesta sobre el acoso sexual realizada en 2019 reveló que¹²:

Más del 80% de las mujeres perciben el transporte público como inseguro o muy inseguro, más del 70% ha sido víctima o ha presenciado acoso sexual en los alrededores de TransMilenio.

Las formas de violencia más comunes reportadas incluyen silbidos en la vía pública, miradas lascivas y rozamientos no consentidos. El estudio también muestra que, al presenciar una situación de acoso, muchas personas no saben cómo actuar para buscar ayuda y detener la agresión:

El 29% actúa con indiferencia, reflejando la normalización de estas violencias en la ciudadanía, el 26% no actúa por miedo y solo el 4.3% avisa a las autoridades competentes.

En un estudio exploratorio realizado en mayo de 2019 en la Localidad de Kennedy, que incluyó 1,374 encuestas a mujeres mayores de 14 años, se encontró que:

El 56.2% de las mujeres comenzó a experimentar acoso entre los 11 y los 17 años y el 67.9% ha vivido alguna experiencia de acoso en los últimos 12 meses, siendo el 51.4% de estos casos ocurridos durante la noche.

De estos episodios, el 51.8% involucró miradas morbosas, el 46.1% silbidos u otros sonidos, el 38.5% comentarios sobre su aspecto físico, y el 25.3% rozamientos no consentidos. En el 69% de los casos, el acosador fue un hombre y en el 21% fue un grupo de hombres.

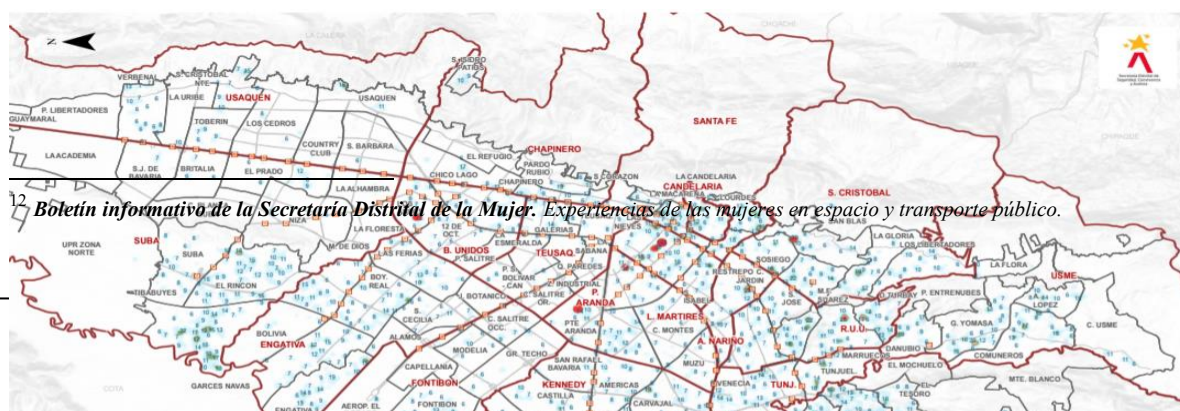
En síntesis, 7 de cada 10 mujeres han vivido alguna experiencia de acoso en el último año.

En ese sentido, en el caso particular de la Ciudad de Bogotá, donde los casos de violencia sexual, como se evidenció, son alarmantes, **resulta fundamental incorporar el protocolo dentro de las políticas dirigidas a reducir la violencia de género**

Por otra parte, la Policía Nacional por medio del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo – SIEDCO el cual documenta los hechos delictivos como violencia intrafamiliar, lesiones personales y otras conductas punibles registró en un periodo del 01 de enero al 30 de junio de los años 2023 y 2024 los siguientes datos relacionados con violencia doméstica y lesiones personales, buscando en ese sentido analizar la frecuencia de estos hechos en Bogotá.

La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier tipo de abuso, maltrato o agresión que ocurre dentro del entorno familiar. Puede manifestarse en diferentes formas, incluyendo física, emocional, psicológica, sexual y económica. Esta violencia puede ser ejercida entre miembros de una misma familia, como parejas, padres e hijos, hermanos, u otros parientes que conviven en el mismo hogar. El SIEDCO registró un aumento de 114% de violencia intrafamiliar en Bogotá con una variación absoluta de 15.156 hechos, es decir que para el 2024 se presentaron 28.448 casos y en el 2023 se registraron 13.292 hechos, las localidades con mayor participación son Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias para las víctimas, tanto a corto como a largo plazo, afectando su bienestar físico y emocional. El incremento de estos casos en la Ciudad Capital refleja la falta de herramientas de prevención y atención dispuestas por las autoridades.

Las lesiones Personales en Bogotá tienen un comportamiento orientado al incremento, pues se presentó un aumento de 1.647 casos según la Policía Nacional, siendo las localidades de Kennedy con 1302 casos, Ciudad Bolívar con 996 y Suba con 911 las que mayor frecuencia de violencia presentan. Las lesiones personales refieren a cualquier tipo de daño físico que una persona sufre como resultado de la acción violenta ejercida por un tercero, sin embargo, las modalidades más recurrentes en este delito son las riñas y el atraco. Finalmente, en el siguiente mapa entregado por la Oficina de Análisis y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia se puede observar como los casos de riñas con resultados violentos se expanden por todo Bogotá.



IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En diversos encuentros comunitarios de seguridad ciudadana, se ha expresado la necesidad de implementar medidas que reduzcan la violencia dirigida hacia las mujeres en nuestra ciudad. Asimismo, se busca garantizar espacios seguros donde las mujeres puedan desenvolverse sin temor a vulneraciones de sus derechos.

Por otro lado, durante mesas con la comunidad, se ha identificado que muchas mujeres han sido víctimas dentro de establecimientos nocturnos, en su trabajo o en su propia vivienda. En respuesta a esta problemática, la ciudadanía ha solicitado una intervención efectiva por parte de la administración distrital para prevenir estos riesgos y proteger los derechos y libertades de las mujeres.

En consecuencia, es fundamental la expedición del presente proyecto de acuerdo, por cuanto el objetivo consiste en implementar en el Distrito Capital el “Protocolo Soy Ángela”, el cual busca prevenir la violencia contra las mujeres en los establecimientos de comercio dedicados a la venta y consumo de alcohol, consolidando un mecanismo discreto y eficaz para solicitar ayuda en situaciones de riesgo.



V. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

VI. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Para la institucionalización del Protocolo "Pregunta por Ángela", se considera que esta iniciativa no tiene un impacto fiscal. En primer lugar, los costos asociados a la capacitación del personal y la promoción del protocolo pueden ser absorbidos dentro de los presupuestos existentes de las secretarías competentes. Las capacitaciones pueden ser diseñadas y ejecutadas por entidades distritales que ya cumplen con la función y la asignación presupuestaria, como las Secretarías de la Mujer, lo cual no limita a la necesidad de nuevas asignaciones presupuestales.

VII. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

El incremento reflejado en la cifras, en el número total de delitos sexuales, que casi se ha duplicado en siete años, pone de manifiesto una tendencia preocupante de violencia sexual contra las mujeres. La disminución en los casos reportados en espacios públicos, con 65 incidentes menos en 2024 en comparación con 2017, no minimiza la gravedad del problema. En lugar de ello, sugiere que de manera prospectiva se deben disminuir a 0 los casos reportados en espacios públicos, con medidas tendientes a proteger a las mujeres en espacios de entretenimiento nocturno, donde las mujeres pueden sentirse seguras a la hora de disfrutar de estos espacios.

De esa manera, el proyecto se alinea con el **objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, meta 2:**¹³ *Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.*

Así las cosas, el presente proyecto de acuerdo, es una iniciativa destinada a prevenir y atender la violencia contra las mujeres en establecimientos de comercio dedicados al consumo y expendio de bebidas de alcoholicas o embriagantes con la finalidad de sentar las bases de un desarrollo sostenible para las mujeres en el Distrito Capital.

VIII. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO.

El Plan de Desarrollo Distrital (PDD) de Bogotá “Bogotá Camina Segura” para el periodo 2024-2027 establece en el objetivo no. 1 “Bogotá avanza en seguridad”, específicamente en el Programa 2. “*Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género*”, la obligación a cargo de la administración distrital de fortalecer la articulación de los sectores públicos y privados, para que en el marco del principio de corresponsabilidad, se establezcan acciones que permitan garantizar adecuadamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

Adicionalmente, para la consecución de dicho objetivo la Administración Distrital buscará implementar estrategias integrales de prevención y cambio cultural, junto con una atención completa a las víctimas, con el propósito de garantizar que las mujeres, considerando sus diferencias y diversidades, tengan acceso oportuno y gratuito a servicios especializados y de calidad, desde una perspectiva de género, derechos y enfoque diferencial.

En ese sentido, en el Plan Distrital de Desarrollo se incorporó el artículo 31 el cual funciona como norma instrumental para la materialización de dicho programa:

Artículo 31. Estrategia para la prevención y atención del acoso sexual en el espacio público. La administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de la Mujer, conjuntamente con la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, de acuerdo con sus competencias diseñarán e implementarán una estrategia que incluya medidas específicas para prevenir y atender el acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, para la protección de las mujeres

¹³ **Objetivos de Desarrollo Sostenible; Organización de las Naciones Unidas.** Recuperado de: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/>

Lo anterior, se correlaciona de forma inescindible con el objeto del presente proyecto de acuerdo ya que lo que se pretende es impulsar una estrategia reconocida internacionalmente que permite la prevención de las violencias hacia las mujeres en establecimientos de comercio dedicados al consumo y expendio de bebidas alcohólicas. De esta forma, se propicia la articulación de los sectores públicos y privados en aras de garantizar entornos seguros en los que se logre una reacción oportuna y se promueva cero tolerancia a las violencias contra las mujeres.

PROYECTO DE ACUERDO NO 389 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROTOCOLO “PREGUNTA POR ÁNGELA” EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DISTRITALES, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y COPROPIEDADES DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y EN RIESGO DE FEMINICIDIO EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Concejo de Bogotá, D.C.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

Artículo 1: Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto institucionalizar el Protocolo "Pregunta por Ángela" como estrategia y mecanismo para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en establecimientos de comercio, propiedades de uso residencial sujetas al régimen de propiedad horizontal y entidades públicas distritales, proporcionando un mecanismo discreto y eficaz para solicitar ayuda en situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad.

Artículo 2: Aplicación. El Protocolo "Pregunta por Ángela" se aplicará en los establecimientos de comercio de Bogotá, especialmente en bares, discotecas, restaurantes, gastrobares, clubes y otros lugares donde se presten servicios de ocio y recreación, en las entidades públicas del distrito y en las copropiedades de Propiedad Horizontal.

Artículo 3. Propiedad Horizontal. El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) en colaboración con la Secretaría Distrital de la Mujer definirá la implementación del protocolo “pregunta por Ángela” en las propiedades de uso residencial sujetas al régimen de propiedad horizontal con el fin de activar la ruta cuando se presenten casos por situaciones de riesgo o violencia intrafamiliar.

Artículo 4: Capacitación. La Secretaría Distrital de la Mujer en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia capacitarán a los propietarios, administradores y trabajadores de los establecimientos que trata el Artículo 2, acerca de la implementación y aplicación efectiva del Protocolo "Pregunta por Ángela" y de las rutas distritales de atención a mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio.

Artículo 5: Material informativo. La Secretaría Distrital de la Mujer propenderá por suministrar afiches, carteles y/o pegatinas alusivas al Protocolo “Pregunta por Ángela” a aquellos establecimientos capacitados, los cuales deberán ubicarse en lugares estratégicos facilitando así la activación del protocolo.

Artículo 6: Registro de Casos. Cada propietario o administrador de los establecimientos de comercio y de propiedad horizontal que cumpla con los parámetros de capacitación y material informativo, será provisto de una herramienta por la administración distrital, en la cual deberán consignar los hechos ocurridos que llevaron a la activación del Protocolo "Pregunta por Ángela", así como las acciones implementadas para la atención de la mujer víctima.

Artículo 7: Certificación por la Secretaría de la Mujer. La Secretaría Distrital de la Mujer certificará a los establecimientos de comercio, entidades públicas distritales y copropiedades de Propiedad Horizontal que implementen el Protocolo "Pregunta por Ángela" conforme a las normas y parámetros establecidos en el presente Acuerdo, como establecimientos comprometidos con la prevención y atención de la violencia de género.

Parágrafo: La certificación será otorgada previa verificación de que el establecimiento cuenta con la información visible del protocolo, ha capacitado adecuadamente a su personal, y mantiene registros adecuados de los casos y acciones implementadas conforme a lo establecido en el Artículo 6 del presente acuerdo.

Artículo 8. Publicidad. La Secretaría Distrital Mujer implementará una estrategia de publicidad destinada a poner en conocimiento de la ciudadanía el protocolo “pregunta por Ángela” así como también los nombres de los establecimientos de comercio que hayan obtenido la certificación correspondiente.

Artículo 9: Reglamentación. La administración distrital reglamentará el presente acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su promulgación, estableciendo los procedimientos y lineamientos específicos para la implementación efectiva del Protocolo "Pregunta por Ángela".

Parágrafo: Dentro la reglamentación, la Administración distrital establecerá los beneficios para aquellos establecimientos de comercio debidamente certificados que cumplan con las disposiciones del presente acuerdo.

Artículo 10: Vigencia. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los ____ días del mes de ____ del año 2025

Atentamente,

H.C JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 390 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS Y SOCIALES OTORGADOS POR EL DISTRITO CAPITAL A AQUELLOS CIUDADANOS BENEFICIARIOS QUE ESTÉN SIENDO INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS O CONTRAVENCIONES EN EL MARCO DE UNA MANIFESTACIÓN PÚBLICA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto la suspensión de beneficios educativos y sociales otorgados por el Distrito Capital a aquellos ciudadanos beneficiarios que estén siendo investigados por la comisión de delitos o contravenciones en el marco de una manifestación pública.

SUSTENTO JURÍDICO DEL PROYECTO

ORDEN CONSTITUCIONAL

Constitución política de Colombia

- Art. 2: *“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”¹⁴

- Art 13: *“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”¹⁵*

¹⁴ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 2.

¹⁵ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 13.

- Art. 15: *“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.”*¹⁶
- Art. 16: *“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.”*¹⁷
- Art. 29: *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.”*
- Art. 58: *“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.”*¹⁸¹⁹
- Art. 95, numeral 8: *“... Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano ...”*²⁰

Bloque de Constitucionalidad

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: *“Art. 17: 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”*²¹
- Pacto de San José: *“Art. 21: Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes (...) 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.”*²²

Jurisprudencia

- Sentencia C-024-94: *“La policía, en sus diversos aspectos, busca entonces preservar el orden público. Pero el orden público no debe ser entendido como un valor en sí mismo sino como*

¹⁶ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 15.

¹⁷ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 16.

¹⁸ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 58.

¹⁹ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 29.

²⁰ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 95.

²¹ Organización de las Naciones Unidas, (1996), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

²² Convención Americana sobre Derechos Humanos, (1978), Pacto de San José.

el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. El orden público, en el Estado social de derecho, es entonces un valor subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo cual el fin último de la Policía, en sus diversas formas y aspectos, es la protección de los derechos humanos. Estos constituyen entonces el fundamento y el límite del poder de policía. La preservación del orden público-lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es entonces compatible con el ideal democrático, puesto que el sentido que subyace a las autoridades de policía no es el de mantener el orden a toda costa sino el de determinar cómo permitir el más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas sin que ello afecte el orden público.”²³

- Sentencia C-742-12: “*La Constitución rechaza expresamente el uso de la violencia dentro del marco del Estado de derecho. Cuando existen instrumentos idóneos para expresar la inconformidad, como el estatuto de la oposición, la revocatoria de mandato, el principio de la soberanía popular, el control de constitucionalidad, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares, o las manifestaciones pacíficas, pierden sustento los posibles motivos usados para legitimar la confrontación armada o las actitudes violentas de resistencia a la autoridad. Para la Corporación.”²⁴*
- Sentencia T-009-92: “*los correctivos a las fallas en el manejo del poder político tienen que ser de derecho y no de hecho. La vía de hecho no puede, bajo ningún aspecto, conducir al restablecimiento del orden, no sólo por falta de legitimidad in causa para ello, sino porque siempre es, dentro del Estado de Derecho, un medio inadecuado, desproporcionado y generador de desorden.”²⁵*
- Sentencia C-009-18: “*se debe resaltar que el artículo 37 de la Constitución somete la protección de estos derechos en la esfera pública a condiciones pacíficas, lo cual excluye su ejercicio a través de medios violentos. Así, además de los mencionados elementos que son aplicables al artículo 37 de la Constitución (subjetivo, temporal, finalístico y real), el ejercicio de estos derechos solo se permite en esas condiciones. En concordancia, cabe enfatizar en que el elemento finalístico reseñado, exige la licitud del objetivo de la reunión o manifestación, lo cual refuerza la condición de que los derechos se ejerzan de forma pacífica. Tal condición constituye un presupuesto del goce de estos derechos que implica que la violencia, sin importar en qué momento se produzca, si como un exceso a lo que comenzó en*

²³ Corte Constitucional, 27 de enero de 1994, C-024, Colombia.

²⁴ Corte Constitucional, 26 de septiembre de 2012, C-742, Colombia.

²⁵ Corte Constitucional, 22 de mayo de 1992, T-009, Colombia.

términos pacíficos o como el objetivo de una manifestación particular, escapa de la garantía de los derechos, al salirse de su contorno material.”²⁶

ORDEN LEGAL

- Ley 388 de 1997: *Art. 1 Numeral 3: “Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.”²⁷*
- Ley 84 de 1873: *“Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales.”²⁸*
- Ley 1801 de 2016: *“Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o rural tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura... Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente.”²⁹*

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Las manifestaciones sociales son un medio de libre expresión que refleja la voluntad de la ciudadanía. Por lo general, estas expresiones se llevan a cabo siguiendo principios éticos y buenas costumbres; sin embargo, en ocasiones suelen tornarse en escenarios de violencia. Ante ello, resulta necesario que la administración intervenga para establecer límites con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudad y la integridad de sus habitantes.

²⁶ Corte Constitucional, 7 de marzo de 2018, C-009, Colombia

²⁷ Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones, No. 388 de 1997 (julio 18).

²⁸ Código Civil de los Estados Unidos De Colombia, No. 84 de 1873 (mayo 26).

²⁹ Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, No. 1801 de 2016 (julio 29).

El derecho a la protesta o manifestación pacífica cuenta con protección constitucional, sin embargo, las acciones que tienen como consecuencia prácticas violentas, con el supuesto propósito de hacer el reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reprochable, no vinculan estos propósitos a la misma protección. Así lo ha manifestado la Corte Constitucional en sentencia T-122-17:

*“Para la Corte, nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma. Este principio no tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico. No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a su naturaleza de regla general del derecho, al derivarse de la aplicación de la analogía iuris.”*³⁰

Se considera entonces, desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional, que reconocer un beneficio económico en favor de un estudiante que de alguna manera haya podido causar un daño al patrimonio público y/o los bienes jurídico-tutelables (como conducta reprochable), resultaría desproporcionado y contrario a los fines constitucionales e institucionales que en su autonomía persiguen los programas académicos y sociales a cargo de las entidades distritales.

Históricamente, el derecho a la manifestación pacífica ha sido utilizado como una herramienta para generar impactos positivos frente a situaciones inciertas o acciones cuestionables por parte de la Administración Pública. Este derecho se ejerce en respuesta al exceso de poder de algunas entidades, su inactividad o la impopularidad de sus decisiones. Con motivos válidos y fundamentados, ciudadanos, simpatizantes, acompañantes, víctimas y observadores organizan reuniones para expresarse en las calles, plazas, parques, monumentos e instituciones. Su objetivo es hacer oír sus voces de manera pacífica, con el fin de evidenciar las acciones o inacción de la Administración frente al Gobierno Nacional o ante la comunidad internacional.

Pese a lo anterior, en Colombia han existido diversas manifestaciones que, bajo el pretexto del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, derivaron en escenarios violentos que ponen en riesgo a los ciudadanos. Un ejemplo de ello se constata en las manifestaciones denominadas popularmente como “*paro nacional 21N*”, realizadas de manera discontinua, entre los años 2019 y 2020, donde se evidencia cómo el ejercicio de la libre expresión fuera de los límites normativos, puede resultar en hechos violentos que se encuentran deslegitimados de protección constitucional;

Así mismo, las protestas ocurridas en el año 2021 denominadas “el estallido social”, desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de turno, llevó a los ciudadanos organizados, a salir a las calles para manifestarse en contra de lo propuesto en su momento. Sin embargo, ejecutando acciones que van en contra de la ley y el respeto sobre los bienes públicos y privados, algunos de los participantes de estas manifestaciones realizaron actos vandálicos, que resultaron en daños a nivel nacional, expuestos de la siguiente forma:

³⁰ Corte Constitucional, (2017), T-222.

“AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA:

- 151 infraestructuras gubernamentales.
- 28 peajes.
- 4 básculas de pesajes.
- 25 bienes culturales.
- 150 cámaras de seguridad.
- 55 cámaras de foto multa.
- 111 semáforos.
- Afectación a 679 instalaciones policiales.
- 536 vehículos policiales.
- 438 establecimientos comerciales privados.
- 456 oficinas bancarias.
- 1201 vehículos de transporte público.
- 236 estaciones de transporte público.
- 21 motos particulares.
- 91 estaciones de servicios.
- 432 cajeros automáticos.

Finalmente, en Bogotá, el sistema de transporte público Transmilenio, ha llegado a quedar afectado en un 44% con 103 de sus 139 estaciones inhabilitadas por "acción criminal", según el reporte del Ministerio de Defensa. [Reparar los daños causados puede tomar 6 meses o más, con un costo que tendrán que pagar todos los ciudadanos de más de US\$5 millones y medio de dólares, dice el reporte].”³¹ (negritas fuera del texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto de acuerdo pretende desincentivar las acciones violentas que se realicen con ocasión al ejercicio del derecho de manifestación constitucionalmente protegido, así como también busca evitar la ocurrencia de daños en el patrimonio privado y público de los ciudadanos, propender por el cuidado de la vida de aquellos participantes que pretenden ejecutar de forma legítima su manifestación pacífica y de aquellos que no están involucrados. Por último, garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos, que por fuera de estos acontecimientos continúan con sus trabajos, sus obligaciones y demás actividades que permean la esfera de la tranquilidad.

Este proyecto de acuerdo no pretende reducir la validez que tiene el derecho de manifestarse pacíficamente, y realza a aquellos que a través de estos mecanismos pretenden hacer sus pronunciamientos hacia la Administración Pública de forma pacífica, tal como está implícito en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia:

³¹ Daños y pérdidas económicas por el paro nacional en Colombia, (junio 11), CNN Latinoamérica, 2021.

“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.”³²

Sin embargo, los derechos no tienen la connotación de absolutos en el marco del Estado Social de Derecho. La Procuraduría General de la Nación se ha referido frente a la posición que ha de tener una manifestación pacífica:

“Finalmente, recordó que los derechos de reunión, manifestación y protesta deben ser ejercidos de forma pacífica, por lo que la necesidad de la asistencia militar surge cuando durante el ejercicio de esos derechos se presentan hechos de violencia de nivel tal que atenten contra el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Además, la normatividad referente a la figura que se cuestiona [no tiene como objetivo la regulación integral, estructural y completa de un derecho fundamental, ni se refiere a la afectación o el desarrollo de los elementos estructurales de alguna prerrogativa concreta.]”

Tal y como se ha establecido, los límites de la manifestación pacífica son necesarios para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la sociedad. En el contexto del año 2021, se llevaron a cabo un total de 14.175 actividades de manifestación en todo el país, incluyendo 7,415 concentraciones, 2.475 marchas, 3.567 bloqueos y 678 movilizaciones. Estas cifras reflejan la diversidad de formas en que los ciudadanos ejercen su derecho a la protesta y expresan sus preocupaciones y demandas en diferentes contextos y situaciones. Sin embargo, también subrayan la necesidad de establecer límites claros y efectivos para garantizar que estas manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y segura, evitando la escalada hacia la violencia y protegiendo los derechos y la integridad de todos los involucrados.

Durante lo corrido de la jornada de manifestación pública, se han registrado **14.175*** actividades en **860** municipios de 32 departamentos y Bogotá.

7.415
Concentraciones

2.475
Marchas

3.567
Bloqueos

678
Movilizaciones

40
Asambleas

* FUENTE: POLICÍA NACIONAL. CORTE 27 DE JUNIO.



CLASES DE MODALIDAD DE PROTESTA - ACTIVIDADES

Concentración: Aglomeración de más de 5 personas. **Marcha:** Desplazamiento de personas a pie. **Bloqueo:** Afectación a ejes viales. **Movilización:** Desplazamiento de personas en vehículos. **Asamblea:** Menos de 5 personas aglomeradas en un lugar.

Ministerio de Defensa Nacional (2021)

En ese contexto, es necesario advertir que la intervención de la Fuerza Pública es imperativa cuando existen medios ilícitos o conductas punibles, que rompan el nexo causal con el derecho fundamental

³² Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 15.

a la libre expresión; hay que entender entonces que la intervención de la Fuerza Pública, es un elemento que busca armonizar los intereses en juego, tal como lo señala la Corte Constitucional sobre las tensiones que se pueden producir y cómo se deben intervenir. A pesar de ello, en el lapso referenciado, se constataron afectaciones a la vida y libertad sobre miembros de la fuerza Pública ocurridos en el marco de las protestas:

AFECTACIONES A LA POLICÍA NACIONAL

Uniformados Fallecidos

1. Hombre, en Soacha, con arma cortopunzante.
2. Hombre, en Cali, con arma de fuego.

Uniformados Lesionados

- 1477 uniformados lesionados
 - ❖ 1414 hombres.
 - ❖ 63 mujeres.
 - ❖ 3 continúan hospitalizados.

Uniformados secuestrados

- 13 uniformados secuestrados (CPC art. 168. Secuestro simple) y retenidos en el Valle del Cauca.

Fuente:Elaboración propia a partir de la Policía Nacional, corte 27 de junio.

Los hechos de violencia registrados durante las manifestaciones del 2021 evidencian la necesidad latente de establecer determinados desincentivos a los actos violentos y delictivos que ocurren en el marco de las manifestaciones, que lejos de ser pacíficas, han dejado no sólo afectaciones a la población y a bienes públicos y privados, sino también a los miembros de la fuerza pública.

ALCANCES DE LA INICIATIVA

NECESIDAD DE GARANTIZAR EL RESPETO A LOS LÍMITES DEL DERECHO A LA PROTESTA

Las manifestaciones pacíficas como hecho natural de la sociedad, amparadas constitucionalmente como forma libre de expresión de la personalidad, incluida en la Constitución Política como derecho fundamental, debe ser garantizada para ejercer su libre ejercicio. A pesar de esto, este derecho no puede entenderse como absoluto, sobre todo cuando la legitimidad es sobrepasada por las acciones violentas que perjudican la esfera de los bienes jurídicos sobre los demás ciudadanos. Para tal fin,

este Proyecto de Acuerdo tiene como alcance la reducción de hechos violentos, daños al patrimonio, reducción de hechos lamentables como muertes o heridos, y en general, cualquier detrimento que afecte a los ciudadanos del Distrito Capital.

El mecanismo por el cual se desarrolla el objetivo de este Proyecto de Acuerdo, es la suspensión de los beneficios educativos que ofrece el Distrito Capital, únicamente para aquellos que afecte la integridad física o patrimonial con hechos violentos a los ciudadanos de Bogotá D.C. Esta suspensión, por lo tanto, no debe ser vista como una consecuencia que elimine los derechos adquiridos de los beneficiados, si no como un mecanismo que desincentive a los manifestantes para que realicen actos contrarios a la Constitución Política, el Código Penal y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

El proyecto de acuerdo se centra en la necesidad de establecer una metodología con criterios diferenciados para la selección de candidatos o para la suspensión de becas asignadas a programas que conceden beneficios económicos a individuos involucrados en procesos penales o policivos. Esta medida se aplicaría específicamente a aquellos casos que están estrechamente relacionados con la afectación de bienes públicos, ya sean materiales o inmateriales, con el propósito de fomentar la excelencia y la integridad en el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, siempre respetando los derechos de los demás ciudadanos.

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es necesario considerar la diferenciación entre dos grupos sociales que cumplen con todos los requisitos legales y reglamentarios para ser beneficiarios de estas becas, y que de manera paralela, se busca impedir la participación en las convocatorias o suspender el otorgamiento de las becas a aquellos individuos con antecedentes penales o policivos. Por lo tanto, el proyecto de acuerdo trata de una suspensión que limita la oportunidad de aspirar a la beca, pero no el derecho a recibirla una vez cumplidos los requisitos establecidos

(...) otros bienes constitucionales autorizaban para que ese grupo de personas cuya falta de suficiencia profesional ha sido demostrada en sede disciplinaria o penal tuvieran un trato distinto. No se entiende por qué un integrante de ese grupo tiene igual derecho a aspirar a acceder a unos recursos del Estado que el que tiene el grupo de profesionales cuya condición profesional no ha sido puesta en tela de juicio, cuando se trate de acceder a estudios que tengan que ver específica y puntualmente con el tipo de calidad profesional que requiere la clase de posgrado a cuya financiación se aspira. (Corte Constitucional, C-552 de 2016)

Es crucial reconocer que el acceso a recursos públicos para la educación superior no es un derecho absoluto, sino un privilegio que debe ser otorgado con responsabilidad y criterio. De esta manera, al establecer criterios diferenciados basados en la evaluación de la competencia profesional, se garantiza no solo la igualdad de oportunidades, sino también la excelencia académica y la integridad ética en la práctica profesional. En última instancia, esta medida contribuye a fortalecer la confianza en las

instituciones educativas y en el sistema de justicia, promoviendo una sociedad más justa y equitativa para todos sus miembros.

(...) en principio presentar antecedentes penales y/o disciplinarios no es razón suficiente para vedar el acceso a becas de estudios superiores, más ello, supone en casos concretos excepciones prohijadas por la Constitución. Mal puede avalarse con recursos estatales y a modo de premio la cualificación de un profesional que ha demostrado que el ejercicio de su experticia se realiza por fuera de la ley, en detrimento de otros y a despecho de valores superiores. (C-552-2016)

El acceso a los recursos del Estado para la formación académica debe considerar no sólo la igualdad formal, sino también la equidad sustantiva. Es decir, aquellos individuos cuya suficiencia profesional ha sido cuestionada en sede disciplinaria o penal, deberían ser evaluados de manera diferenciada al momento de acceder a fondos públicos destinados a programas educativos o sociales que guarden una relación directa con la afectación y su idoneidad. Esta medida no solo garantiza la idoneidad de los beneficiarios, sino que también promueve la excelencia y la integridad en el ejercicio de las profesiones.

El carácter de derecho–deber entre ,estudiante e institución, implica que genera obligaciones entre las partes del proceso educativo. Así, el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y ampliar su cobertura progresivamente, las instituciones educativas deben respetar los derechos de los estudiantes y asegurar la continuidad del servicio, y los estudiantes deben respetar sus reglamentos. De allí se deriva que la obligación de garantizar la prestación del servicio educativo no sea absoluta, sino que dependerá, entre otras cosas, del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los estudiantes.

Las conductas de los estudiantes deben reflejar los principios que promueven el crecimiento educativo a través de una beca, la cual se otorga en consonancia con los principios del Estado Social de Derecho. En la práctica, el distrito encargado del proceso formativo de los estudiantes debe establecer las reglas que mejor concreten estos derechos sin coaccionar la conducta del estudiante. En otras palabras, un estudiante siempre tiene la oportunidad de expresarse, respetando las normas legales, ya que el objetivo principal del Estado es formar al estudiante de manera correcta para que en el futuro pueda contribuir positivamente a la sociedad.

En consecuencia, si bien es cierto que las instituciones educativas pueden imponer sanciones por determinadas conductas que incumplen con el reglamento institucional, cuando una sanción afecta la continuidad de la formación académica, es fundamental respetar rigurosamente las garantías del debido proceso. Esto se debe a que el derecho a la educación incluye la potestad de reclamar acceso al sistema educativo y permanecer en él. En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de continuidad asegura la prestación efectiva y la permanencia del servicio público de educación: “*el núcleo esencial del derecho a la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo [...] así como de permanecer*

en el mismo”³³, por lo que cualquier interrupción debe estar debidamente justificada para no vulnerar el derecho fundamental a la educación.

Las entidades distritales, al proceder con la declaración de suspensión, no vulneran el derecho a la educación, dado que la suspensión no implica negar la posibilidad de permanecer en la institución educativa ni se trata de una decisión arbitraria por parte de las entidades. Más bien, es una consecuencia del incumplimiento de los deberes correlativos hacia la institución, la comunidad educativa y la sociedad, derivado de conductas que puedan afectar los bienes jurídicos protegidos por la ley y la Constitución, cumpliendo con las garantías procesales que determine la entidad.

Las conductas delictivas realizadas durante manifestaciones sociales constituyen una transgresión de los deberes sociales, lo que justifica la aplicación de una sanción. Sin embargo, esta sanción no compromete el principio de permanencia y acceso a la educación. El objetivo principal de la sanción no es suspender las actividades estudiantiles o formativas, sino suspender el beneficio económico mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Por último, las entidades distritales, tienen ciertas facultades para concretar el acto educativo a través de beneficios, becas y cupos, que las distinguen entre sí y que responden a la pluralidad de visiones que circulan en la sociedad. Estas facultades están asociadas, en general, a la regulación de la relación entre los miembros de la comunidad académica y a la proyección institucional, mediante la fijación de valores y principios por desarrollar. Cada entidad puede disponer su propio sendero educativo en el marco de la Constitución y la ley. Ello asegura la diversificación de la oferta educativa, que no es otra cosa que la afirmación de la libertad de pensamiento y la libertad de asociación en algunos casos. Bajo esa misma facultad, con el objetivo de cumplir con los propósitos educativos que dieron lugar a los programas de beneficios, becas y cupos en consonancia con la ley, podrán ser suspendidos en determinadas situaciones siempre y cuando se adelante un procedimiento específico: “(…)la permanencia en el sistema educativo no es un derecho absoluto. Lo anterior significa que, por tratarse de un derecho-deber, está de cierto modo determinado por los derechos y las obligaciones que tiene el estudiante y por los exámenes de calidad de la educación o similares. El incumplimiento de los deberes por parte del estudiante habilita a las autoridades para tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso.”(Corte Constitucional, T-177-22)

ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL

El artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente:

³³ Corte Constitucional T-453-22: Si bien es cierto que las instituciones educativas pueden imponer sanciones ante el incumplimiento del reglamento por parte de sus estudiantes, cuando la sanción en cuestión afecta la continuidad de la formación académica, debe haber un respeto riguroso a las garantías al debido proceso. Lo anterior, puesto que “el núcleo esencial del derecho a la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo [...] así como de permanecer en el mismo(…)”

“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.”³⁴

Esta propuesta no tiene un impacto financiero o fiscal que requiera cambios en el marco fiscal a mediano plazo, ya que no aumentará el presupuesto del Distrito ni dará lugar a la creación de una nueva fuente de financiamiento. Las disposiciones de este proyecto serán cubiertas por el presupuesto de las entidades pertinentes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con el fin de promover la participación ciudadana, en distintas manifestaciones pacíficas de la ciudadanía, los participantes radicados en el Distrito Capital han manifestado la necesidad de imponer límites a aquellos que participan en las protestas, donde existan mecanismos de control para las acciones violentas propiciadas por algunos individuos.



Por otro lado, en mesas técnicas para escuchar a la ciudadanía se ha identificado que muchos ciudadanos con establecimientos de comercio, se han visto perjudicados por las acciones desafortunadas de los manifestantes, ocurridas en 2019, 2020 y 2021; en este sentido, han solicitado una intervención de la administración pública para establecer límites en las manifestaciones públicas, donde se vea una acción efectiva que permita disminuir los riesgos sobre los bienes públicos y

³⁴ Ley de Presupuesto, Responsabilidad y Transparencia Fiscal, No. 819 de 2003 (Julio 9).

privados, así mismo, que pueda haber una reducción en los heridos de las manifestaciones debido a la violencia que se desarrolla por motivos de intolerancia.

En conclusión, se hace imperativa la realización de un Proyecto de Acuerdo que establezca las garantías sobre el respeto del derecho a la manifestación pacífica, a través de un mecanismo que pueda reducir el interés o el número de acciones violentas durante cualquier tipo de manifestación o protesta.

RELACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Este Proyecto de Acuerdo pretende cumplir y tener conexidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente, con el objetivo No. 16: “Paz, Justicia e Instituciones sólidas” en el que se busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, donde los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia suponen una amenaza; siendo así, es elemental que se construyan mecanismos que disminuyan o desincentivan las acciones violentas y se benefician las comunidades que pretenden movilizarse o protestar por cualquiera de sus iniciativas, del mismo modo, que los ciudadanos del Distrito Capital que no guarden nexos con alguna manifestación no vean afectados sus bienes jurídicos como la vida. Al priorizar este Proyecto de Acuerdo, no solo se pretenden suspender los beneficios educativos a los infractores de la Constitución Política y las normas, también realiza una construcción institucional para fomentar el fortalecimiento de las instituciones, y la guarda de la vida, como hecho generador de los demás derechos a los que son acreedores todos los ciudadanos. Desincentivar las acciones o manifestaciones violentas respalda la Paz y la justicia sobre los ambientes pacíficos de participación ciudadana de todos los ciudadanos del Distrito Capital.

RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

El presente Proyecto de Acuerdo se fundamenta con base en los propósitos establecidos del Plan Distrital de Desarrollo (*Acuerdo 761 de 2020*), en especial, lo redactado en el propósito tercero: “inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación”. Este Proyecto de Acuerdo cumple con los objetivos del PDD al establecer mecanismos garantistas que propenden por establecer límites basados en la paz y justicia, teniendo en cuenta la protección constitucional del derecho a la manifestación pacífica como herramienta idónea para el desarrollo de la libre expresión. Así mismo, beneficiando la cultura educativa para que sea foco del conocimiento y rechace la violencia de cualquier tipo, siguiendo los principios del proceso penal que garanticen el acceso a la justicia, estableciendo precedentes para el mantenimiento del orden y la paz en ocasión de las manifestaciones públicas. Ahora bien, con la ejecución de este Proyecto se atiende a la meta estratégica No. 72 del propósito número 3, que arguye: “Sensibilizar

anualmente a mínimo 200 personas que tengan impuestas múltiples medidas correctivas por reiterados comportamientos contrarios a la convivencia y que no hayan pasado por la pena privativa de la libertad.”³⁵

RELACIÓN CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El presente Proyecto de Acuerdo tiene plena conexidad con el POT (*Decreto No. 555 de 2021*) con respecto a la pretensión de organización sobre las manifestaciones pacíficas desarrolladas en el espacio público peatonal para el encuentro, al promover una intervención sobre los hechos violentos que repercutan sobre los bienes público y privados, sobre lesiones de los participantes de las protestas, y demás acciones vandálicas que acontezcan en el albor de las manifestaciones; siempre con el firme objetivo de promover un ambiente pacífico, donde se exalten a las comunidades que busquen reivindicar sus derechos a través de mecanismos legítimos protegidos jurídicamente.

Estos aspectos se encuentran definidos en los Componentes del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal Para el Encuentro – Art. 90; al respecto, es importante destacar que este Proyecto pretende garantizar el respeto de los espacios públicos para el correcto funcionamiento de acuerdo a los planteamientos del POT, evitando así un detrimento en el patrimonio del Distrito Capital y aumentando la capacidad de goce de todos los ciudadanos. Adicionalmente, pretende gestar la sostenibilidad y gestión orientada a salvaguardar los valores, calidades y las formas de uso del espacio público para su aprovechamiento, goce y disfrute.

COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El artículo 313 de la Constitución Política establece las funciones de los Concejos: *"I. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio".³⁶*

El Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 de 1993, establece: *"Artículo 13: Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario"³⁷*

³⁵ Acuerdo de Adopción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", No. 761 de 2020 (junio 11).

³⁶ Constitución Política de Colombia (1991), artículo 313.

³⁷ Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Decreto 1421 de 1993 (Julio 21)."

Ley 137 de 1994, Artículo 32. Atribuciones. Modificado por el art. 18, Ley 1551 de 2012. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: “8. *Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. PARÁGRAFO 1.- Los concejos municipales mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma y los medios como los municipios puedan otorgar los beneficios establecidos en el inciso final del Artículo 13, 46 y 368 de la Constitución Nacional.*”³⁸

³⁸ Ley de Estados de Excepción, No. 137 de 1994 (junio 2).

PROYECTO DE ACUERDO NO 390 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS Y SOCIALES OTORGADOS POR EL DISTRITO CAPITAL A AQUELLOS CIUDADANOS BENEFICIARIOS QUE ESTÉN SIENDO INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS O CONTRAVENCIONES EN EL MARCO DE UNA MANIFESTACIÓN PÚBLICA”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1 y 7 del artículo 12, del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto la suspensión provisional de beneficios educativos, económicos y/o sociales otorgados por el Distrito Capital a aquellos ciudadanos beneficiarios que estén siendo formalmente investigados por la comisión de delitos o contravenciones en el marco de una manifestación pública.

Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente acuerdo, se establecen las siguientes definiciones:

- a. Manifestación pública:** Ejercicio del derecho ciudadano a reunirse pacíficamente para expresar opiniones, demandas o preocupaciones, de forma individual como colectiva, y sin discriminación alguna, ante las autoridades y la opinión pública, como parte integral de la libertad de expresión, en un marco jurídico democrático que promueve la participación ciudadana y el reconocimiento de derechos constitucionales.
- b. Programas educativos:** Programas de formación educativa que ofrece el Distrito Capital, por medio de la asignación de cupos-becas para cursar carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en instituciones de educación superior de alta calidad en Bogotá.
- c. Programas sociales:** Programas que reciben transferencias monetarias en el marco de la estrategia IMG (Ingreso Mínimo Garantizado).
- d. Contravenciones:** Conductas contrarias a la convivencia descritas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Ley 1801 de 2016.

- e. **Delitos:** Conductas típicas, antijurídicas y culpables, establecidas en el Código Penal Colombiano.

Artículo 3. Imposición de suspensión provisional en el marco de manifestaciones públicas. Las entidades distritales encargadas de la gestión de programas de formación educativos y sociales, tendrán la facultad de declarar la suspensión provisional de los beneficios a aquellos beneficiarios que estén siendo investigados en un proceso penal o policivo, como resultado de su presunta participación en delitos o contravenciones cometidos durante una manifestación pública.

Parágrafo único: Las entidades distritales deberán implementar un procedimiento específico que otorgue las garantías del debido proceso en la imposición de la suspensión provisional.

Artículo 4. Duración de la suspensión: El término de la suspensión provisional de beneficios educativos y sociales estará directamente vinculado a la duración del proceso penal o policivo que involucre al beneficiario.

Parágrafo Primero. Una vez esclarecida la situación jurídica del implicado y culminado el proceso respectivo, se procederá a la revisión de la suspensión provisional permitiendo al beneficiario retomar sus beneficios en caso de resultar absuelto o exonerado de las acusaciones formuladas.

Parágrafo Segundo: En caso contrario, si el beneficiario es hallado responsable penal y contravencionalmente, los beneficios podrán ser retirados definitivamente.

Artículo 5. Reglamentación e implementación. La Administración reglamentará e iniciará la implementación de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 6. Informe. La Secretaría de Educación en colaboración con la Secretaría de Integración Social remitirá al Concejo de Bogotá un informe anual el 21 de noviembre sobre la implementación del presente acuerdo.

Artículo 7. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación.

Publíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D.C., a los ____ días del mes de ____ del año 2025

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 391 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS CAMBIOS DE NOMENCLATURA VIAL EN EL DISTRITO CAPITAL.”*****I. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer un procedimiento claro y participativo para la asignación y modificación de nombres a las calles y vías de Bogotá, que garantice la inclusión de la comunidad en el proceso de toma de decisiones y promueva la preservación de la memoria histórica y cultural de la ciudad.

II. SUSTENTO JURÍDICO

A continuación, se presentan los instrumentos normativos y jurisprudenciales que sustentan la expedición del presente proyecto de acuerdo distrital.

• DE ORDEN CONSTITUCIONAL

La Constitución Política de Colombia de 1991 otorgó a todos los ciudadanos la oportunidad de involucrarse y participar activamente en la supervisión de la gestión pública. Además, estableció cómo los ciudadanos tomamos parte en la planificación, seguimiento y control de los resultados de las acciones del Estado y por ende del Distrito de Bogotá D.C.

Preámbulo de la Constitución

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus Delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia”

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

(...) 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. (...)

Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

• BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD**La Declaración Universal de los Derechos Humanos*****Artículo 21***

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 15

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural

Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial.

Artículo 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (...)

c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; (...)

d) Otros derechos civiles, en particular:

vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales.

● **DE ORDEN LEGAL**

LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática

LEY 134 DE 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.

LEY 136 DE 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Las disposiciones de la Ley 136 de 1994 son aplicables en Bogotá por ausencia de norma expresa referentes al Distrito Capital, conforme a lo previsto en la remisión normativa que consagra el artículo 2° del Decreto Ley 1421 de 1993 :

Artículo 2. Régimen aplicable. El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.

Artículo 32. (Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012).

Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.

[...]

5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.

[...]

Parágrafo 2°. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderán asignadas a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la Constitución y la Ley.

LEY 489 DE 1998: Por la cuál se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Artículo 32.- Democratización de la Administración Pública. Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

● **DE ORDEN DISTRITAL**

Acuerdo Distrital 257 de 2006: Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones

Artículo 3°. Principios de la función administrativa distrital. La función administrativa distrital se desarrollará en consonancia con el interés general de la ciudadanía y los fines del Estado Social de Derecho y se llevará a cabo atendiendo los principios constitucionales y legales de democratización y control social de la Administración Pública Distrital, moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, efectividad, economía, celeridad y buena fe, así como a los principios de distribución de competencias, coordinación, concurrencia, subsidiaridad y complementariedad.

Las autoridades distritales desarrollarán sus actuaciones observando los principios enunciados en el presente artículo con el fin de garantizar la efectividad y materialización de los derechos humanos sean ellos individuales o colectivos, propiciar la participación social en las decisiones públicas y lograr la integración dinámica entre la Administración Distrital y los habitantes del Distrito Capital.

Decreto Distrital 606 DE 2023: Por medio del cual se actualiza el Sistema Distrital de Participación Ciudadana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones

Artículo 3°. OBJETIVO DEL SISTEMA. El Sistema Distrital de Participación Ciudadana tiene por objetivo garantizar una efectiva coordinación y sinergia entre las y los actores y espacios sociales e institucionales de la participación, así como la pertinencia de los instrumentos y condiciones que eliminen obstáculos y faciliten el ejercicio del derecho a la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad.

Artículo 42°. SUBSISTEMA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los Subsistemas Locales de Participación Ciudadana se entienden como parte del Sistema Distrital de Participación Ciudadana, comprenden el conjunto de entidades públicas, instancias de participación y organizaciones sociales de carácter local que se articulan con el fin de territorializar y dar trámite a las diferentes demandas y ofertas de los componentes en el ámbito local y concertar propuestas de política pública de participación local con el fin de procurar decisiones que garanticen el derecho a la participación en la localidad.

Decreto Distrital 477 DE 2023: Por medio del cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034 y se dictan otras disposiciones.

Artículo 2°.- Concepto. La Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, es el marco de acción de la Administración Distrital en materia de promoción y garantía del derecho a la participación, para avanzar en el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de una sociedad más justa, basada en la construcción colectiva de lo público.

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación. La Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, se dirige a todas las personas habitantes del territorio urbano y rural de Bogotá Distrito Capital, en todos los espacios en los que se desarrollen procesos de participación ciudadana.

Artículo 8°.- Objetivo general. La Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, tiene como objetivo general hacer eficaz el ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía en Bogotá D.C., a través del mejoramiento de la gobernanza, de la estructura institucional y las competencias ciudadanas para la incidencia en los asuntos públicos durante el periodo comprendido entre el año 2023 y el 2034.

Artículo 9°.- Objetivos específicos. La Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital 2023 - 2034, tiene los siguientes objetivos específicos:

- 1. Generar condiciones para una gobernanza democrática que aumente el alcance de la participación ciudadana en toda su diversidad en las decisiones públicas del gobierno distrital.*
- 2. Fortalecer el funcionamiento, articulación y capacidades institucionales para la garantía del ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía desde el reconocimiento de la diversidad en el ciclo de la gestión pública.*
- 3. Fortalecer las competencias ciudadanas y su accesibilidad para el robustecimiento del tejido social en Bogotá D.C.*

Artículo 11°.- Estrategias Generales de la Política Pública de Participación Incidente. Las Entidades Distritales en todos los niveles y sectores contribuirán en la ejecución de las siguientes estrategias generales, con el propósito de

implementar los ejes señalados en el artículo 10° del presente acto, así como las líneas de acción contenidas en el documento soporte y en el Plan de Acción de la Política que hacen parte integral del presente Decreto:

f. Estrategia de Colaboración Ciudadana e Innovación para la Gestión Pública. Esta estrategia tiene como objetivo facilitar la inclusión de las personas en los procesos de gestión pública a través de medios tecnológicos, herramientas de cocreación o instrumentos de innovación que profundicen la democracia participativa en Bogotá D.C., en concordancia con los pilares del Modelo de Gobierno Abierto. Estas acciones y procesos son:

- **Causas Ciudadanas.** Son ejercicios de movilización y organización cívica y comunitaria en torno a causas comunes, que facilita la inclusión de temas agenciados por las personas y visibilizados como problemáticas sociales, económicas, culturales y ambientales, que requieren pronunciamiento o actuación por parte del Gobierno Distrital en la agenda pública, con el fin de mitigar la conflictividad social.

- **Consultas Ciudadanas.** Son ejercicios de consulta a la ciudadanía sobre la formulación de planes, programas, proyectos de inversión, proyectos de actos administrativos o priorización de acciones en donde se evidencie un interés general por parte de las personas que habitan en Bogotá.

Artículo 13°.- Responsabilidades frente a la Política Pública de Participación Incidente. La dirección de la Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, estará a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, como entidad cabeza de sector, la cual coordinará, supervisará y hará el seguimiento de la implementación y ejecución de las políticas, planes y programas de la Política Pública, con el apoyo del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal como entidad adscrita al sector Gobierno, encargada de orientar y liderar el diseño técnico y gestión de las estrategias que materializan la Política Pública.

● JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

Sentencia C-065-21. El derecho a la participación no circunscrita al campo electoral

(...) independientemente de lo que acontece respecto de la democracia representativa, las posibilidades de participación no se agotan en el derecho al sufragio, sino que sus formas pueden realizarse por medio de otros métodos que permitan el acercamiento de la ciudadanía a las decisiones que en general afectan su vida. Estas formas pueden variar por diversos factores atendiendo, por ejemplo, a las circunstancias particulares del grupo social o de las materias involucradas en cada asunto. En todo caso, sin importar el mecanismo de participación que sea determinado por la ley, ésta deberá garantizar que quienes se encuentren involucrados estén informados de las actuaciones de las administraciones públicas o de las autoridades en general, y/o contar con herramientas o espacios para manifestar o expresar sus puntos de vista. Ello necesariamente se integra con el carácter pluralista e inclusivo del Estado colombiano, según el cual resulta imperativo involucrar a todos los grupos, inclusive los minoritarios, en los asuntos que los afectan."

Sentencia C-150-15. Participación de los ciudadanos-Deberes del Estado.

La Corte entiende que la participación como derecho de los ciudadanos y eje medular del ordenamiento constitucional vigente implica (i) el deber del Estado de abstenerse de adoptar medidas de cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación por parte de ciudadanos y organizaciones sociales, (ii) el deber de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las facultades en cuyo ejercicio se manifiesta la participación y (iii) el deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados. Estos deberes del Estado se concretan en deberes específicos a los que a continuación la Corte se refiere: (i) El deber de abstenerse de estatizar la democracia y, en consecuencia, la obligación de proteger el pluralismo, (ii) Deber de promover formas de participación democrática que comprendan no sólo la intervención de partidos o movimientos políticos sino también de organizaciones sociales de diferente naturaleza. (iii) Deber de promover estructuras democráticas en las diferentes formas de organización social. (iv) Prohibición, que vincula a todos los órganos públicos, funcionarios y particulares, de eliminar alguna de las dimensiones de la democracia. (v) Mandato de no sustituir a las autoridades estatales competentes en el desarrollo de actividades de control.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Concejo de Bogotá, en ejercicio de sus funciones, ha sido responsable de determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios en la ciudad, con el fin de facilitar la identificación y acceso a los diferentes espacios. Sin

embargo, los cambios en la nomenclatura pueden tener un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos, por lo que se considera implementar un procedimiento participativo que permita a la comunidad involucrarse de manera activa en estos procesos.

La iniciativa o propuesta de nombrar una calle en la ciudad de Bogotá D.C., no debería ser un acto unilateral; sino por el contrario, debe responder a un proceso participativo que involucre a los habitantes del sector y a la ciudadanía en general. Para lograrlo, es necesario crear e incentivar espacios propicios de diálogo y debate, tales como audiencias públicas, encuentros ciudadanos e incluso, consultas al interior de las comunidades en donde puedan expresar sus opiniones sobre la propuesta.

En ese orden de ideas, el presente proyecto de acuerdo busca garantizar que cualquier modificación en la nomenclatura sea discutida de manera abierta y participativa, considerando el contexto histórico, cultural y geográfico, así como los intereses de los residentes.

El ordenamiento jurídico colombiano, encabezado por la Constitución Política y las normas estatutarias que la desarrollan, enfatiza el carácter participativo de la ciudadanía en la toma de decisiones que los afectan en diversos ámbitos: políticos, económicos, culturales y sociales. La carta magna trae consigo valores y principios que materializan y expresan la noción de Estado Social de Derecho.

Tal circunstancia, fue reafirmada por la Corte Constitucional en Sentencia T-406-1992 al precisar que: *“La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales.*

Adicionalmente, La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 6, reconoce la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo en los siguientes términos:

“La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.”

En ese sentido, propiciar espacios de participación en los que la ciudadanía pueda expresarse libremente sobre la decisión de modificar, asignar, o eliminar el nombre de la calle o carrera cercana al lugar donde reside, satisface los estándares internacionales y constitucionales de garantía de los derechos de participación, en tanto permite tomar un lugar en la discusión sobre los aspectos sociales y culturales que los afectan o benefician.

Nombrar una calle con el nombre de una persona suele tener un profundo significado para los habitantes de una comunidad. A través de este gesto, se rinde homenaje a figuras que han realizado contribuciones significativas en áreas como la política, la cultura, los derechos humanos o la ciencia, entre otras. Además de preservar la memoria histórica de eventos y luchas importantes, este reconocimiento fortalece la identidad cultural de la comunidad, puede inspirar a las futuras generaciones y fomentar el diálogo entre estos sobre valores y logros colectivos.

En síntesis, adoptar un nombre significativo para una vía de la ciudad puede generar un sentido de pertenencia y orgullo entre los habitantes, y propiciar escenarios educativos sobre la historia distrital o local. Sin embargo, también puede dar lugar a controversias, especialmente si la comunidad no se encuentra de acuerdo con la imposición de un nuevo nombre para la calle o vía que colinda con su lugar de residencia. Tal situación, generaría malestar y descontento en los ciudadanos lo que abre el debate sobre los valores que la comunidad desea promover. los cuales deben ser abordados a través de procesos participativos en el cual las partes interesadas puedan ser escuchadas y brindar sus opiniones sobre la modificación y asignación de la nomenclatura.

Estos procesos participativos, han sido aplicados en distintas partes del mundo. Un estudio comparado evidencia que, verbigracia, el Reglamento de Nomenclaturas del Municipio de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco; México³⁹, establece como condición necesaria para el proceso de nominación o renombre de las calles: la participación de la ciudadanía en los siguientes términos:

“Artículo 17. De la participación de vecinos.

³⁹ [Reglamento de Nomenclatura del Municipio de Guadalajara Capítulo I Disposiciones Generales](#)

1. Los vecinos que siendo mayores de edad, por la ubicación de su domicilio en una vialidad o en una colonia, podrán participar en el proceso de la asignación o modificación de la nomenclatura de vialidades o espacios públicos, según se señale en el presente ordenamiento. (...)

3. Todos los interesados en participar deben acreditar su legítimo derecho a opinar con base en la documentación que presenten para manifestar que su domicilio se encuentra dentro de la vialidad o colonia donde se requiere la participación ciudadana.

4. Durante las consultas, los vecinos involucrados tienen derecho a hacer las manifestaciones de manera verbal o por escrito que estimen oportunas ante las autoridades que realizan la consulta y estas deberán dar cuenta de las mismas en sus informes para el dictamen técnico.

5. El resultado de la consulta debe expresarse mediante un informe con la precisión que permita conocer si hay un porcentaje de mayoría o un empate que acepte o rechace la propuesta planteada.”

Otro ejemplo de ello es la ciudad de Barcelona, España, que aunque su trámite es sustancialmente distinto y está a cargo del gobierno local, prevé un espacio de participación ciudadana.

- 1. El propio Ayuntamiento o cualquier persona, entidad tanto pública como privada o asociación puede proponer un cambio de denominación de una calle.*
- 2. La Ponencia del Nomenclátor, comisión interdisciplinar municipal, recibe las propuestas, las estudia y las consulta con los distritos municipales.*
- 3. Cuando la ponencia llega a un acuerdo, eleva la propuesta a la alcaldesa, encargada de firmar la aprobación definitiva del cambio de denominación.⁴⁰*

En este sentido, la participación ciudadana debe constituirse como un ejercicio fundamental para asegurar que el nombre elegido representa genuinamente el sentir e interés de quienes habitan el barrio o sector. Es deber del Distrito Capital proteger la igualdad de género, sin que ello suponga la omisión de un proceso participativo y democrático en el que la comunidad que reside o desempeña sus actividades económicas en la calle objeto de renombre, manifieste expresamente su voluntad. La promoción del respeto y la tolerancia, objeto intrínseco a este tipo de iniciativas, no puede contravenir el sentir expreso de la comunidad.

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Así mismo para el objeto del presente proyecto de acuerdo las disposiciones de la Ley 136 de 1994 son aplicables en Bogotá por ausencia de norma expresa referentes al Distrito Capital, conforme a lo previsto en la remisión normativa que consagra el artículo 2º del Decreto Ley 1421 de 1993 :

ARTÍCULO.- 2o. Régimen aplicable. *El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.*

En este sentido, el Artículo 32. Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012):

Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.

[...]

5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.

⁴⁰ [Cambio de nombre de calles | Ayuntamiento de Barcelona](#)

[...]

Parágrafo 2°. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderán asignadas a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la Constitución y la Ley

Por tanto, en aras de otorgar un procedimiento participativo para la competencia sobre el proceso de cambio de nombre de las calles que le corresponde al Concejo de Bogotá D.C.

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Para el presente proyecto de acuerdo, la participación ciudadana es responsabilidad del ejercicio de iniciativa normativa del concejal o concejala presenten un proyecto de acuerdo para cambiar la nomenclatura de una calle. Por tanto no genera ningún impacto fiscal.

V. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Sobre la creación de ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles establece una clara conexión con el proyecto de acuerdo propuesto, ya que, se busca empoderar a los ciudadanos en la gestión de su entorno urbano, permitiendo que participen activamente en decisiones clave sobre su espacio.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. [...] Participe activamente en la administración y gestión de su ciudad. Defienda el tipo de ciudad que cree que necesita. Defina el concepto general de su edificio, calle y barrio, y actúe en consecuencia para conseguirlo. ¿Hay suficiente trabajo? ¿Pueden caminar sus hijos al colegio de forma segura? ¿Puede salir a pasear con su familia por la noche? ¿A qué distancia está la parada de transporte público más cercana? ¿Es buena la calidad del aire? ¿Cómo son los espacios públicos compartidos? Cuanto mejores sean las condiciones en que se desenvuelve la comunidad, mayor será el efecto sobre la calidad de vida.

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Al promover la participación de la comunidad en los cambios de nomenclatura de las vías públicas y predios, la ley fortalece la capacidad de los ciudadanos para definir el carácter de su calle, barrio y ciudad, alineándose con el principio de planificación y gestión participativa planteado en el Objetivo 11. Este enfoque, al igual que el objetivo global, aboga por una urbanización inclusiva y sostenible donde la ciudadanía no solo se involucra en la definición de su entorno inmediato, sino que también contribuye a mejorar las condiciones de vida generales a través de procesos participativos que reflejan sus necesidades y valores, potenciando así la calidad de vida en la ciudad.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO.

El Acuerdo 927 de 2024, Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, en su artículo 14, Programa 23 del objetivo estratégico **“Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”**, se alinea conceptualmente con el proyecto de acuerdo propuesto sobre la participación comunitaria en los cambios de nomenclatura.

En primera medida ambos promueven un enfoque participativo en la gestión del espacio público. Mientras el programa busca garantizar la apropiación social de los espacios mediante la seguridad, iluminación y arte urbano, la ley propuesta extiende ese principio de participación ciudadana hacia la nomenclatura de las vías públicas y predios. En segunda medida, ambas normativas buscan involucrar a la comunidad en las decisiones que afectan el ordenamiento territorial, fortaleciendo la gobernanza colaborativa y promoviendo un sentido de pertenencia en la gestión del entorno urbano.

Artículo 14. Programas del Objetivo Estratégico “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”. Adóptense los siguientes programas para la materialización del objetivo estratégico:

14.1. Programa 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo. *Con el objetivo de hacer de Bogotá un territorio adaptado, equilibrado y sostenible, fortalecer la planeación territorial como una labor continua con la capacidad de comprender las complejidades y retos de las dinámicas urbana, rural y regional, con el fin de reaccionar de manera oportuna a las demandas del desarrollo territorial, social, económico y ambiental y con ello garantizar la calidad de vida y el bienestar de las personas que habitan y visitan el territorio. [...]*

La participación ciudadana es el eje transversal que articula la gestión del espacio público y la planificación territorial, asegurando que las decisiones reflejen los intereses colectivos y culturales de la ciudad.

PROYECTO DE ACUERDO NO 391 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS CAMBIOS DE NOMENCLATURA VIAL EN EL DISTRITO CAPITAL.”****El Concejo de Bogotá, D.C.**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto establecer un procedimiento participativo para que las comunidades puedan intervenir en las decisiones relacionadas con los cambios de nomenclatura de las vías públicas, predios o domicilios donde habitan y/o tienen afinidad, con el fin de garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones por parte del Concejo de Bogotá.

Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente acuerdo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nomenclatura Vial: es el conjunto de caracteres alfanuméricos que se emplean para identificar una vía; se compone de la nomenclatura de la vía principal y el nombre común para aquellas vías que el Concejo de Bogotá determine a través de acuerdo.

Nomenclatura Domiciliaria: es el identificador alfanumérico único asignado a un predio y se encuentra clasificada en las siguientes categorías: Principal (acceso principal al predio), Secundaria (accesos secundarios localizados en sobre la vía de acceso principal) e Incluye (corresponde a accesos localizados en vías diferentes a la nomenclatura principal). Y se compone de: Vía principal - Vía generadora. El número que representa la distancia aproximada en metros desde el eje generador o de referencia hasta el acceso al predio, ajustándola al número par o impar correspondiente. En caso de requerirse, tiene un tercer componente al interior del lote e identifica interior, mejora o unidades en propiedad horizontal.

Artículo 4. Consulta Ciudadana. La Secretaría Distrital de Gobierno diseñará y organizará un periodo de consulta ciudadana de al menos 30 días, durante el cual los habitantes del sector y/o quienes tengan afinidad, podrán expresar sus opiniones y posiciones respecto al cambio de nomenclatura vial propuesto a través de un proyecto de acuerdo. Al finalizar dicho periodo, la Secretaría deberá recopilar y analizar las opiniones recibidas y elaborar un informe que será presentado al Concejo de Bogotá antes del primer debate, como insumo para la deliberación en el cabildo distrital.

Parágrafo: La Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, será responsable de supervisar y garantizar la transparencia del proceso, asegurando el cumplimiento de los principios establecidos en la Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023-2034 o la que haga sus veces

Artículo 5. Prohibición. El Concejo de Bogotá se abstendrá de modificar la nomenclatura vial cuando dicha modificación altere el contexto histórico, cultural o geográfico de la zona objeto de discusión.

Artículo 6. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los ____ días del mes de ____ del año 2025

Atentamente,

H.C JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 392 DE 2025
PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA DESCONGESTIÓN DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA QUE ESTÁN BAJO LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto la adopción de medidas para la descongestión de los Centros de Detención Transitoria que están bajo la jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de reducir el hacinamiento y asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos de dignidad humana para la población reclusa en dichos centros.

II. SUSTENTO JURÍDICO

• DE ORDEN CONSTITUCIONAL

Que el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia precisa que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas **ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**”.

Que el artículo 93° de la Constitución Política de Colombia, ordena que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.”

Que el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, establece que: “toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.”

Que el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* estipula que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (...) **Los procesados estarán separados de los condenados**, salvo en circunstancias excepcionales, y **serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas**”

- **DE ORDEN LEGAL**

LEY 65 DE 1993: “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario” dispone en su artículo 17 la responsabilidad del Distrito Capital en la “creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para **las personas detenidas preventivamente** y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.”

LEY 1709 DE 2014: “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.”

- **Artículo 12.** Modifícase el artículo 21 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 21. Cárceles y pabellones de detención preventiva. Las cárceles y pabellones de detención preventiva son establecimientos con un régimen de reclusión cerrado. Estos establecimientos están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los términos **del artículo 17 de la Ley 65 de 1993**, los cuales están a cargo de las entidades territoriales. Podrán existir pabellones para detención preventiva en un establecimiento penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten razones de seguridad, **siempre y cuando estos se encuentren separados adecuadamente de las demás secciones de dicho complejo y de las personas condenadas**. (negrita y subrayado fuera de texto)

Las entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura **podrán realizar las gestiones pertinentes para la construcción** conjunta de ciudadelas judiciales con un centro de detención preventiva anexos a sus instalaciones, así como articular todo lo necesario para la construcción y el mantenimiento de estos complejos judiciales.

LEY 715 DE 2001: “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”

- **Artículo 76.6.** En materia de centros de reclusión: Los municipios en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, **podrán apoyar la creación, fusión o**

supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad.

LEY 2197 DE 2022: “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones.”

- **Artículo 63.** Adiciónese un artículo 34 al título 11 de la Ley 65 de 1993, del siguiente tenor:
- **Artículo 34.** De la infraestructura carcelaria, su operación y mantenimiento. El Gobierno Nacional y las entidades territoriales del orden departamental, municipal y distrital para efectos del diseño, construcción, dotación, operación o mantenimiento de la infraestructura carcelaria o penitenciaria podrá efectuar su desarrollo a través de esquemas de Asociación Publico Privadas, APP, salvo en lo referente a los servicios de tratamiento penitenciario y la prestación de servicios de seguridad y vigilancia de población carcelaria.

LEY 906 DE 2004: “Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

- **Artículo 1.** Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.
- **Artículo 313.** Procedencia de la detención preventiva. Inc. 4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.

LEY 599 DE 2000: “Por medio de la cual se expide el Código Penal”

- **Artículo 1.** Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana.
- **Artículo 3.** Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.

- **Artículo 5.** Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación.

- **JURISPRUDENCIA**

SENTENCIA T-153 DE 1998: Primera Declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucionales en el Sistema Penitenciario y Carcelario

SENTENCIA T-388 DE 2013: Segunda Declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucionales en el Sistema Penitenciario y Carcelario.

Sentencia T-762 DE 2015: Reafirmación del Estado de Cosas Inconstitucionales en el sistema Penitenciario y Carcelario.

Sentencia SU-122 DE 2022: Extensión del Estado de Cosas Inconstitucionales en los Centros de Detención Transitorios.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Los Centros Penitenciarios, Carcelarios y de Detención Transitoria son instituciones que tienen como presupuesto fundamental y constitucional garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como también contribuir a la resocialización de las personas privadas de la libertad, esto implica que *“la persona privada de la libertad tenga una actividad al interior del establecimiento de reclusión y eventualmente reporte algunos beneficios económicos por el trabajo desarrollado, sino también para generar un puente hacia la vida en libertad, con la aprehensión de algún arte u oficio que le permita devengar recursos por fuera de los muros de la cárcel, desarrollando una actividad legal que lo aleje de la comisión de delitos”*⁴¹

No obstante, la realidad de estos centros es compleja y problemática. Hasta la fecha, la Corte Constitucional por medio de cuatro pronunciamientos, ha evidenciado vulneraciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, situación que derivó, en términos generales, en la declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales del Sistema Carcelario y Penitenciario que aún persiste.

Frente a ello, será apremiante exponer las razones que derivaron en estos pronunciamientos, para posteriormente proponer una serie de medidas que contribuyan, desde el nivel distrital, a la superación de dicha problemática.

⁴¹ Hernández Jiménez, N., (2017). LA RESOCIALIZACIÓN COMO FIN DE LA PENA – una frustración en el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Caderno CRH, 30(81), 539-559. <https://doi.org/10.1590/S0103-49792017000300010>

A continuación, se presentan brevemente los cuatro (4) pronunciamientos de la Corte Constitucional:

Sentencia T-153 de 1998.

En la sentencia referenciada, la Corte Constitucional realizó por primera vez un análisis exhaustivo de la situación en los centros penitenciarios y carcelarios del país. En esta oportunidad, el máximo órgano constitucional reconoció la necesidad de incrementar el personal de la guardia penitenciaria, con el objetivo de restaurar el orden y el cumplimiento de la ley, al interior de estos establecimientos. Lo anterior, como *Condicio sine qua non* para garantizar los derechos fundamentales de los reclusos y garantizar el proceso de resocialización al que están destinados durante la privación de su libertad.

Por otra parte, la Corte reconoció la falta de infraestructura adecuada para abordar el hacinamiento en los centros de reclusión y destacó que dicha situación no afectaba exclusivamente a las cárceles del orden nacional, sino que también comprometía a los establecimientos del orden distrital, municipal y departamental. Esta circunstancia impedía el traslado de los reclusos preventivos y condenados a las cárceles correspondientes.

Por lo anterior, la Corte Constitucional declaró que el estado de cosas que presentan las cárceles del país es inconstitucional y **ordenó a los Gobernadores Alcaldes, Concejos distritales y municipales, entre otras medidas, cumplir con la obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.**

Sentencia T 388 de 2013

Luego de la declaratoria de 1998 y ante un aumento en la interposición de tutelas que evidenciaban una vulneración masiva, sistemática y generalizada en materia de derechos fundamentales a los reclusos, la Corte constitucional, por segunda ocasión, emite una declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario. Este pronunciamiento tuvo como factores fundamentales y determinantes los siguientes:

“(i) los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema penitenciario y carcelario ha institucionalizado prácticas inconstitucionales; (iv) las autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la vulneración de los derechos; (v) las soluciones a los problemas constatados en el Sistema penitenciario y carcelario, comprometen la intervención de varias entidades, requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y, por último, (vi) si todas las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se produciría una congestión judicial mayor de la que ya existe actualmente.”

Sentencia T-762 de 2015.

A diferencia de las sentencias referenciadas anteriormente, en esta ocasión y luego de un examen del cumplimiento de las órdenes emitidas, el máximo tribunal constitucional reiteró el Estado de Cosas declarado al constatar que las situaciones fácticas demostradas en dicho pronunciamiento no habían sido superadas; subrayando así que el incumplimiento de dichas órdenes aún persistía.

Según la Corte, las características que contempla el sistema penitenciario y carcelario en el país- y que llevaron desde luego a su declaratoria- lejos de ser fenómenos aislados constituyen problemáticas estructurales que requieren soluciones de fondo y duraderas. Dificultades sistemáticas como el hacinamiento, son producto de la falta de políticas públicas y fortalecimiento institucional que permitan superar la “*desproporción entre las entradas y salidas de las personas privadas de la libertad*”. Asimismo, la construcción de instalaciones penitenciarias deficientes no contemplativas de un número de cupos considerables que, en todo caso, incumplen los estándares mínimos de subsistencia, dignidad y salubridad impiden indiscutiblemente la formulación de una política criminal que, además de cumplir con la responsabilidad del Estado con las personas privadas de la libertad, satisfaga los fines esenciales previstos en la Constitución Nacional

Finalmente, la Corte identificó la problemática de reclusión conjunta entre personas sindicadas y condenadas, atribuyendo como causa estructural la falta de articulación entre las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho. En consecuencia, la Corte instó a los entes territoriales para iniciar “*todas las acciones administrativas, presupuestales y logísticas necesarias para involucrarse efectivamente en el proceso seguido por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley 65 de 1993 y sus modificaciones.*”

Sentencia SU 122 DE 2022

En esta oportunidad la Corte Constitucional extendió el estado de cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario a los **Centros de Detención Transitoria**. (Inspecciones, Estaciones, Subestaciones de policía, Centros de Atención Inmediata -CAI- y Unidades de reacción Inmediata-URI-).

Esta sentencia constituye la piedra angular del presente proyecto de acuerdo. Mientras que, en los anteriores pronunciamientos el estudio se había centrado en examinar de fondo las vulneraciones de derechos fundamentales al interior de las cárceles y penitenciarias, en esta ocasión el máximo tribunal constitucional enfocó su análisis de constitucionalidad en las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria.

La Defensoría del Pueblo presentó a la Corte el siguiente informe que, al momento de la decisión, evidenció una desproporción entre la capacidad de las estaciones de policía y las URI para custodiar sindicados versus el total de la población reclusa en estos centros de detención Transitoria (Tabla 1). Frente a ello, se estableció la necesidad de “*más cupos para la población privada de la libertad bajo*

detención preventiva lo que exige la identificación de más fuentes de financiación para que los entes territoriales puedan cumplir con sus obligaciones legales”

Tipo de centro	Capacidad	Total PPL	Sobrepoblación	Hacinamiento
Estaciones de Policía	5.831	17.477	11.646	200%
URI	1.292	1.834	542	42%
Total:		19.311		

(Tabla

1)

Fuente: Defensoría del Pueblo, a partir de la Sentencia SU 122 de 2022

En consecuencia, la Corte ordenó establecer un plan de acción distribuido en 2 fases; transitoria y definitiva. Para la primera, el objetivo fundamental es disminuir el hacinamiento en los centros de atención transitoria de carácter urgente y de inmediato cumplimiento. Para la segunda fase, el propósito final es erradicar el uso de los centros de detención preventiva y fortalecer la infraestructura adecuada para responder a la capacidad de los sindicatos. No obstante, aclaró que *“la ampliación de cupos carcelarios no contradice la regla de la excepcionalidad de la detención preventiva, puesto que, ante una situación de hacinamiento tan grave como la del Sistema Penitenciario y Carcelario, **estas medidas son complementarias y resultan necesarias para atender la crisis**. En ese sentido, como se demostró en el presente proceso, además de una aplicación excesiva de la detención preventiva, existe un déficit de infraestructura destinada a la custodia de personas detenidas preventivamente, por lo que se requiere de medidas en ambos frentes”*.

A continuación, se extraen las acciones ordenadas por la Corte Constitucional **a los entes territoriales** que tienen bajo su jurisdicción a los denominados Centros de Detención Transitorios para el cumplimiento del plan de acción ordenado.

PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVO	ORDEN
FASE TRANSITORIA	<i>Disminuir y acabar con el hacinamiento en las inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y lugares similares. Esto con el fin de atender de forma inmediata la situación indigna en la que se encuentran las personas allí reclusas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta sentencia (...) se deberá garantizar que las personas privadas de la libertad en estos lugares cuenten con las condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficientes; así como la separación tanto entre hombres y mujeres, como entre menores y mayores de edad.</i> ● <i>En el término máximo de un (1) año y medio siguiente a la notificación de esta providencia, dispongan de inmuebles, bien sea que estén bajo su dominio o a través del perfeccionamiento de contratos como el comodato o el arrendamiento, que cuenten con las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y sanidad adecuadas, para trasladar temporalmente a personas reclusas en los denominados centros de detención transitoria y disminuir el hacinamiento.</i>
FASE DEFINITIVA	<i>Eliminar de manera definitiva el uso de los denominados centros de detención transitoria y ampliar los cupos en los establecimientos carcelarios a nivel territorial y nacional, con condiciones adecuadas que aseguren los derechos de las personas procesadas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>En el término máximo de un (1) año, contado a partir de la notificación de la presente providencia, todas las entidades territoriales, especialmente los departamentos, el distrito capital y las capitales de departamento, establezcan una planeación de fuentes de financiación de gastos que incluya el aumento de cupos a favor de la población procesada (bajo detención preventiva).</i> ● <i>A la alcaldía mayor de Bogotá (...) de manera coordinada y dentro del plazo máximo de dos (2) años, siguientes a la notificación de esta sentencia, formulen proyectos para la construcción y/o adecuación de infraestructura carcelaria destinada a las personas con detención preventiva en establecimiento de reclusión.</i>

(Tabla 2)

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la Sentencia SU-122/2022.

Aunado a lo anterior, se indagó a la secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta sentencia.

Frente a la orden primera de la fase transitoria, la secretaría de Seguridad y Convivencia y Justicia, precisó que “aunque la administración distrital no opera las URI ni las estaciones de policía, ha solicitado a la MEBOG que, a través de su Oficina de Bienes Raíces, priorice la intervención de celdas, reconociendo que la Policía Metropolitana de Bogotá debe determinar las estaciones que requieren intervenciones inmediatas. La Secretaría Distrital informa que utiliza recursos del Fondo Cuenta para la Seguridad en la intervención y mantenimiento de equipamientos de seguridad bajo la responsabilidad de la MEBOG, como las estaciones de policía, y realiza mantenimientos en Estaciones de Policía a solicitud de la MEBOG.” Estas intervenciones efectuadas por la Secretaría de Seguridad, se han desarrollado desde el año 2019 hasta el 2023, cuya inversión ha sido en los siguientes valores:

2019

EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS	VALOR INTERVENCION	INVERSION SALAS RETENIDOS
ESTACION DE POLICIA BOSA	\$ 538.755.276,00	\$ 244.552.305,00
ESTACION DE POLICIA KENNEDY	\$ 572.469.447,00	\$ 207.170.687,00
ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	\$ 552.343.622,00	\$ 403.041.148,00
ESTACION DE POLICIA SUBA	\$ 554.797.844,00	
ESTACIÓN DE POLICIA CANDELARIA	\$ 654.027.950,00	
Estacion Policia Sancristobal	\$ 266.009.381,00	
ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	\$ 569.170.664,00	
Estacion De Policia Usaquen	\$ 16.538.273,00	
ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO E	\$ 385.579.696,00	\$ 385.579.696,00
ESTACION DE POLICIA MARTIRES	\$ 719.397.724,00	\$ 719.397.724,00
ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	\$ 542.129.038,00	\$ 542.129.038,00
ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	\$ 328.466.514,00	\$ 328.466.514,00
ESTACION DE POLICIA SANTAFE	\$ 439.844.041,00	\$ 439.844.041,00
ESTACION DE POLICIA FONTIBON	\$ 19.879.402,00	\$ 19.879.402,00
ESTACION DE POLICIA PUENTE ARANDA	\$ 9.361.859,00	
TOTAL	\$ 6.168.770.731,00	\$ 3.290.060.555,00

2020

EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS	VALOR NTERVENCION	INVERSION SALAS RETENIDOS
ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	\$ 1.231.347.388,42	
ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO	\$ 617.735.768,32	
ESTACION DE POLICIA FONTIBON	\$ 537.100.153,20	\$ 35.816.821,00
ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	\$ 433.212.017,89	\$ 116.820.850,00
ESTACION DE POLICIA BOSA	\$ 14.607.343,21	
ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	\$ 87.711.520,42	
ESTACION DE POLICIA PUENTE ARANDA	\$ 23.765.970,70	
ESTACION DE POLICIA USAQUEN	\$ 59.198.957,10	\$ 15.830.820,00
ESTACION DE POLICIA KENNEDY	\$ 7.231.907,07	
TOTAL	\$ 2.952.712.070,00	\$ 168.468.491,00

(Tabla 3)

Fuente: Respuesta a Derecho de Petición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 9- 02-2024

Para el año 2021 se suscribió el contrato de obra No. 1526, cuya ejecución finalizó el año anterior. La inversión para adecuar las estaciones de policía fue desagregada de la siguiente manera:

2021 a 2023 (contrato de mantenimiento No 1526-2021)

ESTACION DE POLICIA	INVERSIÓN
Candelaria	\$6.396.878
Fontibón	\$47.262.398
Kennedy	\$59.452.156
Barrios Unidos	\$616.433
Chapinero	\$1.587.659
Rafael Uribe	\$20.864.416
Usaquén	\$24.521.103
Tunjuelito	\$36.678.777
Santafé	\$29.470.710
Teusaquillo	\$1.946.258
Engativá	\$35.782.586
Ciudad Bolívar	\$32.494.778

Usme	\$20.319.484
Mártires	\$7.252.512
Antonio Nariño	\$4.325.232
Suba	\$19.030.228
San Cristóbal	\$2.588.273
Bosa	\$91.716.853
TOTAL	\$492.306.749

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la justicia

(Tabla 4)

Fuente: Respuesta a Derecho de Petición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 9- 02-2024

De lo anterior, se puede inferir una disminución en la inversión destinada a mejorar la infraestructura de las Estaciones de Policía de la Ciudad de Bogotá durante los años 2021, 2022 y 2023, en comparación con los años anteriores. Esta situación es preocupante, ya que las condiciones de salubridad en estos centros continúan siendo deplorables y persiste el incumplimiento de las autoridades para mejorar las condiciones humanitarias mínimas.

Los esfuerzos económicos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para mejorar las condiciones de los sindicados en las estaciones de policía y reducir el hacinamiento no parecen reflejarse en las cifras de hacinamiento en los centros de detención transitoria. Estos últimos no muestran una disminución, situación que se constatará a mayor detalle en el siguiente apartado.

Finalmente, frente a las demás órdenes, de mediano y largo plazo dadas por la Corte, la administración distrital está trabajando en la gestión para cumplir con la orden, pero hasta el

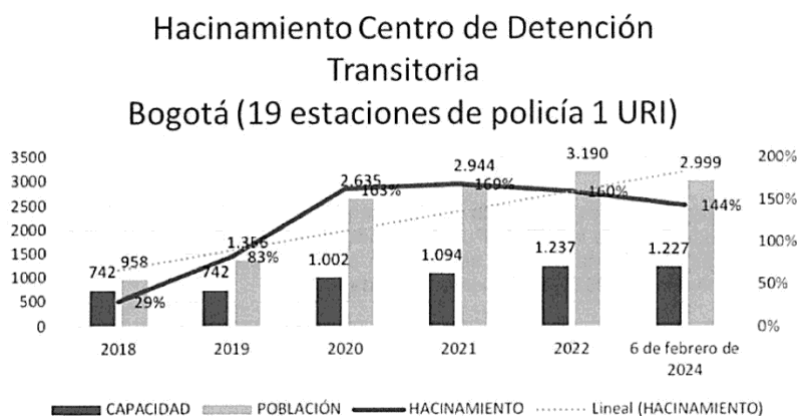
momento **no se ha concretado ningún resultado tangible o específico en términos de su cumplimiento.**

HACINAMIENTO EN CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIO EN BOGOTÁ

Según el último informe presentado por la Personería de Bogotá en el año 2023, los centros de detención transitorios bajo jurisdicción del distrito contaban con un hacinamiento del **169%**. Esta cifra corresponde a 3.217 personas privadas de la libertad, de las cuales 2.831 eran imputados y 386 condenados⁴². Lo anterior, permite concluir que existe un incumplimiento expreso a la Constitución, las normas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, no solo por la carencia de formulación de proyectos para la construcción y adecuación de la infraestructura necesaria para disminuir el hacinamiento, sino también por la falta de garantía de que los condenados permanezcan en las cárceles y centros penitenciarios, separados de los sindicados⁴³.

En dicho informe también se destaca que las estaciones de policía con mayor porcentaje en los niveles de hacinamiento son Usaquén con 810%; Bosa 557%; Kennedy 493%; Usme 415%; y Ciudad Bolívar con 392%, lo cual ha propiciado la fuga de algunos de los sindicados.

No obstante lo anterior, según las cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a corte de 6 de febrero de 2024 se evidencia un hacinamiento del **144%** en las estaciones de policía y URI de Puente Aranda, respecto de los años anteriores. En consecuencia, se observa que a pesar de la inversión económica de la Secretaría, descrita en el capítulo anterior, no se ha impactado de manera significativa la problemática de hacinamiento de la ciudad.



⁴² Personería de Bogotá. (28 de agosto de 2023). Hacinamiento propicia la fuga de privados de la libertad en estaciones de policía de Bogotá. Recuperado de <https://www.personeriabogota.gov.co/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/1167-hacinamiento-propicia-la-fuga-de-privados-de-la-libertad-en-estaciones-de-policia-de-bogota>

⁴³ Ley 1709 de 2014: "Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. Art. 21.

(Gráfica 1)

Fuente: Respuesta a Derecho de Petición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 9- 02-2024

Ahora bien, se destaca que de esas 2.999 personas que se encuentran privadas de su libertad, 2.440 son sindicados, mientras que 559 ya cuentan con sentencia condenatoria. Frente a ello, se insiste en el incumplimiento de las autoridades a la normativa que establece la necesidad de que sindicados y condenados se encuentren separados.

Aunado en lo anterior, la Policía Metropolitana de Bogotá, remitió un comparativo de la capacidad instalada en las estaciones de policía y en la URI de Puente Aranda para albergar personas privadas de la libertad frente a la cantidad de personas que realmente se encuentran actualmente:

UNIDAD	CAPACIDAD PLL	REALIDAD	% HACINAMIENTO
COSEC 1	145	397	174%
E-1 USAQUEN	10	84	740%
E-2 CHAPINERO	15	0	-100%
E-11 SUBA	60	182	203%
E-12 BARRIOS UNIDOS	35	42	20%
E-13 TEUSAQUILLO	25	89	256%
COSEC 2	175	623	256%
E-4 SAN CRISTOBAL	35	113	223%
E-S USME	20	95	375%
E-6 TUNJUELTO	20	32	60%
E-18 RAFAEL URIBE URIBE	40	130	225%
E-19 CIUDAD BOLÍVAR	60	253	322%
COSEC 3	210	867	313%
E-7 BOSA	35	211	503%
E-8 KENNEDY	60	414	590%
E-9 FONTIBÓN	45	0	-100%
E-10 ENGATIVÁ	60	204	240%
E-22 TERMINAL	10	38	280%
COSEC 4	325	566	74%
E-3 SANTA FÉ	85	111	31%
E-14 MÁRTIRES	80	101	26%
E-15 ANTONIO NARIÑO	50	39	-22%
URI PUENTE ARANDA 3 PISO E-16	80	234	193%
E-17 CANDELARIA	30	81	170%
PUENTE ARANDA CELDAS 2 PISO	90	27	-70%
PUENTE ARANDA CELDAS 2 PISO SUIN	155	256	65%
PUENTE ARANDA CELDAS 1 PISO SUIN	127	204	61%
TOTAL	1227	2940	PORCENTAJE DE HACINAMIENTO TOTAL.

(Tabla 5)

Fuente: Elaboración propia, a partir de la respuesta de petición de la MEBOG, 22 de Feb. 2024

De estas cifras, es preocupante la situación de hacinamiento que se vive en las Estaciones de:

- Usaquén (740%),
- Kennedy (590%)
- Bosa (503%)
- Usme (375%)
- Ciudad Bolívar (322%)
- Teusaquillo (256%)
- Engativá (240%)
- Rafael Uribe Uribe (225%)
- San Cristóbal (223%)
- Suba (203%)

Toda vez que se encuentran por encima del ponderado general de hacinamiento de los centros de detención transitoria. Así mismo, estas localidades resultan ser las más grandes en términos de población, lo que implica una necesidad urgente de atender la problemática.

Además, según la Policía Metropolitana de Bogotá en respuesta a derecho de petición del 22 de febrero de 2024⁴⁴, se constató que actualmente hay 379 policías extraídos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) destinados a la custodia de personas privadas de la libertad. Lo anterior no solo implica el uso de efectivos de la Policía Nacional en labores ajenas a sus funciones constitucionales y legales, sino también la disminución de estos efectivos para contribuir, desde las calles, a la crisis de seguridad que azota a la ciudad y la conformación de 190 cuadrantes.

Finalmente, luego de constatar que el problema de hacinamiento en los centros de detención transitorios en Bogotá no ha contado con los esfuerzos suficientes ni ha experimentado una reducción significativa que permita no solo la implementación de las medidas obligatorias establecidas por la Corte Constitucional, sino también garantizar materialmente el estricto cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos y estándares internacionales, que exigen un cupo carcelario por cada 250 habitantes, y en este sentido, sumando los cupos que se tienen en las estaciones de policía, URI de Puente Aranda, cárcel distrital, centro especial de reclusión y establecimientos de reclusión del orden nacional: Modelo, Picota y Buen Pastor, Bogotá cuenta con 12.273 cupos, por lo cual el estándar se ubica en un cupo carcelario por cada 650 habitantes aproximadamente.

En consecuencia, resulta imperativo que el Concejo de Bogotá asuma la vocería y ordene las medidas pertinentes mediante de un acuerdo distrital para abordar y contribuir desde el Distrito Capital la superación de la violación sistemática de los derechos humanos que persiste luego de 26 años de la

⁴⁴ Respuesta derecho de petición Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) febrero 2024.

primera declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en el Sistema Carcelario y Penitenciario, coadyuvando de esta manera a su levantamiento.

Diagnóstico en los Centros de Detención Transitoria.

Es necesario realizar visitas a los centros de detención transitoria por cuanto este ejercicio no solo permitirá arrojar un resultado sobre la calidad de vida de los privados de la libertad, sino también facilitará la identificación de los desafíos que enfrenta el Distrito de cara a la administración de los centros de detención para personas detenidas preventivamente⁴⁵. Así pues, a partir del análisis detallado de la capacidad de detención, las condiciones de vida de los reclusos, los costos asociados con la operación y el grado de cumplimiento de los estándares de derechos humanos, se podrá orientar eficazmente la planificación y construcción de la infraestructura necesaria, en aras de garantizar una respuesta adecuada a las demandas actuales y la creación de instalaciones que respeten y promuevan los derechos fundamentales de quienes se encuentran bajo detención preventiva.

Frente a ello, es necesario que la personería de Bogotá acompañe estas visitas con la finalidad de verificar la protección de los derechos humanos, el estado de las plantas físicas, el trato otorgado a los privados de la libertad, el estado higiénico y sanitario, las instalaciones de preparación de alimentos y su manipulación. En síntesis, en cumplimiento de su deber constitucional y legal⁴⁶ verifiquen las condiciones dignas de reclusión.

Alianzas público-privadas como herramienta para abordar el hacinamiento

A pesar de que la Ley 2197 de 2022, en su artículo 64, otorgó la posibilidad de realizar los diseños, construcción y dotación de la infraestructura carcelaria por medio de asociaciones público-privadas, a la fecha del presente acuerdo, en el distrito capital no se han realizado acciones tendientes a la implementación de esta clase de esquemas como alternativas de financiación con el objetivo de reducir el hacinamiento y garantizar condiciones humanitarias. En palabras de Bedoya & Vásquez (2020) este tipo de asociaciones constituyen una *“solución viable y definitiva al hacinamiento carcelario, siempre y cuando se implemente un modelo que vaya acorde a las necesidades de nuestro país. Además, es un tipo de contrato que ha sido utilizado de manera exitosa en otros proyectos que buscan darle desarrollo al país, razón por la cual, (...) la infraestructura carcelaria no sería la excepción.”*⁴⁷

⁴⁵ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2010). Medidas Privativas y No Privativas de la Libertad: El Sistema Penitenciario. Manual de Instrucciones para la Evaluación de la Justicia Penal. Viena. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/The_Prison_System_Spanish.pdf

⁴⁶ Art. 118 de la Constitución Política de Colombia; Art. 118 y 168 de la Ley 65 de 1993; resolución 993 de 2020 emitida por la Personería de Bogotá

⁴⁷ Bedoya Cruz, M., & Vásquez Naranjo, M. (2020). La viabilidad de las asociaciones público-privadas para el tratamiento penitenciario en Colombia: Monografía de grado. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Abogado. Director: Andrés Felipe Duque Pedroza, Doctor en Derecho. Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Recuperado de: <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/6339/La%20viabilidad%20de%20las%20asociaciones%20p%C3%BAblico-privadas%20para%20el%20tratamiento%20penitenciario%20en%20Colombia.pdf?sequence=1>

IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En compañía de la ciudadanía, se llevaron a cabo visitas a las estaciones de policía de Usaquén y Suba, donde se verificó la persistencia de un elevado nivel de hacinamiento, así como también la carencia de instalaciones que cumplan con las condiciones mínimas humanitarias. Además, se constató que uniformados de la Policía tenían a cargo la vigilancia de personas condenadas, quienes, de conformidad con la normativa interna, deberían estar bajo custodia del INPEC y separadas de aquellas privadas de la libertad preventivamente.



V. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y

el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:
(...)

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que el presente proyecto de acuerdo al dictar medidas generales para la descongestión de los Centros de Detención Transitorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Distrito Capital, no genera impacto fiscal para las finanzas del Distrito. Se traza es una ruta de acción a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para atender la problemática identificada.

V. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

La inseguridad, el limitado acceso a la justicia, la vulneración de derechos humanos para los privados de la libertad, la inadecuada infraestructura y la ausencia de fortalecimiento institucional constituyen factores que dificultan el desarrollo sostenible de la ciudad de Bogotá.

Por lo tanto, el presente proyecto de acuerdo tiene como propósito contribuir en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con el objetivo No. 16: “Paz, Justicia, e Instituciones Sólidas”⁴⁸. Este objetivo no solo busca proteger las garantías fundamentales de las personas privadas de la libertad propiciando un ambiente adecuado para su resocialización, sino también fortalecer las instituciones distritales para crear la capacidad de prevenir la reincidencia de aquellos en actividades delictivas.

⁴⁸ Objetivos de Desarrollo Sostenible; Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/>

Así las cosas, al establecer una serie de medidas que permitan fortalecer los centros de detención transitorios, con miras a reducir el hacinamiento, se implanta un enfoque integral al presente Proyecto de Acuerdo que pretende no solo abordar los desafíos actuales, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible y equitativo en la ciudad de Bogotá.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, titulado "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", fue aprobado por el Concejo de Bogotá mediante el acuerdo distrital 761 de 2020. En su artículo 15, se establecieron una serie de programas para ejecutar en concordancia con la política pública delineada en dicho acuerdo. Uno de los programas destacados es el Programa No. 47, que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos humanos.

En este contexto, el presente proyecto de acuerdo se enmarca y guarda una estrecha relación con el Plan Distrital de Desarrollo, ya que busca implementar medidas destinadas a contribuir significativamente a la disminución de las condiciones de hacinamiento en la ciudad de Bogotá. Como se ha señalado previamente, el hacinamiento persiste y experimenta un aumento gradual en las estaciones de policía y los Comandos de Atención Inmediata (CAI). Esta situación no solo vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que también dificulta la labor de las autoridades penitenciarias y policiales.

Estas medidas no solo favorecen el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo, sino que también facilitan la implementación de una estrategia específica orientada a recopilar información actual y específica sobre los niveles de hacinamiento en los Centros de Atención Inmediata. A partir de estos elementos, se espera que el Gobierno Distrital adopte los instrumentos jurídicos dispuestos por la ley para estudiar la viabilidad de fortalecer la infraestructura carcelaria, asegurando que cumpla con los estándares mínimos para el respeto de los derechos humanos.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 392 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA DESCONGESTIÓN DE
LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA QUE ESTÁN BAJO LA
JURISDICCIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

Artículo 1: Objeto: El presente acuerdo tiene como objeto la adopción de medidas para la descongestión de los Centros de Detención Transitorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Distrito Capital, buscando mejorar las condiciones de detención y fortalecer el sistema penitenciario de la ciudad de Bogotá D.C.

Artículo 2: Definición. Para efectos del presente acuerdo, se entenderá como Centro de Detención Transitoria (CDT), todos aquellos espacios físicos destinados para la detención preventiva de personas privadas de la libertad (PPL); capturadas y con medida de aseguramiento, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C.

Artículo 3: Diagnóstico. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, realizará una evaluación diagnóstica del estado de los Centros de Detención Transitoria ubicados en el Distrito Capital con el fin de identificar y abordar necesidades de infraestructura que contribuyan a la reducción del hacinamiento, atendiendo a los estándares internacionales vigentes.

Parágrafo: La evaluación deberá abordar los siguientes aspectos en particular, sin perjuicio de otros que se consideren pertinentes dentro del marco de la metodología técnica y específica que adopte la Administración Distrital:

- a. Capacidad total en cada CDT.
- b. Número total de PPL en cada CDT.
- c. Niveles de hacinamiento en cada CDT.
- d. Condiciones mínimas de habitabilidad en cada CDT.
- e. Estado de la infraestructura y mobiliario de cada CDT.
- f. Costo de operación de cada uno de los CDT.
- g. Número de custodios por turno en cada CDT.

Parágrafo Transitorio: El diagnóstico deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación del presente acuerdo y contará con el acompañamiento de la Personería de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, sin perjuicio de las demás entidades que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estime pertinente.

Artículo 4. Sistema Distrital de Información y Seguimiento al Hacinamiento en Centros de Detención Transitoria. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia adelantará las gestiones para el diseño, implementación, mantenimiento y actualización de un Sistema Distrital de Información y Seguimiento al Hacinamiento en Centros de Detención Transitoria (SIDH-CDT). Este sistema, de acceso público y en tiempo real, permitirá el monitoreo continuo de las condiciones de hacinamiento y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en Unidades de Reacción Inmediata (URI), estaciones de policía, centros de reclusión transitoria y cárceles distritales.

Parágrafo: Para garantizar la integralidad y la actualización permanente del SIDH-CDT, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia podrá suscribir convenios interadministrativos y acuerdos de intercambio de información con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Policía Metropolitana de Bogotá, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y demás entidades que se consideren pertinentes.

Artículo 5: Plan Progresivo de Deshacinamiento Distrital. La administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dentro de los tres (3) meses siguientes a la evaluación que trata el artículo anterior, establecerá un Plan Progresivo de Deshacinamiento en los Centros de Detención Transitoria bajo la jurisdicción del Distrito Capital.

Parágrafo El Plan Progresivo de Deshacinamiento Distrital (PPDD) incluirá medidas para abordar las siguientes problemáticas, sin menoscabo de aquellas que se identifiquen en el marco de la evaluación diagnóstica.

- a. Traslado de personas condenadas a centros carcelarios.
- b. Vulneración a Derechos Fundamentales de los PPL.
- c. Condiciones precarias de salubridad al interior de los CDT.
- d. Extranjeros privados de la libertad no identificados.
- e. Violencia, motines e intento de fuga en los CDT.
- f. Personal inadecuado y no autorizado para la custodia de PPL.

Artículo 6: Sin perjuicio de las medidas que trata el artículo anterior, se exhorta a la Administración Distrital a la construcción de un nuevo centro de reclusión para aquellas personas privadas preventivamente de su libertad.

Artículo 7: La Administración Distrital diseñará, formulará e implementará una estrategia para constituir Alianzas Público-Privadas (APP) como instrumento para la vinculación de capital privado en la financiación de la infraestructura necesaria para disminuir el hacinamiento en los Centros de Detención Transitorios del Distrito Capital.

Artículo 8: La Alcaldía Mayor de Bogotá, en colaboración con entidades gubernamentales y privadas, promoverá y financiará programas preventivos destinados a abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo, con el fin de reducir la incidencia de delitos y, en consecuencia, la necesidad de detención preventiva.

Artículo 9: Mecanismos de Supervisión. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, establecerá mecanismos de supervisión, monitoreo y seguimiento en aras de garantizar los derechos fundamentales de los sindicados durante su permanencia en los Centros de Detención Transitorios, incluyendo condiciones de alimentación, salubridad, higiene y sanidad.

Artículo 10: Informes Periódicos. La Alcaldía Mayor de Bogotá presentará un informe cada doce (12) meses al Concejo de Bogotá, detallando las acciones tomadas, los avances y resultados de cumplimiento a las disposiciones del presente acuerdo.

Artículo 11: Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y Cúmplase

H.C JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 393 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA DESCONGESTIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE BOGOTÁ, SE PROPENDE POR SU FORTALECIMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo establecer lineamientos para la descongestión de expedientes en las Inspecciones de Policía de Bogotá y su fortalecimiento, con el fin de agilizar los procesos jurídico- policivos, garantizando la pronta y efectiva resolución de los casos.

II. SUSTENTO JURÍDICO**• DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

Que el **artículo 1° de la Constitución Política de Colombia** establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Que el **artículo 2 de la Constitución Política de Colombia** precisa que Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Que el **artículo 209 de la Constitución Política de Colombia** establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que **el artículo 322 de la Constitución Política** de Colombia establece que Bogotá, Capital de la República, se organiza como Distrito Capital.

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios.

Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio.”

• DE ORDEN LEGAL

LEY 1801 DE 2016: “ Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.”

- **Numeral 13 Artículo 205:** Corresponde al Alcalde (...) Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y corregidores de Policía necesarios para la aplicación de este Código.
- **Parágrafo 2 Artículo 206:** Cada alcaldía tendrá el número de inspectores de Policía que el Alcalde considere necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de Policía en el municipio.

Habrán inspecciones de Policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento, en los distritos, y en los municipios que tengan una población superior a los cien mil habitantes.

• DE ORDEN DISTRITAL

ACUERDO 735 DE 2019 : “Por el cual se dictan normas sobre competencias y atribuciones de las Autoridades Distritales de Policía”

- **Artículo 7:** El Alcalde Mayor de Bogotá determinará el número de Inspecciones de Policía que considere necesario para una oportuna, rápida y cumplida prestación de la función de Policía en el Distrito Capital.
- **Parágrafo 2 Art 7:** El Alcalde Mayor de Bogotá podrá establecer Inspecciones de Policía para la atención de asuntos prioritarios, atendiendo criterios de interés general que impacten la convivencia ciudadana.

DECRETO DISTRITAL 033 DE 2021: “Por el cual se fija el número de Inspecciones de Policía en el Distrito Capital, se establece su competencia territorial y denominación, y se dictan otras disposiciones”

- **Artículo 1:** Fijar en doscientos veintitrés (223) el número de Inspecciones de Policía en el Distrito Capital, operadas por doscientos veintiséis (226) inspectores como autoridad de Policía.
- **Parágrafo 1 Artículo. 4:** Las Inspecciones de Policía que integran el Factor Localidad, estarán adscritas a la Alcaldía Local respectiva, cumpliendo las funciones establecidas en la Ley.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En la actualidad, la ciudad de Bogotá enfrenta diversos desafíos relacionados con la intolerancia, seguridad, convivencia y, en general, con el incumplimiento de la ley, los cuales han sido identificados como causas fundamentales y originarias de violencia. Ante esta situación, la promoción de la convivencia ciudadana se ha establecido como un objetivo prioritario para el Estado y se materializa por medio de expedición de políticas públicas y de normatividad que permitan prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el orden público, conminando a los ciudadanos al cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

Frente a la necesidad de lograr consolidar una sociedad cívica, surge el derecho policivo en el ordenamiento jurídico colombiano como una herramienta clave encargada de “*establecer el conjunto de reglas jurídicas que garantizan los valores colectivos a partir de la búsqueda de los principios esenciales constitucionales*”. Estos valores han propiciado un cambio significativo en la naturaleza de la norma policiva, que anteriormente se centraba en la limitación de los derechos y libertades públicas y que ahora se orienta hacia su garantía y materialización efectiva⁴⁹.

Este cambio se ve reflejado en la promulgación de la **Ley 1801 de 2016**, más conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establece y distingue **CINCO** aspectos fundamentales: el poder de policía, el poder subsidiario de policía y el poder residual de policía, así como la función y la actividad de policía:

El poder de policía, como lo define el artículo 11, se refiere a la facultad del Congreso de la República para expedir normas generales que regulen aspectos relacionados con la libertad, los derechos constitucionales y la convivencia, con el fin de establecer medios y medidas correctivas en caso de incumplimiento.

⁴⁹ Convivencia Y Cultura Ciudadana: Dos Pilares Fundamentales Del Derecho Policivo. María de Jesus Illera (2005). Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/851/85102310.pdf>

Por su parte, **el poder subsidiario de policía**, según lo establecido en el artículo 12, faculta a las asambleas departamentales y al Concejo Distrital de Bogotá para dictar normas en materias no reservadas legalmente, sin exceder las limitaciones impuestas por el legislador y respetando los derechos y deberes establecidos por ley.

Finalmente, **el poder residual de policía**, contemplado en el artículo 13, permite a los Concejos Distritales y Municipales reglamentar comportamientos no regulados por la ley o los reglamentos departamentales de policía, siempre y cuando se ciñan a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la ley.

Por otro lado, **la función de policía**, descrita en el artículo 16, es la facultad de hacer cumplir las disposiciones establecidas en ejercicio del poder de policía a través de reglamentos generales y acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Asimismo, el artículo 198 de la ley establece las autoridades competentes para ejercer la función de policía, que incluyen al Presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes distritales o municipales, **los inspectores de policía** y corregidores, así como las autoridades especiales y el personal uniformado de la Policía Nacional.

En última instancia, **la actividad de policía** consiste en la ejecución de medidas correctivas por parte del personal uniformado de la Policía Nacional, conforme a las atribuciones conferidas por la Constitución, las leyes y los reglamentos, con el objetivo de preservar la convivencia y restaurar los comportamientos que la alteren.

En este sentido, el presente proyecto de acuerdo se enfocará en adoptar nuevas medidas que contribuyan al cumplimiento y materialización de la **función de policía que ejercen los inspectores**. Lo anterior, de conformidad con la facultad que ostenta el Concejo Distrital para expedir normativa en el marco del poder subsidiario de policía, sin exceder las limitaciones establecidas en el artículo 12 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

● INSPECTORES DE POLICÍA-NATURALEZA JURÍDICA

Los inspectores de policía actúan como autoridades de apoyo en todo el territorio nacional. Su tarea primordial consiste en fomentar la convivencia pacífica en la comunidad, interviniendo para mediar y resolver los conflictos que surgen en la sociedad, aplicando las normativa establecida y las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. (Concepto 209911 de 2022, Función Pública)⁵⁰

Adicionalmente, las inspecciones de policía desempeñan un papel crucial en la protección y garantía de los derechos humanos, facilitan los procesos de conciliación y contribuyen con la descongestión

⁵⁰ Concepto 209911 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=196302#:~:text=Los%20empleados%20p%C3%ABlicos%20a%20que,disfrute%20del%20respectivo%20per%C3%ADodo%20vacacional.>

del sistema judicial (López, 2002)⁵¹. Frente a este último aspecto, es importante resaltar que los inspectores de policía tienen competencia en diversos asuntos vinculados con la convivencia ciudadana, lo que les permite intervenir y solucionar disputas previniendo que los ciudadanos accedan a la justicia ordinaria y se aumente su congestión.

No obstante, es esencial abordar el desafío que representa la congestión de expedientes al interior de las inspecciones de policía, aspecto que será profundizado en el siguiente apartado, especialmente enfocado en la realidad específica de las inspecciones en el Distrito Capital y a las conductas reiterativas que afectan la seguridad y convivencia ciudadana .

- **PANORAMA ACTUAL DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN BOGOTÁ Y PRINCIPALES CONDUCTAS REITERATIVAS.**

Actualmente, en Bogotá existen 126 inspecciones de Policía, pero solo 86 de estas están adscritas a cada una de las localidades de la ciudad. Estas inspecciones ejercen su competencia dentro del territorio correspondiente y están adscritas a la Alcaldía Local de su jurisdicción, desempeñando las funciones que les confiere la ley

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el número de inspecciones de Policía en cada localidad y la cantidad de expedientes acumulados en cada una de ellas:

⁵¹ Análisis Del Inspector De Policía En El Sistema Jurídico Colombiano: Régimen Jurídico En La Ley 1801 De 2016, Iván Camilo López Pinzón. Recuperado de: <https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/417d3c4f-27f7-4b8d-9bf7-c89604672034/content>

Localidad	Inspecciones	Expedientes
Usaquén	5	63.502
Chapinero	4	44.949
Santa Fe	5	122.564
San Cristóbal	4	29.604
Usme	4	54.961
Tunjuelito	3	55.379
Bosa	4	91.421
Kennedy	7	111.690
Fontibón	4	35.310
Engativá	7	81.979
Suba	7	117.241
Barrios Unidos	4	46.751
Teusaquillo	4	39.936
Los Mártires	3	74.550
Antonio Nariño	3	15.718
Puente Aranda	5	36.405
La Candelaria	1	23.879
Rafael Uribe Uribe	4	63.256
Ciudad Bolívar	5	103.249
Sumapaz	3	5
Total	86	1.212.344¹

Fuente: Respuesta de la Secretaría Distrital de Gobierno a la proposición 563 del 2024.

De esta información, se destaca que las localidades con mayor número de expedientes no necesariamente son aquellas que cuentan con el mayor número de inspecciones de Policía. Por ejemplo, las localidades de Bosa y Los Mártires cuentan solo con 4 y 3 inspecciones de policía cada una, pero tienen una cantidad amplia de expedientes acumulados: 91.421 y 74.550 respectivamente. Mientras tanto, localidades como Usaquén, que cuenta con 5 inspecciones, tienen solo 63.000 expedientes represados.

Por otro lado, localidades como San Cristóbal y Puente Aranda, con un bajo número de expedientes (29.604 y 36.405 respectivamente), tienen una asignación de inspecciones que resulta más alta (4 y 5) en comparación con su carga. También es el caso de Antonio Nariño que para 15.718 expedientes cuenta con 3 inspecciones.

Además, se deben sumar los expedientes de las restantes 40 inspecciones de policía que, por razones de competencia, están a cargo de la Secretaría de Gobierno. Estas incluyen los centros de traslado de protección, de atención al ciudadano y de atención prioritaria, que en total suman 190,341 expedientes activos.

Lo anterior permite concluir que, en total, sin contar Sumapaz ni aquellos procesos que se resuelven bajo el marco jurídico del Decreto 01 de 1986 y de la Ley 1437 de 2011, actualmente en la ciudad de Bogotá existen cerca de 1.402.685 expedientes

Por otra parte, es importante aclarar que estos procesos policivos se desarrollan dentro del marco normativo establecido por la Ley 1801 de 2016. No obstante, aún existen procesos vigentes que se rigen por dos marcos normativos anteriores a la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía: el Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437 de 2011. Según estos marcos, los alcaldes locales tienen la competencia para emitir fallos en primera instancia en dichos procesos. A continuación, se presentan las cifras de los procesos que actualmente cada alcaldía local tiene pendiente de fallo desagregado por temática.

LOCALIDAD	ALCALDIA	DECRETO 01/1984			LEY 1437/2011			Total general
		COMERCIO	E.PUBLICO	OBRAS	COMERCIO	E.PUBLICO	OBRAS	
01	Usaquen	532	142	507	463	119	864	2.627
02	Chapinero	149	85	240	139	44	346	1.003
03	Santa Fe	2	50	9	8	17	23	109
04	San Cristobal	146	175	188	68	75	693	1.345
05	Usme	25	136	399	68	136	570	1.334
06	Tunjuelito	5	8	18	21	64	15	131
07	Bosa	2	15	49	83	16	33	198
08	Kennedy	151	1.371	155	559	676	108	3.020
09	Fontibón	344	121	168	103	14	195	945
10	Engativá	578	714	967	414	55	890	3.618
11	Suba	1.062	776	386	658	285	996	4.163
12	Barrios Unidos	94	23	117	249	11	771	1.265
13	Teusaquillo	284	57	207	919	42	901	2.410
14	Martires	8	40	31	69	3	106	257
15	Antonio Nariño	68	59	101	76	16	497	817
16	Puente Aranda	49	121	113	272	147	534	1.236
17	La Candelaria	1		8	4		20	33
18	Rafael Uribe	45	78	179	287	556	403	1.548
19	Ciudad Bolívar	11	694	82	65	149	33	1.034
20	Sumapaz							
Total general		3.556	4.665	3.924	4.525	2.425	7.998	27.093

La necesidad de emitir estos fallos radica principalmente en que las problemáticas no resueltas durante tanto tiempo tienden a generar nuevas querellas. Esto incide directamente en el aumento de procesos, ahora bajo el marco normativo del Código Nacional de Policía, lo que congestiona aún más las inspecciones de policía en cada localidad.

Por otra parte, y en relación con las conductas reiterativas que han contribuido al incremento de expedientes, se detalla a continuación el total de casos iniciados durante el periodo comprendido

entre 2020 y 2023, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Top 10 de querellas y comparendos del código 1801 de 2016

ARTÍCULO	TOTAL (comparendo+ querellas)	CONDUCTA
27.6.	378.118	Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.
146.12.	127.159	Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto.
146.7.	117.490	Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades.
35.2.	114.756	Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
140.13.	90.126	Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en la normatividad vigente.
140.4.	34.532	Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes

95.1.	24.645	Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido.
140.14	21.875	Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad.
140.8.	20.710	Portar sustancias prohibidas en el espacio público.
35.1.	20.354	Irrespetar a las autoridades de Policía

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Respuesta de la Secretaría Distrital de Gobierno a la proposición 095 del 2024

El análisis muestra el top 10 de las infracciones más frecuentes en Bogotá, destacando problemas clave en seguridad, transporte y uso del espacio público. Portar armas o sustancias peligrosas (378.118 casos) lidera, reflejando una preocupación significativa en términos de seguridad ciudadana. Le siguen conductas relacionadas con el transporte público, como ingresar por lugares indebidos (127.159 casos) y evadir el pago del servicio (117.490 casos), lo que pone en evidencia desafíos en la gestión y el respeto al sistema de transporte. Además, se reportan infracciones en el cumplimiento de órdenes de la Policía (114.756 casos) y en el uso del espacio público, como instalar propaganda sin permiso (90.126 casos) y ocupaciones indebidas (34.532 casos.). En conjunto, estas infracciones son un reflejo de las principales problemáticas que enfrenta la ciudad en términos de convivencia, seguridad y gestión del espacio urbano.

Finalmente, es importante precisar que, mediante el Decreto 033 de 2021, estableció un total de 223 inspecciones de policía, incluyendo aquellas creadas específicamente para funciones de descongestión en virtud del Decreto 346 de 2020.

En línea con el propósito de cumplir con el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2023 y alcanzar la meta de descongestionar el 60% de las actuaciones de policía pendientes de fallo en primera instancia,

la Administración Distrital liderada por Claudia López implementó la creación de 320 empleos temporales, distribuidos de la siguiente manera:

- 100 inspectores de policía,
- 10 profesionales universitarios, y
- 210 auxiliares administrativos.

No obstante, estos cargos fueron de carácter temporal y su gestión culminó el 30 de junio de 2024. Como consecuencia, actualmente en Bogotá operan solo 126 inspecciones de policía de las 223 que estuvieron en funcionamiento durante la administración de Claudia López, lo que representa una reducción del 43,50% en el número de inspectores.

Esta situación agrava la congestión de expedientes, afectando la eficiencia en la resolución de casos y debilitando la capacidad de respuesta institucional. A la fecha, se desconoce la estrategia de la actual administración distrital para abordar y resolver los expedientes represados, lo que genera incertidumbre sobre la gestión y continuidad de los procesos pendientes.

IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En colaboración con la ciudadanía, se han desarrollado diversos espacios participativos en las diferentes localidades de Bogotá. A través de estos encuentros, se ha logrado identificar y agrupar las principales problemáticas que aquejan a la ciudad, gracias al aporte de los ciudadanos y su compromiso en la búsqueda de soluciones.

En este proceso, se ha puesto de manifiesto el profundo malestar de la comunidad hacia las instituciones judiciales de la capital. Los términos "demorados" y "complejos" son utilizados para describir la alta congestión que enfrentan las inspecciones de policía, debido a la gran cantidad de expedientes que deben manejar a diario como consecuencia de los problemas de seguridad y convivencia que afectan a la comunidad.

En su mayoría, las quejas de la ciudadanía, recaen las problemáticas de convivencia, tales como ruido, riñas, consumo y venta de estupefacientes, oferta de servicios sexuales pagos, que se desprenden del funcionamiento ilegal de establecimientos de alto impacto en zonas residenciales, decretadas por el Plan de Ordenamiento Territorial. Situaciones como estas, son competencia de las inspecciones de policía, las cuales no son resueltas a tiempo, afectando profundamente la calidad de vida de los bogotanos.



V. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que el presente proyecto de acuerdo al dictar medidas generales para la descongestión de las inspecciones de policía del Distrito Capital, no genera impacto fiscal para las finanzas del Distrito. Se traza es una ruta de acción a la Secretaría Distrital de Gobierno para atender la problemática identificada.

V. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

El limitado acceso a la justicia, la alta congestión de expedientes en las inspecciones de policía y la ausencia de fortalecimiento institucional constituyen graves obstáculos que dificultan el desarrollo sostenible de Bogotá como ciudad. Por lo tanto, el presente proyecto de acuerdo además del propósito establecido, pretende aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente alineándose con el ODS 16: "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas". Este objetivo apunta a promover sociedades pacíficas e inclusivas mediante el fortalecimiento del Estado de derecho, garantizando el acceso igualitario a la justicia para todos los ciudadanos, sin discriminación alguna. Además, busca crear instituciones eficaces, responsables, transparentes y garantes del debido proceso a todos los niveles.

Al descongestionar los expedientes y fortalecer las Inspecciones de Policía de Bogotá, este proyecto sienta las bases para consolidar la ley, mejorar la eficiencia en la administración de justicia y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones. Contribuyendo directamente a construir una sociedad más pacífica, segura e inclusiva, donde los conflictos se resuelvan por vías legales y legítimas. De esta manera, se allana el camino hacia el desarrollo sostenible de la ciudad, al tiempo que se promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones públicas.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

La administración distrital ha identificado la acumulación crítica de expedientes en las inspecciones de policía de Bogotá, reconociendo los obstáculos que esto representa para garantizar la pronta resolución de conflictos. En respuesta, el plan Distrital de Desarrollo ha establecido la meta de **emitir 1.608.200 fallos de fondo en primera instancia para los expedientes relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia, conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana**. Este objetivo se enmarca dentro del programa *"Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza"*, que contempla reducir el número de expedientes represados en las estaciones de policía, facilitando así la aplicación efectiva del Código de Policía.

Durante el cuatrienio anterior, se implementó un plan de fortalecimiento institucional que incluyó la asignación de recursos y la contratación de 673 funcionarios especializados para las plantas de inspecciones de policía y corregidores, con un plazo estimado de 2,5 años. Sin embargo, según lo expuesto en la parte motiva del presente proyecto de acuerdo, estas medidas no han logrado descongestionar satisfactoriamente las inspecciones de policía.

En consecuencia, este proyecto propone lineamientos claros y específicos que serán fundamentales para alcanzar la meta establecida en el Plan Distrital de Desarrollo. Se presentan medidas estratégicas orientadas al fortalecimiento de las inspecciones de policía, las cuales son esenciales para abordar y resolver la problemática de congestión de expedientes previamente identificada.

PROYECTO DE ACUERDO NO 393 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA DESCONGESTIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE BOGOTÁ, SE PROPENDE POR EL FORTALECIMIENTO A LOS INSPECTORES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el numeral 1, del artículo 12 y del Decreto 1421 de 1993,

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer lineamientos para la descongestión de expedientes en las Inspecciones de Policía de Bogotá y su fortalecimiento, con el fin de agilizar los procesos jurídico-policivos, garantizando la pronta y efectiva resolución de los casos.

Artículo 2. Metodología de Clasificación de Expedientes. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, propenderá por la construcción y elaboración de una metodología de clasificación de expedientes que permita identificar, clasificar y priorizar expedientes activos para fortalecer la resolución de procesos contravencionales.

Artículo 3. Inspecciones de Descongestión Transitorias. La Secretaría Distrital de Gobierno adelantará los estudios pertinentes para la creación de inspecciones de descongestión de carácter transitorio en el Distrito. Estas inspecciones operarán hasta que se logre una reducción significativa y sostenible del represamiento de procesos en las inspecciones de policía de competencia territorial, según criterios técnicos que serán definidos por la misma Secretaría.

Artículo 4. Tecnologías de Información. La Administración Distrital impulsará la implementación de tecnologías de información en las Inspecciones de Policía, con el fin de agilizar los procesos de documentación, seguimiento y control de expedientes.

Artículo 5. Priorización de trámites administrativos. La Administración Distrital dará prioridad a los trámites administrativos relacionados con las actuaciones jurídicas propias del proceso único de Policía.

Artículo 6. Capacitaciones. La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno Distrital, deberá llevar a cabo un proceso de fortalecimiento del personal de las Inspecciones de Policía, proporcionando capacitación continua, actualización en normativa vigente y garantizando condiciones laborales adecuadas para su desempeño eficiente.

Artículo 7. Estudio, ampliación y reubicación de las Inspecciones de Policía. Con el fin de mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta de las Inspecciones de Policía en el Distrito Capital, la Administración distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno realizará un estudio para evaluar la distribución actual de inspecciones y la carga de expedientes acumulados. Basado en los resultados, se propenderá por aumentar el número de inspecciones en las localidades con alta acumulación de expedientes o su reubicación.

Artículo 8. Fomento a Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Administración Distrital deberá fomentar la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos tales como la conciliación y la mediación, con el propósito de propender a la solución expedita de controversias y reducir la carga de expedientes.

Artículo 9. Gestión de expedientes previos. Con el fin de descongestionar los procesos policivos y administrativos, la administración distrital propenderá por fallar los expedientes previos a la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 en un plazo no mayor a los 2 años contados a partir de la expedición del presente acuerdo.

Artículo 10. Reglamentación e implementación. La Administración reglamentará e iniciará la implementación de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 11. Vigencia: El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su promulgación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

H.C JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 394 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TEJO COMO DISCIPLINA DEPORTIVA, MOTOR ECONÓMICO Y EXPRESIÓN CULTURAL EN EL DISTRITO CAPITAL"****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer medidas para la promoción y fomento del tejo, tanto en su dimensión deportiva como en su valor patrimonial en el Distrito Capital.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

Artículo 67. *La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.*

Artículo 70. *El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.*

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71. *La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.*

Artículo 72. *El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.*

Bloque de Constitucionalidad.

Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo 22. *Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a (...) la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.*

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 3: *Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.*

Artículo 15: *1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:*

a) Participar en la vida cultural

(...)

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

(...)

De orden legal:

Ley 613 de 2000 “ Por la cual se declara a la disciplina del tejo como deporte nacional y se dictan otras disposiciones”

Artículo 1º. Declárese la disciplina deportiva del tejo como deporte nacional en todo el territorio. Su divulgación y fomento estará a cargo del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte.

[...]

Artículo 3º. El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte como máximo organismo planificador y rector, fijará los propósitos, estrategias y orientaciones para el desarrollo del tejo; promoverá y regulará la participación del sector privado, asociado o no, en esta disciplina deportiva; dará asistencia técnica a los entes departamentales, distritales y municipales para la formulación de planes deportivos y la ejecución de proyectos relacionados con este deporte.

Ley 1947 de 2019, “Por medio del cual se declara el juego al turmequé (tejo) como patrimonio cultural inmaterial de la nación y se dictan otras disposiciones.”

Artículo 1. OBJETO. Declarar las manifestaciones y expresiones culturales y deportivas del juego al turmequé (tejo) como patrimonio cultural inmaterial de la nación.

ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL. Autorícese al Gobierno nacional, departamental y municipal la destinación de las apropiaciones presupuestales necesarias para la ejecución de las siguientes acciones, obras e intervenciones de interés social y de utilidad pública:

1. Garantizar la protección, rescate, promoción y difusión de la manifestación cultural y deportiva del juego al turmequé (tejo).

2. Promocionar el juego al turmequé (tejo), para fortalecer el sentido de pertenencia, arraigo e identidad nacional en sus manifestaciones culturales y deportivas.

3. Promover la investigación, historia, y el rescate y difusión de las tradiciones del juego al turmequé (tejo), para que perduren en el tiempo y se transmitan de generación en generación.

4. Construir y dotar escenarios con infraestructura y espacios adecuados en cada uno de los departamentos que cuenten con liga registrada y vigente ante la Federación Colombiana de Tejo (Fedetejo) para realizar eventos y olimpiadas nacionales e internacionales del juego al turmequé (tejo)

De orden Distrital:

Acuerdo Distrital 257 de 2006. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Artículo 90. Misión del Sector Cultura, Recreación y Deporte. El Sector Cultura, Recreación y Deporte tiene como misión garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, a la recreación y al deporte de los habitantes del Distrito Capital, así como fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo.

Para los correspondientes efectos se entenderá la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan el conglomerado humano que habita en el Distrito Capital y a sus distintos sectores y comunidades y que engloba además de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y bajo el reconocimiento de que la cultura es por su propia naturaleza, dinámica y cambiante.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

SINOPSIS HISTÓRICA DEL TEJO

El origen del tejo, o *turmequé*, como lo conocían nuestros antepasados, se remonta a hace más de 500 años en el altiplano cundiboyacense, territorio ancestral de los muiscas, quienes fueron los pioneros de este deporte. Originalmente, la práctica del tejo no era accesible para todos; solo los caciques tenían acceso a él⁵², y usualmente lo practicaban durante fiestas ceremoniales.⁵³

Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (s.f.),⁵⁴ El tejo se practicaba con mayor intensidad en Turmequé, municipio actual de Boyacá. Este municipio, durante la época de la Conquista, era un importante centro de desarrollo económico para los pueblos indígenas, un lugar de

⁵²<https://bogotachirriada.com/historia-y-reglas-del-juego-de-tejo/?srsltid=AfmBOopO5-q72Y7SGESa2gtNC91IWRGab7YUbnVVjHnyJRfFz0jX4uWv>

⁵³ [Del oro al hierro explosivo, así es el tejo en Bogotá](#)

⁵⁴ [Tejo | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte](#)

encuentro para la comercialización de productos, el intercambio de bienes y servicios, entre otras actividades económicas que incidían en el desarrollo del pueblo muisca. Además, Turmequé se caracterizaba por ser epicentro de actividades deportivas, entre ellas el tejo, razón por la cual este último también es conocido con ese nombre.

Este deporte se practica actualmente con un disco de acero; sin embargo, en aquel entonces se utilizaba un disco de oro llamado *zepguagoscua*, adquirido mediante trueque con otras comunidades, el cual “*simbolizaba el sol, representaba uno de sus dioses, (...) asimismo, hacen una veneración al sol ya que, al lanzar el tejo, este hace el mismo movimiento que el sol recorre, nace en el oriente y se oculta en el occidente, es el mismo movimiento parabólico*”⁵⁵.

Por otra parte, existen algunos mitos en torno al tejo, como la creencia de que inicialmente este deporte consistía en acertar el tejo en un hueco en la tierra, y que posteriormente, con la llegada de los españoles, se introdujo la pólvora o las mechas que explotan al ser alcanzadas por el tejo⁵⁶. Sin embargo, esto último no está comprobado. Lo que sí es cierto es que el tejo, o turmequé, no solo se constituye como una tradición cultural y deportiva de nuestro país, convirtiéndolo en el único deporte autóctono de Colombia,⁵⁷ sino también, en la actualidad, se puede abordar desde una dimensión que incide positivamente en la economía del país.

A continuación, se profundizará en estas tres dimensiones desde las cuales se puede abordar el tejo:

1. Dimensión Deportiva

Desde su declaración como deporte nacional, el tejo ha contado con la supervisión del Ministerio del Deporte, a través de Coldeportes, que actúa como la máxima autoridad en el seguimiento y regulación de esta disciplina. Este organismo ha establecido las reglas generales para su práctica, promoviendo un proceso de transformación que permitió al tejo evolucionar de un juego tradicional a una disciplina formal.

Esta evolución ha facilitado su integración en todos los sectores de la sociedad, abarcando desde las zonas rurales y las periferias urbanas hasta las élites de las grandes ciudades, consolidándose así como un símbolo del deporte nacional. Tal como lo señala Rodríguez (2013)⁵⁸, este posicionamiento refleja el alcance y la trascendencia cultural del tejo en Colombia:

Las élites consideraron que las disciplinas deportivas poseían todos estos atributos que ayudarían a superar dichas dificultades, tal vez, por los manuales deportivos (reglas) que poseen, el manejo del cuerpo en público, la disciplina que exige, el juego de roles que se

⁵⁵ *ibidem*

⁵⁶ *ibidem*

⁵⁷ *ibidem*

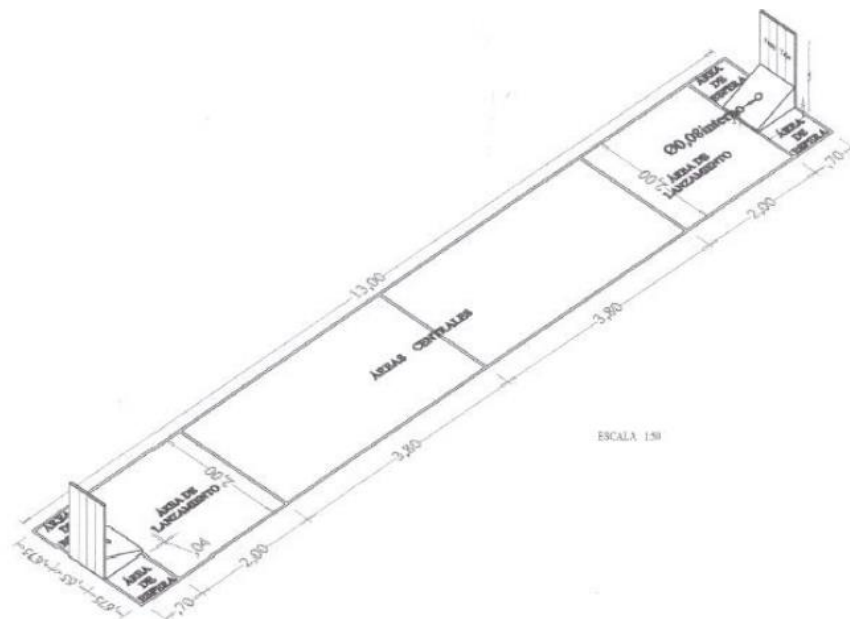
⁵⁸ G.A. Rodríguez (2013). El juego de Tejo ¿Un símbolo nacional o un proyecto inconcluso? Revista Historia Y MEMORIA, núm. 7. pp. 169-198 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

impone, las normas que se inculcan, el control de sus emociones y la creciente idea de civilidad que representaba. (p. 6)

En este contexto, se establecieron reglamentos deportivos que definen la práctica del tejo o turmequé. Este deporte consiste en lanzar un disco metálico, conocido como tejo, hacia un área denominada "bocin", ubicada en el extremo opuesto del campo de juego. El bocin está formada por una circunferencia metálica rodeada de pequeñas cargas de pólvora llamadas "mechas", que se colocan sobre una caja de greda. El tejo, como único elemento del juego, combina habilidad, precisión y la expectativa de conseguir la explosión generada por el impacto a las mechas, que simboliza el éxito de un buen lanzamiento.

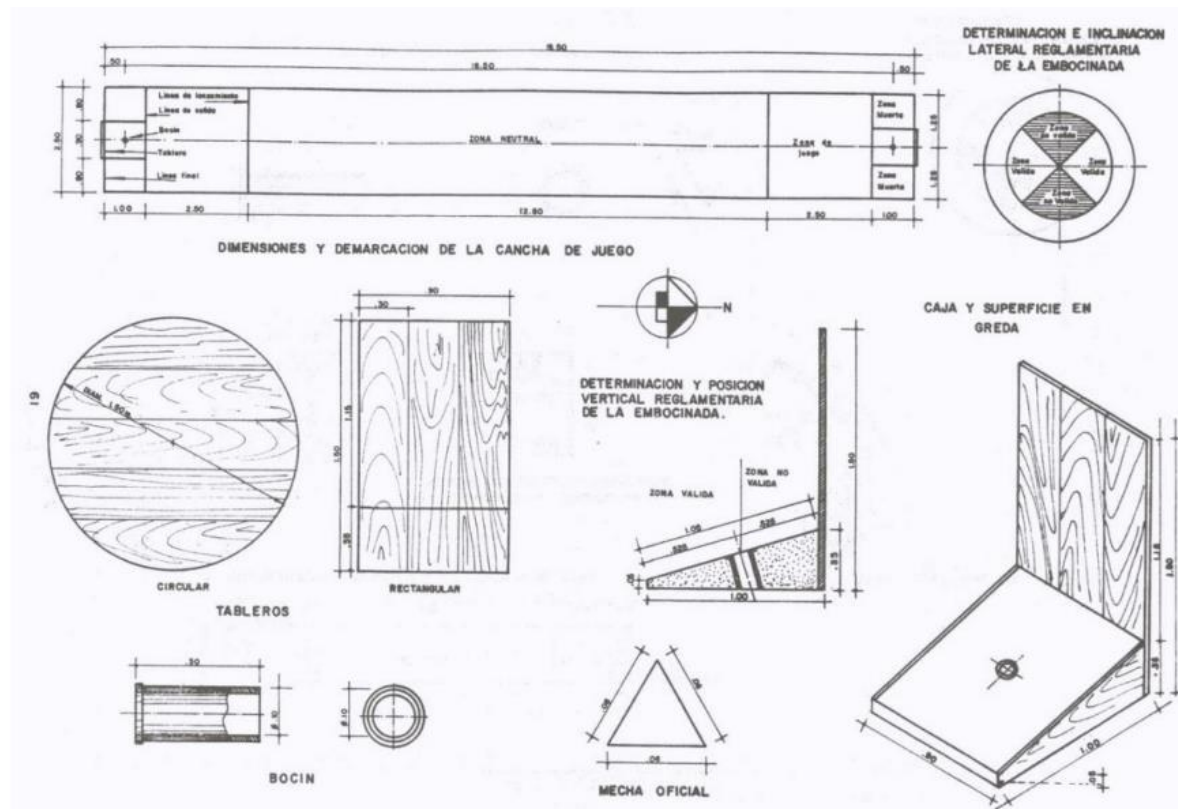
En las competencias, los jugadores pueden participar en modalidades de equipos, duplas o individual. Cada partido se desarrolla en dos periodos de nueve entradas, con un descanso de cinco minutos entre ellos. El equipo que acumule la mayor cantidad de puntos al finalizar las 18 entradas es declarado ganador. Durante el juego, los equipos tienen derecho a solicitar un tiempo técnico de un minuto por periodo.

El sistema de puntuación está diseñado para reflejar la destreza de los jugadores. Las principales figuras son la “moñona”, que otorga 9 puntos cuando el tejo golpea la bocin y hace explotar una mecha simultáneamente; la “embocinada”, que vale 6 puntos cuando el tejo cae dentro de la bocin sin detonar una mecha; la “mecha”, que otorga 3 puntos al explotar una de estas cargas de pólvora; y la “mano”, que concede 1 punto al jugador cuyo tejo queda más cerca del bocin sin realizar ninguna figura.



Fuente: *reglamento de los intercolegiados nacionales de Min. Deporte*

El campo de juego tiene dimensiones reglamentarias que varían según la categoría. Para los adultos, la longitud total es de 19.50 metros, con áreas de lanzamiento específicas: 3.50 metros para mujeres y 2.50 metros para hombres. En el caso del Ponytejo, el área de juego mide 13 metros de largo por 2 metros de ancho, lo que lo adapta a las necesidades de los jugadores más jóvenes. El peso de los tejos también está regulado, oscilando entre 1.125 y 1.625 gramos en la categoría regular y hasta 750 gramos en el Ponytejo.



Fuente: reglamento de los intercolegiados nacionales de Min. Deporte

Los deportistas deben cumplir con un código de presentación que incluye el uso de un uniforme oficial numerado, compuesto por una camiseta, pantalón deportivo y calzado adecuado. Además, antes de iniciar un partido, todos los jugadores están obligados a calibrar sus tejos para garantizar la equidad en el juego.

En caso de empate en el marcador final, se aplican criterios específicos para determinar al ganador. Primero, se considera la cantidad de figuras realizadas en orden descendente (moñonas, embocinadas y mechas). Si persiste el empate, se analizan los puntos a favor, los puntos en contra y la diferencia entre ambos. De continuar la igualdad, el desempate se define mediante sorteo.

Este reglamento es avalado por el ministerio del deporte y diseñado para competencias como los Juegos Intercolegiados Nacionales, refleja la importancia de estandarizar el deporte del tejo, promoviendo la práctica justa y organizada de esta disciplina que es parte integral de la cultura colombiana.

2. Dimensión Cultural

El tejo se puede analizar desde un punto de vista cultural, no solo por el origen histórico antes mencionado, sino también por la permanencia de esta actividad deportiva en el tiempo. A lo largo de los siglos, el tejo evolucionó y se adaptó, pero nunca desapareció. Pasó de ser una práctica indígena a un juego popular entre diferentes clases sociales, especialmente en las zonas rurales y los barrios populares de la ciudad. Esta continuidad a lo largo del tiempo ha fortalecido su presencia en la identidad cultural colombiana.

Adicionalmente, el tejo en nuestra cultura no sólo es concebido como un juego, sino también un espacio de encuentro social. Las canchas de tejo son lugares donde los ciudadanos se reúnen a compartir, socializar y pasar un buen rato. Se convierte en un punto de encuentro intergeneracional donde se transmiten historias, costumbres y tradiciones.

Por otra parte, desde el Congreso de la República se han hecho esfuerzos para visibilizar y proteger la práctica del tejo en nuestro país. Inicialmente con la Ley 613 de 2000⁵⁹ se declaró la disciplina deportiva del tejo como deporte nacional en todo el territorio y encargó al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte⁶⁰ su divulgación, fomento y asistencia técnica a los entes territoriales para la formulación de planes deportivos y la ejecución de proyectos relacionados con este deporte.⁶¹

Con posterioridad, el tejo fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la nación con la expedición de la ley 1947 de 2019⁶². Con esta declaratoria no sólo se engrandeció una tradición cultural profundamente arraigada que ha evolucionado hacia una disciplina formal, sino que también fortaleció económicamente la creación de asociaciones, ligas y federaciones. Actualmente, La Federación Colombiana de Tejo cuenta con 34 equipos, 79 miembros activos y más de 20 actividades anuales y se ha consolidado como un organismo clave para la promoción de este deporte en el ámbito nacional. Esta organización reúne a deportistas de regiones como Tolima, Valle del Cauca, Boyacá, el Eje Cafetero, Cundinamarca y Meta. Además, Bogotá ha sido escenario de eventos de gran envergadura, como el "Encuentro Mundial de Tejo", donde participaron delegaciones de países como Japón, India, Perú, España, Reino Unido, Canadá y Venezuela, demostrando la creciente internacionalización de esta práctica.

⁵⁹ [Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad \[LEY_0613_2000\]](#)

⁶⁰ El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte fue creado a través del Decreto 2743 de 1968. Hoy se conoce como el Ministerio del Deporte.

⁶¹ Art 2 y Art 4, Ley 613 de 2000.

⁶² [Ley 1947 de 2019 - Gestor Normativo - Función Pública](#)

Finalmente, el tejo ha trascendido su carácter deportivo para convertirse en un símbolo patrimonial del país. Un ejemplo destacado es el monumento al cacique Turmequé, ubicado en el parque principal del municipio de Turmequé, en Boyacá, reconocido como la cuna mundial de este deporte. Esta obra, creada por el maestro Omar Santamaría⁶³, tiene cuatro metros de ancho y quince de alto, y rinde homenaje tanto a la historia indígena como a la relevancia del tejo en la identidad nacional. Estas iniciativas no solo refuerzan la importancia del deporte, sino que también lo posicionan como un centro turístico cultural.



Archivos multimedia Wikipedia: Homenaje al cacique Turmequé

3. Dimensión Económica

En primer lugar, como deporte competitivo, el tejo dinamiza la economía a través de la organización de torneos locales y nacionales, que generan ingresos por inscripciones, boletos y patrocinadores. Además, fomenta el desarrollo de infraestructura deportiva, como clubes y escenarios especializados, que son esenciales para su práctica y promoción. Asimismo, el tejo atrae a turistas interesados en conocer y vivir esta tradición, lo que incrementa el flujo de visitantes y su gasto en la ciudad, impulsando tanto el turismo como los sectores asociados.

En segundo lugar, los establecimientos comerciales asociados al tejo, como canchas y chicherías, constituyen un motor importante para la economía local. Estos negocios no solo generan ingresos por la oferta del juego, sino también por el consumo de alimentos y bebidas que suelen complementar la experiencia. La modernización de algunos de estos espacios, que incorporan tecnología y conceptos gastronómicos innovadores, ha permitido atraer a nuevos públicos y diversificar su base de clientes.

⁶³ Monumento al Cacique Turmequé. <https://situr.boyaca.gov.co/cacique-turmeque/>

Además, estos establecimientos impulsan microempresas proveedoras de insumos como arcilla, mechas explosivas y equipos deportivos, fortaleciendo cadenas de valor locales.

En este contexto, el primer Mundial de Tejo realizado en Colombia en 2023 marcó un hito histórico. Este evento contó con la participación de más de siete establecimientos de comercio dedicados a la promoción del deporte, como las canchas “Tejo la Embajada,” “Tejo Turmequé,” y “Tejo Ancestral,” entre otros. A través de la ampliación de la red de establecimientos y la inclusión de clubes como “Club Tejo la 76” y “Club Social y Deportivo el Porvenir Norte,” se busca fortalecer la economía popular que gira en torno al tejo, atrayendo a un número creciente de turistas interesados en experiencias deportivas tradicionales.

El Mundial de Tejo evidencia un creciente interés extranjero en este deporte autóctono colombiano, destacándose como un potencial atractivo turístico. Según cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá, en diciembre de 2024, la capital recibió alrededor de 1.163.823 turistas, de los cuales el 12,4% eran internacionales, reflejando un incremento de flujos internacionales del 21,9% respecto a 2023.⁶⁴ Este aumento de visitantes no solo reafirma el interés cultural por Colombia, sino que también impulsa la economía local al incentivar experiencias turísticas únicas, como la práctica del tejo⁶⁵. Promover este deporte autóctono se consolida como una estrategia clave para ofrecer a los turistas internacionales una experiencia auténtica y representativa de la cultura colombiana.

El Ministerio de Cultura de Colombia respalda la importancia del tejo al señalar que alrededor del 90% de la población colombiana ha practicado este deporte en algún momento de su vida (VOA, 2023)⁶⁶. Además, según un artículo de El Tiempo (2018)⁶⁷, existen 24 ligas de tejo registradas ante la Federación Colombiana de Tejo y más de 70,000 canchas artesanales en todo el país, lo que subraya su amplia distribución y relevancia cultural.

Este tipo de eventos y estrategias no solo fomentan el desarrollo de la economía local, sino que también refuerzan el reconocimiento internacional de un deporte profundamente arraigado en la identidad colombiana. De esta manera, el tejo se convierte en un puente entre lo autóctono y lo global,

⁶⁴ Información extraída de la página oficial del Instituto Distrital de Turismo (IDT) <https://www.idt.gov.co/es/bogota-recibio-mas-de-11-millones-de-turistas-en-diciembre-de-2024>

⁶⁵ Extraído de nota del espectador 2023. **Mundial de Tejo en Bogotá 2023: fechas, lugares y todo lo que debe saber:** https://www.elspectador.com/deportes/mundial-de-tejo-en-bogota-2023-fechas-lugares-y-todo-lo-que-debe-saber/?utm_source=chatgpt.com

⁶⁶ Extraído de la nota de VOA la Voz de América. El tejo, deporte nacional de Colombia, mezcla explosiones, cerveza y comida. <https://www.vozdeamerica.com/a/tejo-deporte-nacional-colombia-mezcla-explosiones-cerveza-y-comida/7233686.html>

⁶⁷ Extraído de la nota del tiempo. Existen 24 ligas de tejo registradas ante la Federación Colombiana de Tejo y más de 70,000. <https://www.eltiempo.com/deportes/otros-deportes/historias-datos-y-curiosidades-sobre-el-tejo-277078#:~:text=Datos%20curiosos%20sobre%20el%20tejo%3A&text=Ligas%20y%20canchas%3A%20Seg%C3%BA%20la,canchas%20artesanales%20para%20su%20pr%C3%A1ctica%E2%80%9D>

contribuyendo al posicionamiento de Colombia como un destino turístico cultural y económicamente dinámico.

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El tejo, como deporte autóctono de Colombia, se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8: ***Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos*** al fomentar actividades productivas y el emprendimiento local mediante la priorización de espacios formales para su práctica como canchas ,y, con la promoción de actividades productivas en establecimientos comerciales dedicados a su práctica.

“8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra” (ODS, s, f.)

Estos escenarios no solo generan empleos decentes, sino que también impulsan la creatividad e innovación al incorporar elementos culturales y turísticos que atraen tanto a nacionales como a extranjeros. Además, apoyar el desarrollo de estas iniciativas puede contribuir a la formalización y el crecimiento de microempresas vinculadas al deporte.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”

Según el Plan Distrital de Desarrollo, formalizado a través del Acuerdo Distrital 927 de 2024, la presente iniciativa se relaciona con el **Programa 15. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural:**

Promover que las artes, la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física sean parte fundamental de la vida cotidiana de la ciudadanía, garantizando los derechos culturales para el reconocimiento, apropiación, intercambio, innovación y conjugación de las dimensiones artísticas, creativas y deportivas desde los enfoques: diferencial, de género y territorial, hacia la construcción de una ciudad cuidadora, sostenible, incluyente, innovadora, consciente y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad y diversidad, y potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte y la cultura como una forma de vida. (...)

Su relación radica en la responsabilidad del Distrito en fomentar el reconocimiento, la apropiación, el intercambio, la innovación y la integración de las dimensiones artísticas, creativas y deportivas de la práctica del tejo en Bogotá. Esto se materializa mediante la priorización de canchas de tejo en la

planificación y creación de espacios deportivos en Bogotá D.C. Asimismo, dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para apoyar iniciativas que promuevan esta disciplina.

“Artículo 120. Sistema Distrital de Turismo. La Secretaría de Desarrollo Económico reglamentará el Sistema Distrital de Turismo en armonía con el Plan de Ordenamiento Territorial, como esquema que permita generar acciones y proyectos interinstitucionales para la consolidación de Bogotá Región como destino líder en Colombia y Latinoamérica.”

La estrecha relación de la cultura colombiana con los extranjeros, sumada a su creciente interés por visitar la capital, impulsa a la administración a desarrollar acciones y proyectos interinstitucionales que permitan consolidar la disciplina del tejo a nivel internacional. Un ejemplo de ello es el “mundial de tejo” que parte de iniciativas privadas. El Sistema Distrital de Turismo debe impulsar estas iniciativas conforme al artículo 120 del Plan de Desarrollo 2024 - 2027.

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

VII. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

La promoción del tejo como disciplina deportiva preserva valores culturales y fomenta el desarrollo económico mediante lineamientos específicos para la Administración Distrital, sin generar gastos adicionales para el Distrito. Estas acciones fortalecen el reconocimiento del tejo como deporte profesional mediante la adecuación de escenarios deportivos existentes. Además, se impulsa como una actividad económica que promueve la formalidad y brinda asistencia técnica a pequeños emprendedores. La implementación de estas medidas, enfocadas en el reconocimiento y la profesionalización tanto deportiva como económica, reafirma el carácter del tejo como patrimonio cultural e inmaterial a nivel nacional y distrital.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

Concejal de Bogotá D.C.

Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 394 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TEJO COMO DISCIPLINA DEPORTIVA, MOTOR ECONÓMICO Y EXPRESIÓN CULTURAL EN EL DISTRITO CAPITAL”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer medidas para la promoción y fomento del tejo en su dimensiones deportiva, económica y cultural en el Distrito Capital.

Artículo 2. La Administración Distrital, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), priorizará la adecuación y creación de campos de tejo en los escenarios deportivos propios o administrados por este, que cumplan con las condiciones técnicas y de viabilidad, siguiendo los lineamientos técnicos establecidos por la Federación Nacional de Tejo para tal efecto.

Artículo 3. El Instituto Distrital de Turismo (IDT) implementará estrategias para fomentar el turismo cultural nacional e internacional mediante la práctica y promoción del tejo, declarado como patrimonio cultural inmaterial en la Ley 1947 de 2019, incluyendo su incorporación en las rutas turísticas del Distrito, la ejecución de campañas de sensibilización que resalten su historia, tradición y vínculo con la identidad nacional del tejo, y la articulación con asociaciones deportivas, culturales y empresas para la preservación y promoción de esta práctica como una actividad turística inclusiva y representativa del patrimonio cultural inmaterial.

Artículo 4. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, promoverá la capacitación y el acompañamiento técnico para la formulación e implementación de proyectos productivos ciudadanos con relación a esta disciplina.

Artículo 5. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico implementará una estrategia integral orientada a la realización de acciones de focalización, sensibilización y capacitaciones especializadas en gestión empresarial para emprendimientos relacionados con esta disciplina. Asimismo, promoverá la implementación de incentivos y otras medidas que la Secretaría considere pertinentes, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento de este sector.

Artículo 6. Informes. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte entregará un informe al Concejo de Bogotá relacionando el seguimiento e impacto de las orientaciones y medidas contenidas en el presente Acuerdo, que evidencien avances de su cumplimiento. Dicho informe, se presentará ante el Concejo de Bogotá D.C. cada 23 de agosto.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su promulgación.

Publíquese y Cúmplase

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

Concejal de Bogotá

Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 395 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA CÁTEDRA DE EDUCACIÓN EN CULTURA Y USO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS COLEGIOS DE BOGOTÁ”

1. OBJETO DEL PROYECTO

La presente iniciativa tiene por objeto incorporar una cátedra en los colegios distritales de la ciudad con el fin que se le imparta a los niños, niñas y adolescentes conocimiento sobre cultura y reglas de comportamiento en el uso de los diferentes Sistema de Transporte Público que tiene la ciudad como es TRANSMILENIO, Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el METRO, con la presente iniciativa se busca generar en los niños, niñas y adolescentes sentido de pertenencia, respeto en los espacios compartidos, uso adecuado de los diferentes medios de transporte público e inculcar el respeto y cuidado a los bienes de uso público que tiene la ciudad.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2.1 Antecedentes de la Iniciativa

Como tal antecedentes, sobre impartir una cátedra de educación en cultura y uso de los sistemas de transporte en los Colegios Distritales de la ciudad no hay, pero a través de los tiempos se han implementado diferentes estrategias y programas.

Por ejemplo las diferentes campañas o estrategias que se han implementado son las siguientes; para el año 2013 desde Transmilenio junto con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Policía Nacional crearon un programa llamado “Cultura TM”⁶⁸ con el que se buscaba promover comportamientos de uso solidario al interior de los buses y afianzar el sentido de pertenencia de los usuarios hacia el Sistema de Transporte de esa época, programa que contaba con 4 estrategias como pedagogía ciudadana, capacitación permanente, seguridad humana y corredor cultural de Transmilenio y el SITP.

En el año 2015, por iniciativa ciudadana en diferentes portales y estaciones se buscó con un silbato reprender socialmente a las personas que evadían el pago del pasaje.

Para el año 2017, en la Administración del entonces Alcalde Mayor Enrique Peñalosa Transmilenio también realizó una campaña llamada “Todos Pagamos el Pato”⁶⁹ centrada en la cultura ciudadana con el fin de reducir los colados; otra de sus puestas en marcha fue junto con la Secretaría Distrital de Movilidad y donde se buscaba

⁶⁸ Cultura TM: un programa para movernos mejor recuperado de <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/146372/cultura-tm-un-programa-para-movernos-mejor/>

⁶⁹ “Todos Pagamos el Pato”, campaña de cultura ciudadana para reducir colados en TransMilenio recuperado de <https://bogota.gov.co/miudad/movilidad/pato-de-transmilenio-que-significa#:~:text=El%20alcalde%20de%20Bogot%C3%A1%2C%20Enrique,ingresan%20a%20TransMilenio%20sin%20pagar.>

una ciudad accesible, amable e incluyente, que buscaba favorecer a la población con discapacidad facilitando los medios que posibilitan su autonomía y movilidad en Bogotá a través del Sistema.

En el año 2019, desde Transmilenio se impartió una campaña “Me uno para vivir mejor”⁷⁰ con el que se buscaba incrementar la tolerancia e incentivar el acatamiento del Código Nacional de Policía, campaña enmarcada en comportamientos de cultura ciudadana que se encuentran en el Código Nacional de Policía y Convivencia y con la implementación de acciones diarias que contribuyan en la construcción de una Bogotá mejor todos.

También se realizó la campaña cívica “TMuevo en paz”⁷¹ la Gerente de Transmilenio de aquel entonces y producto de las protestas que en su momento se dieron invitó a todos los ciudadanos a respetar la movilidad de al menos 4 millones de personas que usan diariamente los buses articulados y zonales con un mensaje que se vio en unos 6.000 buses.

Para el 2022 se implementó una nueva estrategia llamada “El combo violeta”⁷² que se realiza con el fin de mitigar el impacto que tienen las cifras de evasión del pago del pasaje.

Para el año anterior desde la Secretaría Distrital de la Mujer con base a las cifras reportadas y los recientes casos de acoso en el transporte público y con el fin de proteger los derechos de las mujeres, reforzar las condiciones de seguridad al interior del sistema, el Distrito lanzó la estrategia “Date cuenta es violencia, pita y avisa”⁷³.

2.2 Justificación

Teniendo en cuenta las innumerables campañas que desde la institucionalidad se han implementado a través de los tiempos para buscar por medio de la cultura ciudadana establecer reglas de convivencia y así generar sentido de pertenencia hacia los Sistema de Transporte que tiene Bogotá y que brinda el servicio a cada uno de los habitantes de ésta ciudad; es por ello, que es de vital importancia el presente Proyecto de Acuerdo sobre impartir una cátedra en las aulas de los colegios distritales que tiene la ciudad para que los niños, niñas y adolescentes se les sensibilizarlos en el uso adecuado de los medios de transporte que tiene la ciudad pero también inculcarles reglas y normas de convivencia para tener una mejor sociedad enmarcada en el respeto a los otros, en el respeto a las instituciones, al sistema de transporte que se tiene y buscar con ello generar un sentido de pertenencia hacia los medios de transporte para así garantizar el adecuado uso de los sistemas que nos trasladan de un lugar a otro por toda la ciudad. La razón por la cual se busca se imparta en los colegios es

⁷⁰ Por una mejor convivencia en Bogotá, Distrito lanza la campaña ‘Me uno para vivir mejor’ recuperado de <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/distrito-lanza-la-campana-me-uno-para-vivir-mejor>

⁷¹ TMuevo en Paz, respetemos la movilidad recuperado de <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151513/tmuevo-en-paz-respetemos-la-movilidad/>

⁷² Nueva estrategia de Cultura Ciudadana para mitigar la evasión del pago de pasaje en TransMilenio recuperado de <https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-ciudadana/noticias/estrategia-de-cultura-ciudadana-para-mitigar-la-evasion-del-pasaje-de-Transmilenio>

⁷³ #DateCuenta Es Violencia ¡Pita y Avisa! Recuperado de <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/153385/datecuenta-es-violencia-pita-y-avisa/>

porque los niños, niñas y adolescentes son personas más receptivas en cuanto a mensajes de índole educativa y pueden llegar a ser agentes de cambio en sus entornos tanto familiares como comunales.

Si bien es cierto, que se cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad Vial a nivel Nación que busca se establezcan estrategias, metas y acciones que se proponen implementar para reducir los accidentes de tránsito, las consecuencias y mejorar la seguridad vial y que deben adoptar de manera obligatoria las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en Colombia que posean vehículos o contraten servicios de transporte y además, de la educación vial que se debe impartir en los colegios en la cual se busca favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos sobre la normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos, comportamientos, conductas y valores individuales y colectivos y es aquí donde es fundamental que se imparta una cátedra a los niños, niñas y adolescentes dirigida exclusivamente a normas de comportamiento adecuado e incentivando la apropiación de los medios de transporte como es Transmilenio, el SITP y próximamente el Metro e inculcando el respeto a la infraestructura a los prestadores del servicio, a ser responsables con el pago del pasaje ya que gracias a ese pago se contribuye al funcionamiento y efectiva sostenibilidad de los sistemas, es decir, a la efectiva prestación del servicio e inculcar el respeto y cuidado a los bienes de uso público que tiene la ciudad.

3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA

Este proyecto tiene por objeto incorporar una cátedra en los colegios distritales de la ciudad con el fin que se le imparta a los niños, niñas y adolescentes conocimiento sobre cultura, reglas de comportamiento y hábitos en el uso del Sistema de Transporte Público que tiene la ciudad y generar en los ellos un sentido de pertenencia con el Sistema de Transporte Público.

De igual forma, busca que desde la comunidad educativa se impartan conocimientos para que desde temprana edad los niños, niñas y adolescentes sientan un arraigo por los sistemas de transporte que tiene la ciudad y las consecuencias que se tienen si no se cumplen las reglas de comportamiento que como actores viales tenemos.

Aunado a lo anterior, se exponen las normas de carácter constitucional, legal, jurisprudencia, decretos y proyectos de acuerdo, que fundamentan la viabilidad jurídica de este Proyecto de Acuerdo, que implementa una cátedra de educación en cultura y uso de los sistemas de transporte.

3.1. Orden Constitucional

La Constitución Política de Colombia de 1991 protege los derechos fundamentales de las personas y es así que en lo que tiene que ver con la cátedra sobre cultura en el uso del Sistema de Transporte se puede traer a colación los siguientes artículos del orden constitucional:

Artículo 2º. *Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 27º. *El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.*

Artículo 41. *En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.*

Artículo 44º. *Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.*

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 45º. *El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.*

Artículo 67º. *La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.*

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

Artículo 68°. *Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.*

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.

*La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.(...)*

3.2. Orden Legal

LEY 115 DE 1994 “POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN”

ARTICULO 5°. Fines de la educación. *De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:*

- 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.*
- 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.*
- 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.*

4. *La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.*

5. *La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.*

6. *El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.*

7. *El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.*

8. *La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.*

9. *El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.*

10. *La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.*

11. *La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.*

12. *La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y*

13. *La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.*

Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. *Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:*

a) *Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes;*

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los Derechos Humanos;

(...)

i) El Ministerio de Educación Nacional, mediante un trabajo coordinado con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y Protección Social y con apoyo del Fondo de Prevención Vial, orientará y apoyará el desarrollo de los programas pedagógicos para la implementación de la enseñanza en educación vial en todos los niveles de la educación básica y media.

(...)

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. *En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir con:*

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. Dentro de la capacitación a que se refiere este literal, deberán impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales;

(...)

f) El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la formación de criterios para evaluar las distintas consecuencias que para su seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como peatones, pasajeros y conductores.

(...)

Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. *Son objetivos específicos del nivel preescolar:*

(...)

k) La adquisición de hábitos de observación visual, auditiva y psicomotriz para la creación de actitudes y comportamientos de prevención frente al tránsito, respeto a las normas y autoridades, y actitudes de conciencia ciudadana en materia de uso de la vía.

ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. *Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.*

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes:

1. Ciencias naturales y educación ambiental.

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
3. Educación artística y cultural.
4. Educación ética y en valores humanos.
5. Educación física, recreación y deportes.
6. Educación religiosa.
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
8. Matemáticas.
9. Tecnología e informática.

(...)

Artículo 30. Objetivos específicos de la educación media académica. Son objetivos específicos de la educación media académica:

(...)

i) La formación en seguridad vial.

ARTICULO 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

LEY 1503 DE 2011 “POR LA CUAL SE PROMUEVE LA FORMACIÓN DE HÁBITOS, COMPORTAMIENTOS Y CONDUCTAS SEGUROS EN LA VÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Artículo 3°. Educación Vial. La educación vial consiste en acciones educativas, iniciales y permanentes, cuyo objetivo es favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos sobre la normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos, comportamientos, conductas y valores individuales y colectivos, de tal manera que permita desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en perfecta armonía entre las personas y su relación con el medio ambiente, mediante actuaciones legales y pedagógicas, implementadas de forma global y sistémica, sobre todos los ámbitos implicados y utilizando los recursos tecnológicos más apropiados.

3.4. Orden Reglamentario

DECRETO 1860 DE 1994 POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 115 DE 1994, EN LOS ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS GENERALES

Artículo 36. Proyectos Pedagógicos. *El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.*

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional.

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios.

DECRETO 1079 DE 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRANSPORTE

Capítulo 1 Acciones y procedimientos en materia de educación vial

Artículo 2.3.2.1.1 Acciones del Ministerio de Educación Nacional. *Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, como ente rector del sector educativo, las siguientes acciones en materia de educación vial:*

- a) Elaborar y desarrollar las orientaciones y estrategias pedagógicas para la implementación de la educación vial en los niveles de la educación preescolar, básica y media.*
- b) Incorporar en los programas que actualmente promueven el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas los componentes inherentes a la educación vial, señalados en el artículo 3 de la Ley 1503 de 2011.*
- c) Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en educación, a través de los programas señalados en el literal anterior, para que acompañen a sus instituciones educativas en el desarrollo del eje de educación vial.*

d) Establecer criterios de evaluación que midan el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas con relación a la educación vial.

e) Actualizar herramientas pedagógicas en materia de Seguridad Vial.

Parágrafo. Para establecer los contenidos de los componentes inherentes a la educación vial que harán parte de los programas de qué trata el literal b) del presente artículo, el Ministerio de Educación Nacional contará con la asesoría y el apoyo del Ministerio de Transporte el Ministerio de Salud y la Corporación Fondo de Prevención Vial o el organismo que haga sus veces, sin perjuicio de la participación que puedan tener otras entidades y organizaciones del sector educativo y civil especialistas en Seguridad Vial.

Artículo 2.3.2.1.2. Responsabilidades de las entidades territoriales certificadas en educación. *Las siguientes son las acciones de las entidades territoriales certificadas en educación:*

a) Coordinar con las autoridades municipales, distritales o departamentales correspondientes, acciones y estrategias que apoyen y fortalezcan la capacidad de los establecimientos educativos en educación vial, de conformidad con los programas que promueven el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional.

b) Coordinar con las autoridades municipales, distritales, o departamentales correspondientes, procesos de actualización y de formación docente en Seguridad Vial.

c) Acompañar y orientar a los establecimientos educativos en la incorporación del eje de educación vial en los proyectos pedagógicos que estas implementen.

d) Evaluar los resultados y la eficacia de las acciones y estrategias implementadas en materia de educación vial.

e) Realizar con otras autoridades distritales, municipales o departamentales responsables de la educación vial y con los miembros de la comunidad educativa, un proceso de lectura de contexto en el que identifiquen problemas, dilemas y retos pertinentes a su realidad, particularmente en lo referido al derecho a la movilidad libre y segura.

f) Definir, a partir de los resultados de la lectura de contexto, planes anuales con actividades, acciones específicas, responsables, indicadores y cronogramas para lograr la incorporación de la educación vial en los Proyectos Pedagógicos de los establecimientos educativos y en los procesos de actualización de formación docente.

g) Desarrollar en todos los establecimientos educativos las acciones definidas en planes anuales de trabajo.

h) Convocar semestralmente a reuniones a sus equipos técnicos regionales intersectoriales, para definir el plan de acción y presentar resultados del mismo en materia de educación vial. Además de las reuniones semestrales, estos equipos podrán reunirse cuando lo consideren pertinente e integrarán sus acciones en el marco de los programas que promueven el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas.

i) Promover la creación y uso de herramientas pedagógicas que incorporen nuevas tecnologías de la información.

Artículo 2.3.2.1.3. Acciones de las entidades territoriales con respecto de los establecimientos educativos.
Las entidades territoriales certificadas en educación garantizarán que en la incorporación de la educación vial los establecimientos educativos realicen las siguientes acciones:

a) Conformar al inicio del año escolar, mesas de trabajo al interior de los establecimientos educativos en las que participen estudiantes, docentes, directivos, administrativos y padres de familia.

b) Diseñar, implementar y ajustar periódicamente las propuestas curriculares que contribuyan al fomento de competencias básicas y ciudadanas y aporten a la educación vial en todas las áreas, asignaturas, proyectos, actividades en el tiempo libre, extracurriculares, el aula e instancias de participación.

c) Establecer claramente en el PEI la promoción de las competencias básicas y ciudadanas para contribuir a la educación vial.

d) Incorporar el eje de educación vial a sus proyectos pedagógicos de acuerdo con las orientaciones dadas por la entidad territorial certificada en educación, de conformidad con los lineamientos definidos por la Ley 1503 de 2011.

e) Propender por el uso de material pedagógico (físico, audiovisual, tecnológico e interactivo), para el desarrollo de las acciones formativas en materia de educación vial en el marco de los proyectos pedagógicos que implementen.

f) Evaluar y hacer seguimiento al desarrollo del eje de educación vial incorporado en los proyectos pedagógicos a partir de los referentes de calidad que estén vigentes. Para ello, los establecimientos educativos deben presentar informes de evaluación y seguimiento a la entidad territorial certificada en educación que servirán de insumo para que estas a su vez incorporen los resultados a su informe de evaluación.

g) Presentar informes a las entidades territoriales certificadas en educación sobre la manera como incorporen el eje de educación vial en los proyectos pedagógicos.

3.5 Orden Jurisprudencial

Sentencia T-743/13 DERECHO A RECIBIR EDUCACION DE CALIDAD - Criterios mínimos de cumplimiento en el ámbito interno

Uno de los deberes intrínsecos a la satisfacción del componente de aceptabilidad de la educación es el de reglamentar los presupuestos básicos que guiarán la prestación del servicio educativo y que, por eso, constituyen el punto de referencia a partir del cual debe evaluarse si la educación impartida en cierto contexto reúne las condiciones necesarias para ser considerada aceptable, por ser pertinente, equitativa, adecuada culturalmente y de buena calidad. Tal deber cobra mayor relevancia si se examina, además, en función de las tareas que incumben al juez de tutela al momento de decidir sobre la protección de la faceta prestacional de un derecho fundamental: identificar la naturaleza de la obligación cuya satisfacción se exige (si es una obligación de respetar, proteger o cumplir) y el momento en que la misma debe ser satisfecha (inmediata o progresivamente).

4. COMPETENCIA

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según artículo 313 de la Constitución Política numeral 1 que estipula lo siguiente:

“ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (...).”⁷⁴

Asimismo, esta Corporación es competente de acuerdo al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá -, numerales 1 y 25, que determinan:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes”.⁷⁵

⁷⁴ Artículo 313 Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado de <https://www.constitucioncolombia.com/titulo-11/capitulo-3/articulo-313>

⁷⁵ Decreto Ley 1421 de 1993. (1993). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

Del mismo modo, el Concejo tiene competencia de acuerdo a la Ley 136 de 1994, la cual establece en su parágrafo 2 del artículo 32 que:

*“Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la Constitución y la ley”.*⁷⁶

5. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” determina:

“Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

En consideración a lo anterior, esta iniciativa **no tendría un impacto fiscal** en razón a que la misma no genera la obligatoriedad de gastos, ni implica la apropiación de recursos adicionales a los sectores y entidades responsables de su implementación y por el contrario promueve el uso adecuado de los sistemas de transporte público que tiene la ciudad, el respeto y cuidado a los bienes de uso público.

Referencias bibliográficas

1. Cultura TM: un programa para movernos mejor recuperado de <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/146372/cultura-tm-un-programa-para-movernos-mejor/>
2. ‘Todos Pagamos el Pato’, campaña de cultura ciudadana para reducir colados en TransMilenio recuperado de <https://bogota.gov.co/miciudad/movilidad/pato-de-transmilenio-que-significa#:~:text=El%20alcalde%20de%20Bogot%C3%A1%20Enrique,ingresan%20a%20TransMilenio%20sin%20pagar.>
3. Por una mejor convivencia en Bogotá, Distrito lanza la campaña ‘Me uno para vivir mejor’ recuperado de <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/distrito-lanza-la-campana-me-uno-para-vivir-mejor>
4. TMuevo en Paz, respetemos la movilidad recuperado de <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151513/tmuevo-en-paz-respetemos-la-movilidad/>

⁷⁶ Ley 136 de 1994. (1994). Función Pública. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329>

5. Nueva estrategia de Cultura Ciudadana para mitigar la evasión del pago de pasaje en TransMilenio recuperado de <https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-ciudadana/noticias/estrategia-de-cultura-ciudadana-para-mitigar-la-evasion-del-pasaje-de-Transmilenio>
6. #DateCuenta Es Violencia ¡Pita y Avisa! Recuperado de <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/153385/datecuenta-es-violencia-pita-y-avisa/>
7. Constitución Política de Colombia 1991 - – Sistema Único de Información Normativa Recuperado de: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988>
8. LEY 115 DE 1994 – Sistema Único de Información Normativa Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80538>
9. LEY 1503 DE 2011 – Sistema Único de Información Normativa recuperado de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1682377>
10. DECRETO 1860 DE 1994 – Sistema Único de Información Normativa Recuperado de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1362321>
11. DECRETO 1079 DE 2015 – Sistema Único de Información Normativa Recuperado de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019520>
12. Sentencia T-743/13. (2013). Corte Constitucional. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-743-13.htm>
13. Decreto Ley 1421 de 1993. (1993). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>
14. Ley 136 de 1994. (1994). Función Pública. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329>

Cordialmente,

DARIO FERNANDO CEPEDA PEÑA
Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal

PROYECTO DE ACUERDO NO 395 DE 2025**PRIMER DEBATE****6. ARTICULADO****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA CÁTEDRA DE EDUCACIÓN EN CULTURA Y USO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS COLEGIOS DE BOGOTÁ”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas por artículo 313 de la Constitución Política numeral 1, al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá -, numerales 1 y 25, Ley 136 de 1994 parágrafo 2 del artículo 32

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO. Créese la cátedra de educación en cultura y uso de los Sistemas de Transporte Público en los colegios de Bogotá, como una materia en la que se le imparta a los niños, niñas y adolescentes conocimiento sobre cultura y reglas de comportamiento en los diferentes Sistemas de Transporte Público que tiene la ciudad como es TRANSMILENIO, Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el METRO y generar en los niños, niñas y adolescentes sentido de pertenencia, respeto en los espacios compartidos, uso adecuado de los diferentes medios de transporte público e inculcar el respeto y cuidado a los bienes de uso público que tiene la ciudad en materia de movilidad.

ARTÍCULO 2. IMPLEMENTACIÓN. La Secretaría de Educación Distrital promoverá la implementación de la Cátedra en educación en cultura y uso de los Sistemas de Transporte Público en todas las instituciones educativas oficiales de preescolar, básica y media como una asignatura obligatoria.

Parágrafo 1. La Secretaría de Educación Distrital invitará a los Colegios Privados de la ciudad a que se unan a la implementación de la Cátedra en educación en cultura y uso de los Sistemas de Transporte Público en los niveles de la educación preescolar, básica y media.

ARTÍCULO 3. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Educación del Distrito en articulación con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de Movilidad establecerán los temas a tratar inculcando la importancia de la convivencia en los sistemas de transporte público, el respeto y cuidado a los bienes de uso público y las consecuencias que trae el incumplimiento de las normas de convivencia y la evasión del pago para que sean agentes de cambio en sus entornos.

ARTÍCULO 4. La Secretaría de Educación Distrital velará porque las instituciones educativas públicas, implementen y desarrollen la cátedra en educación en cultura y uso de los Sistemas de Transporte Público en los niveles de la educación preescolar, básica y media, para lo cual tendrán 1 año a partir de la entrada en vigencia del presente Proyecto de Acuerdo.

ARTÍCULO 5. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 396 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA Y SE FORTALECEN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA C-127 DE 2023...”

1. OBJETO DEL PROYECTO

La presente iniciativa tiene por objeto institucionalizar y fortalecer políticas públicas para la atención, prevención y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos de la ciudad.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***2.1 Análisis y definición del problema******2.1.1 Aproximación a la problemática del consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos***

El uso de espacios públicos para el consumo de sustancias psicoactivas puede resultar perjudicial para el bienestar y seguridad de la comunidad en general, especialmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población vulnerable. En primer lugar, estas sustancias pueden afectar la percepción y el juicio de quien las consume, lo que puede llevar a desarrollar comportamientos peligrosos e irresponsables, generando una atmósfera insegura para los demás, en particular para aquellos que no deseen estar expuestos a este tipo de actividad. De lo anterior, se puede resaltar que, efectivamente se debe trabajar con enfoque en la mitigación del daño o riesgo porque no estamos del todo alejados de la realidad en cuanto a que este tipo de sustancias nos han acompañado desde tiempos pasados, por ende resulta difícil erradicarla de raíz.

Asimismo, el consumo de sustancias en espacios públicos puede ser un catalizador para actividades ilegales, como venta o tráfico de estupefacientes, creando un riesgo para quienes pretenden gozar de su derecho a un ambiente sano que permita su desarrollo adecuado y seguro. Por lo que, las autoridades distritales tienen como obligación propiciar espacios públicos como parques recreacionales y polideportivos para el disfrute y goce de los niños, niñas y adolescentes, y personas con especial protección estableciendo zonas de esparcimiento libres del consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de brindar a la comunidad sitios propicios para su recreación.

Es importante asegurarse de que los niños, niñas y adolescentes y comunidad en general, tengan un entorno seguro y saludable que les permita crecer y desarrollarse correctamente. Para garantizar esto, es necesario proteger las zonas alrededor de los centros educativos, parques y espacios públicos de mayor concurrencia por los habitantes de las mismas, pero aún más para las personas que tienen especial protección, sin desconocer el derecho a la igualdad, protegiendo así la vida, la integridad física, la salud, el principio de interés superior del menor y evitando el desarrollo de factores de riesgo.

De acuerdo con el informe mundial sobre las Drogas 2024 de UNODC: LOS DAÑOS DEL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS SIGUEN AUMENTANDO EN MEDIO DE LA EXPANSIÓN DEL CONSUMO Y LOS MERCADOS DE DROGAS, “en el año 2022, 1 de cada 18 de personas, habrían consumido drogas, aumentando en un 20% más que el decenio anterior. La prevención debe ser la respuesta de primera línea al consumo de drogas. Las intervenciones eficaces abordan las condiciones subyacentes que contribuyen al consumo de drogas, como la falta de conexión con la familia o la comunidad, la inestabilidad, la inseguridad, los traumas, la mala crianza, las normas sociales negativas, el consumo de drogas entre iguales o en la familia” (UNODC, 2024)⁷⁷, de modo que, la disponibilidad de las sustancias psicoactivas o el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos es un factor de riesgo social que puede incidir en el uso temprano de las mismas, por parte de la población juvenil y generar graves consecuencias a nivel físico y psicológico.

De acuerdo al informe, la doctora Ghada Waly, Directora Ejecutiva de UNODC, afirma que “la producción, el tráfico y el uso de drogas siguen exacerbando la inestabilidad y la desigualdad, al tiempo que causan daños incalculables a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas”, lo que refiere a la problemática que generan las drogas a nivel mundial, pues estas logran generar una obstaculización en el avance de una sociedad sana, desde la paz y la justicia hasta la salud y los derechos humanos, el medio ambiente y la igualdad. Del mismo modo, las consecuencias microsociales, es decir, las relaciones interpersonales y de entorno que tiene el consumidor, relacionadas a la familia, la escuela y el trabajo, se han visto afectadas afectando el rendimiento escolar y laboral, así mismo, las consecuencias macrosociales, las cuales nos representa un entorno de mayor espectro relacionado con aspectos socioeconómicos, políticos y culturas, lo que significa que el consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos colisionó de múltiples

⁷⁷ Delegación de la Unión Europea en México, & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2024). Informe mundial sobre las drogas: LOS DAÑOS DEL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS SIGUEN AUMENTANDO EN MEDIO DE LA EXPANSIÓN DEL CONSUMO Y LOS MERCADOS DE DROGA. Recuperado de: https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/junio-2024/informe-mundial-sobre-las-drogas-2024-de-unodc_-los-daos-del-problema-mundial-de-las-drogas-siguen-aumentando-en-medio-de-la-expansion-del-consumo-y-los-mercados-de-drogas.html

maneras en la sociedad, por cuanto el espacio público se propende para uso exclusivo de la colectividad o comunidad en general.

De la anterior premisa podemos destacar que, si los espacios públicos donde la mayoría de las personas los usan para esparcimiento y ocio, son escenarios de consumo de sustancias no permitidas, esto afectará las relaciones sociales y alteraría la naturaleza del espacio público, para la cual fue construido; si tomamos como ejemplo los parques, zonas verdes, coliseos, polideportivos etc, perderán en sí, su destinación por considerar que se están prestando para otros escenarios. Cabe resaltar que el consumo de sustancias no permitidas en espacios públicos conlleva en muchas ocasiones al incremento de la inseguridad ciudadana, a la venta o tráfico de estupefacientes, al consumo temprano de sustancias, entre otros, lo cual implica un riesgo para la población en general.

DEFINICIONES. Para los efectos del presente Acuerdo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Consumo de sustancias psicoactivas: Es toda sustancia introducida en el organismo por cualquier vía de administración *“ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras) que genera alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Su consumo puede crear consumo problemático o dependencia. (Ministerio de Salud y Protección Social, s. f.)”*

Espacio público: *Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. (Secretaría de Planeación, s. f.)*

Personas protegidas constitucionalmente: La Corte Constitucional ha definido aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber: físicas, psicológicas o sociales, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva. *(Ministerio de Justicia y del Derecho, s. f. Sentencias: T-293 de 2017, T-208 de 2017 y Sentencia T-335 de 2019 Corte Constitucional. Constitución Política de Colombia 1991, artículos; 13,44.)*

1. Niños, niñas y adolescentes
2. Adultos Mayores
3. Población LGTBIQ+
4. Mujeres cabeza de familia
5. Personas en condición de discapacidad
6. Personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza

Prevención de consumo de sustancias psicoactivas: Son el conjunto de acciones dirigidas a identificar, evitar, reducir, o regular el consumo de sustancias psicoactivas que generan riesgo para la salud o alteraciones en el funcionamiento familiar y social. (Ministerio de Salud y Protección Social, s. f.-a)

2.1.2 Bogotá

El Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. 2022⁷⁸, aclaran que el tamaño de muestra para 2016 fue de 6.369 y de 10.912, en el 2022. La población representada alcanzaba a 5.8 millones de personas y en la muestra actual representa alrededor de 6 millones de personas. Hay proporciones similares entre mujeres 47.3% y hombres 52.7% en la población representada, como se vé reflejada en la siguiente tabla.

Tabla 130 Distribución de las muestras y población representada de los estudios 2016 y 2022 según edad

Edad	Tamaños de muestra		Población representada			
	2016	2022	2016		2022	
	N	N	N	%	N	N
12-24	1.528	2.191	1.648.751	28.39	2.191	1.315.182
25-34	1.381	2.203	1.295.691	22.31	2.203	1.238.908
35-44	1.062	1.862	1.149.115	19.79	1.862	1.208.579
45-65	2.398	4.656	1.714.168	29.52	4.656	2.735.716
Total	6.369	10.912	5.807.725	100	10.912	6.498.374

Fuente: Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022, pág. 145

El consumo global se incrementó en el periodo bajo análisis, pasando la prevalencia de vida del 15.61% para el año 2016 al 19.31% para el año 2024. El consumo reciente, es decir, el último mes se extiende del 2.93% al 4.5%.

El consumo de cualquier sustancia ilícita aumenta tanto en hombres —de 7.59% a 8.50%, como en mujeres —de 1.95% a 3.94%— y también en todos los grupos etarios. El aumento significativo en grupos de edad se encuentra en las personas de 12 a 24 años que pasan de 8.23% a 13.82% y en las personas de 25 a 34 años pasando de 5.49% a 10.44%, como se aprecia en la siguiente tabla.

⁷⁸ Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud, Este estudio fue realizado por la Alcaldía de Bogotá – Secretaría Distrital de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. (2022). Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/ESTUDIO_DE_CONSUMO_DE_SUSTANCIAS_PSIKOACTIVAS_BOGOTA_2022.pdf

Tabla 143 Prevalencia de consumo del último año de cualquier sustancia ilícita según sexo, edad y estrato en los estudios 2016 y 2022 (%)

Variable		Año estudio	
		2016	2022
Sexo	Hombres	7.59*	8.39
	Mujeres	1.95*	3.92
Edad	12-24	8.23*	13.54
	25-34	5.49	10.44
	35-44	4.21*	5.22
	45-65	0.74*	0.93
Estrato	1	6.17*	4.62
	2	5.53*	4.12
	3	2.98	6.31
	4-5-6	5.34	12.39
Total		2.54	6.09

* $p < 0.05$

Fuente: Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. *Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022*, pág. 157

En el caso de los estratos, los incrementos significativos se encuentran en los estratos 4, 5 y 6, pasando de 5.34% a 13.04% y decreciendo cerca de dos 2 puntos porcentuales en el caso del estrato 1.

La prevalencia del consumo de cualquier sustancia ilícita es más alta en hombres que en mujeres; en la prevalencia de vida la diferencia es de 13.06%, en el año de 4.56% y en el mes de 4.91%.

Tabla 38 Indicadores de consumo de cualquier sustancia ilícita según sexo (%)

Sexo	Prevalencia (%)		
	Vida*	Año**	Mes**
Hombres	24.77	8.50	6.0
Mujeres	14.17	3.94	3.08
Total	19.31	6.16	4.50

* La prevalencia de vida incluye las siguientes sustancias: inhalables, dick, popper, marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, metanfetamina, metadona sin prescripción médica, analgésicos opiáceos sin prescripción, LSD, hongos, yagé o cacao sabanero, ketamina, GHB y 2CB.

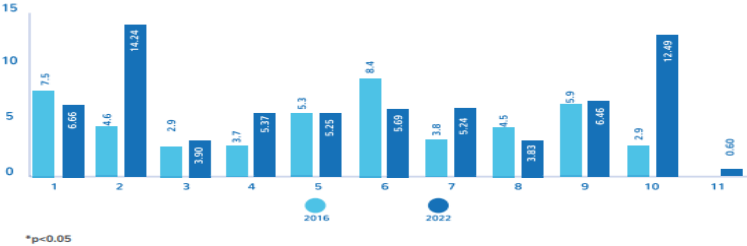
** Las prevalencias de año y mes incluyen las siguientes sustancias: inhalables, dick, marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, y heroína.

Fuente:

Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. *Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022*, pág. 68

De igual forma, el estudio en mención demuestra las tasas de consumo de sustancias prohibida en las zonas de Bogotá D.C estudiadas, registrando que la prevalencia más alta de consumo en el año 2022 se registra en la zona 2, esto es, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, seguida de la zona 10, Usaquén, con prevalencias de 14.24% y 12.49%, respectivamente, como se puede ver en la siguiente gráfica.

Gráfica 46 Prevalencia de consumo del último año de alguna droga ilícita según zona en los estudios 2016 y 2022 (%)



Zona 1 Centro oriente: Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria. Zona 2 Norte: Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. Zona 3 Suroccidente: Kennedy, Bosa y Puente Aranda. Zona 4 Occidente: Engativá y Fontibón. Zona 5 Suba: Suba. Zona 6 Ciudad Bolívar: Ciudad Bolívar. Zona 7 Usme: Usme. Zona 8 Tunjuelito: Tunjuelito. Zona 9 Rafael Uribe Uribe: Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y San Cristóbal. Zona 10 Usaquén: Usaquén. Zona 11 Sumapaz: Sumapaz.

Fuente: Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. *Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022*, pág. 72

En cuanto a la condición socioeconómica, el estudio realizado en el 2022 se puede inferir que, respecto del consumo del último año de sustancias ilícitas y estratos socioeconómicos, se observa un mayor frecuencia de consumo en los estratos 4, 5 y 6, representados por un 13.04% de prevalencia, siendo el estrato 1 y 2 la menor tasa con un 4.49% y 4.43%.

Los estratos 1 y 2 también se distinguen, claro que la diferencia no es significativa en el peso que tienen estos usuarios consumidores en relación con el estrato socioeconómico del cual hacen parte, esto quiere decir que el uso de sustancias no permitidas afecta en mayor medida a estos grupos sociales que están en situación de mayor vulnerabilidad social y económica, y, por ende, con mayores dificultades acceder a una atención sanitaria integral.

En los estratos 4, 5 y 6 se encuentra el mayor crecimiento de consumo, con un estimado de 127.315 casos, mientras que en el estrato 3, se cuenta con un estimado de 140.896 casos, finalizando con los estratos 1 y 2 con un estimado de 32.183 y 99.690 casos respectivamente. Son alrededor de 400.117 casos los que requieren algún tipo de atención o contención con este tipo de problemática.

Tabla 41 Consumo reciente (prevalencia* y número de consumidores de último año) de cualquier sustancia ilícita e intervalos del 95% de confianza según estrato socioeconómico

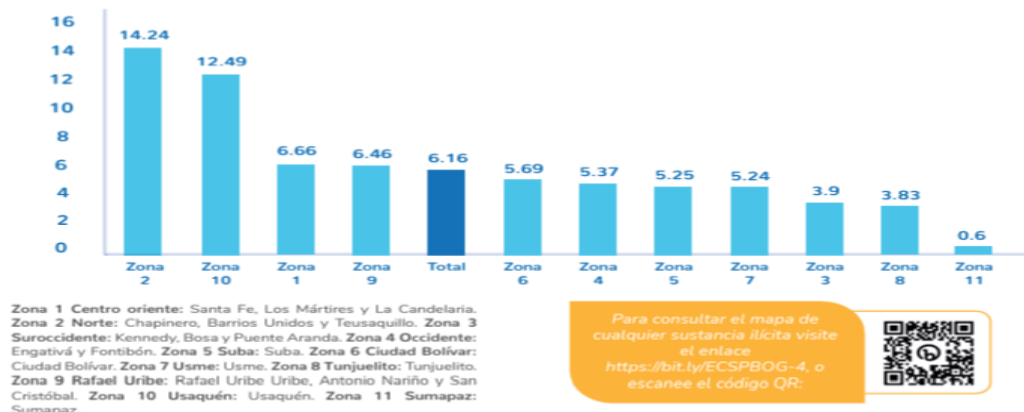
Estrato socioeconómico	Prevalencia (%)			Número de casos		
	Estimación	I. de C.		Estimación	I. de C.	
1	4.49	3.01	5.97	32.183	21.586	42.780
2	4.43	3.27	5.59	99.690	73.586	125.794
3	5.52	3.46	7.58	140.896	88.233	193.559
4, 5 y 6	13.04	7.39	18.69	127.315	72.117	182.513
Total	6.16	4.91	7.41	400.117	318.714	481.520

*Prevalencia de último año incluye las siguientes drogas: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, inhalables, dick y heroína.

Fuente: Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. *Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022*, pág. 69

El consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en el último año por zonas se distribuye de acuerdo con la tabla, siendo las zonas 2 y 10 las que tienen las tasas más altas, y la 11 la más baja.

Gráfica 12 Prevalencia de consumo del último año de cualquier sustancia ilícita según zona



Fuente: Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. *Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022*, pág. 70

2.2 Impacto del consumo de sustancias en la salud pública y en el bienestar social

De acuerdo con la Ley 1566 de 2012⁷⁹, se reconoce que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas compete a un asunto de salud pública en donde se engloba el bienestar de la familia, la comunidad y los individuos y, es por esto que son estas poblaciones a las que se le deben dar mayor prioridad con base en los principios de proporcionalidad, razonabilidad, goce de un ambiente sano e interés superior del menor. Así tal, la salud pública es una responsabilidad por parte del Estado y autoridades distritales para la protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario y que, por medio de la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, se puede contribuir al bienestar social e individual y brindar atención integral a quien consume, y generar iniciativas de prevención del consumo a la comunidad en general.

De esta manera, de acuerdo a la Guía práctica “EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA”, la salud pública está integrada “*por el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectivas, ya que sus resultados se*

⁷⁹ LEY 1566 DE 2012: por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional «entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias» psicoactivas. (2012). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48678>

constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país (...)” (Ministerio de Salud y Protección Social & UNODC, 2013)⁸⁰, permitiendo inferir que, el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos genera entonces desequilibrio y afectaciones a nivel social en cuanto integra el ámbito de salud pública y puede causar graves consecuencias tanto para el consumidor como para la comunidad en general, en especial, niños, niñas y adolescentes.

Ahora bien, el consumo de sustancias lícitas o ilícitas en espacios públicos tiene efectos negativos en la sociedad y la salud individual y colectiva. Para mitigar el impacto que esta situación genera, debemos implementar políticas públicas con el objetivo principal de prevenir el uso indebido de estas sustancias en espacios públicos además de abordar la problemática, dándole así una percepción más amplia, por cuanto conlleva también a unas consecuencias sociales.

Por lo anterior, es necesario implementar esta medida de prohibición de sustancias en espacios públicos por cuanto la población de especial protección, en especial los niños se encuentran en una etapa vulnerable de aprendizaje debido a la desinformación en cuanto a todo el tema del consumo de drogas. Es por esta razón que se hace urgente una medida regular el tema del consumo en espacios públicos debido a que en esta etapa tienden a absorber o imitar todo lo que a su alrededor ven, de ahí los consumidores a temprana edad.

2.3 Estrategia

Este proyecto pretende fortalecer políticas públicas que permitan que todas las personas tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano, a la recreación y a la práctica del deporte, a la salud, entre otros derechos, delimitando entonces la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en estos espacios públicos, implementando principios como interés superior del menor, proporcionalidad y razonabilidad y teniendo un enfoque de derechos humanos y salud pública.

2.3.1 Perímetros

Teniendo en cuenta que los principales escenarios con mayor concurrencia para el esparcimiento infantil y familiar son los parques, centros culturales, deportivos y recreativos en la Ciudad de Bogotá, el Distrito deberá tomar las medidas necesarias para garantizar el pleno goce de sus derechos fundamentales, como lo contempla el artículo 44 de la carta política, promoviendo la no realización de actividades que puedan incitar a los niños, niñas adolescentes y comunidad especialmente protegida al consumo de sustancias prohibidas, así como la plena tranquilidad de que en esta zonas de esparcimiento familiar no se verán expuestos a temas de inseguridad que

⁸⁰ Ministerio de Salud y Protección Social & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2013). EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA. En *Guía práctica para entender los derechos en salud y la atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas*. Recuperado de <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO031052013-Cartilla.pdf>

puedan atentar contra sus propios derechos, por parte de las personas que lleven a cabo el consumo de estas sustancias en los entornos anteriormente mencionados.

Este proyecto pretende dar la implementación adecuada a través del fortalecimiento de lo ya establecido en el Decreto 825 de 2019⁸¹, hoy vigente, donde se estipulan los parámetros permitidos para el consumo de sustancias psicoactivas y no permitidas en espacios públicos, así:

Artículo 2.- Perímetro para restricción: Se establece en doscientos (200) metros el perímetro circundante del área o lugares abiertos al público o zona del espacio público, en el que no se permitirá el consumo, porte, facilitamiento, distribución, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana. Los equipamientos (entornos) que comprenderán el perímetro circundante en el que operará la restricción, son:

- 1. Instituciones de Educación formal y de educación para el trabajo y desarrollo humano público y privado ubicado en Bogotá, Distrito Capital: jardines infantiles; establecimientos educativos en sus niveles: preescolar, básica primaria y básica secundaria y media; Instituciones de Educación Superior; Centros de Atención para Población Vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.*
- 2. Estadios, coliseos y centros deportivos*
- 3. Parques: Para efecto del presente decreto, de conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, se entiende por parques los siguientes: 1. Parques de escala regional; 2. Parques de escala metropolitana; 3. Parques de escala zonal; 4. Parques de escala vecinal y 5. Parques de bolsillo.*
- 4. Plazas y plazoletas: entendidas estas como elementos estructurantes del espacio público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 266 del POT.*
- 5. Sistema de Transporte masivo, así como estaciones y lugares de acceso al mismo*
- 6. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas.*
- 7. Instituciones de Protección Social de naturaleza pública (...)*

Parágrafo 2.- Tampoco se permitirá el consumo, porte, distribución, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el interior de centros deportivos y en parques. (...)

Igualmente, con la oportuna colaboración del Distrito, en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá y dadas sus facultades de acuerdo a lo otorgado en las normas “Que el numeral 1 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993⁸², establecen como atribuciones del Alcalde Mayor, “Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del Concejo”, así como

⁸¹ ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). *Decreto 825 de 2019*. Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

⁸² *Decreto Ley 1421 de 1993 - Gestor Normativo*. (1993, 21 de julio). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

entidades competentes y Alcaldías locales, el presente proyecto busca promover e institucionalizar lo reglamentado en cuanto a los límites de consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, fortaleciendo la regulación de los perímetros de este consumo para la protección de los derechos fundamentales de la comunidad.

2.3.2 Disfrute y uso del espacio público en Bogotá

El espacio público es definido por el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016⁸³ como *“El conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público (...), destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional.”*, de modo que, es en el espacio público donde un niño, niña o adolescente se reconoce como ciudadano y aprende a ser parte de la sociedad y su funcionamiento, puesto que, estos lugares son elementos esenciales para la mejora de la calidad de la vida de las personas y del ambiente en la ciudad.

De esta manera, considerando que son los niños, niñas y adolescentes quienes permanentemente se desplazan en lugares como colegios, parques y alrededores de estos, acompañados en su mayoría por adultos o personas mayores, son las autoridades nacionales y locales las que deben garantizar que esta comunidad goce de un espacio público sano que posibilite su desarrollo adecuado y seguro, *evitando la realización de actividades que puedan inducirlos al consumo de sustancias psicoactivas y prohibidas en dichos escenarios, o verse expuestos a situaciones que atenten contra sus derechos, por parte de quienes desarrollan el consumo de tales sustancias*⁸⁴ en los espacios públicos delimitados, en consecuencia, este proyecto busca la preservación de estas zonas para que la población constitucionalmente protegida y la comunidad en general puedan disfrutar de sus derechos a la vida, la salud, la educación, la cultura y la recreación, entre otros, sin que se vea afectada su protección Constitucional de la prevalencia de sus derechos sobre los de los demás.

Así, este proyecto busca fomentar el uso y goce del espacio público a través de la reglamentación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en estos espacios, teniendo en cuenta que, cada espacio público es cambiante y se ha ido transformando conforme ha avanzado la ciudad, ajustándose a las necesidades de la población, entre ellas, de las personas de especial protección constitucional, en los cuales podemos encontrar parques, zonas verdes, zonas de recreación y deporte, plazoletas, entre otras muchas que, en especial para los niños y niñas forman parte de la infancia, siendo estos espacios públicos los lugares idóneos para la realización de actividades de recreación, deporte y desarrollo de identidad por parte de los menores, con el fin de garantizarles

⁸³ Congreso de la República. (2016, 29 julio). *Ley 1801 de 2016*. Secretaria del Senado. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1801_2016.html

⁸⁴ ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). *Decreto 825 de 2019*. Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales expresamente señalados en el artículo 44⁸⁵ de la Constitución Política, el cual determina que *“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.”*

2.3.3 Atención y prevención del consumo

Que de acuerdo con el Decreto 825 de 2019⁸⁶, *el Estado representado por medio de sus diferentes autoridades y agentes, tiene la obligación de hacer prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los de los demás, cuando quiera que se pretende dictar disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de los menores, entre ellos, la vida, la salud, la educación, la cultura, la recreación, etc.*

Para centrarnos en la adecuada atención y por ende la óptima prevención del consumo de sustancias psicoactivas y no permitidas, debemos centrar nuestra atención en la problemática social y más aún a nivel Distrital, donde vemos como se degrada el entorno social en el que nos movemos, dado que esta “enfermedad” que aqueja a las personas y a la sociedad misma, va generando riesgos, no solo en entornos públicos sino también en temas de salud, y relaciones interpersonales. Estos hábitos de consumo afectan las actividades diarias como el trabajo y estudio, así como el patrimonio económico de la persona consumidora. Es por estas razones que se debe implementar en el Distrito, no solo medidas correctivas para el buen uso de los espacios públicos en cuanto al consumo de sustancias no permitidas en los mismos, sino también es importante adoptar programas de educación y prevención para que más niños y jóvenes desistan de la idea de probar dichas sustancias, así como también promover en los ya consumidores hábitos y actividades que les permita salir del problema de consumo en el que ya se encuentran.

2.3.3.1 Medida correctiva

*Las medidas correctivas, son acciones impuestas por las autoridades de Policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos de convivencia. Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia.*⁸⁷ Partiendo de la premisa anterior

⁸⁵ Constitución Política 1 de 1991 Asamblea Nacional Constituyente - Gestor Normativo. (s. f.). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

⁸⁶ ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). Decreto 825 de 2019. Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

⁸⁷ Términos claves que todo ciudadano debe conocer: Medidas Correctivas. (s. f.). Secretaría de seguridad, convivencia y justicia. Recuperado de <https://scj.gov.co/es/c%C3%B3digo-policia/c%C3%B3digo-nacional-seguridad-y-convivencia->

debemos implementar estos mecanismos con el fin de que la causa sea analizando de manera eficaz, permitiendo llegar al punto que detona esta problemática en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas y no permitidas en espacios públicos. De tal manera es importante que las medidas correctivas implementadas vayan encaminadas a educar a la sociedad, pero también a incentivar el buen uso de nuestros espacios públicos.

2.3.3.2 Seguimiento y monitoreo

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley 1098 de 2006 se establece que la Policía de Infancia y Adolescencia deberá *“adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación y deporte y demás espacios públicos en donde habitualmente concurren niños, niñas y adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción”*⁸⁸, de esta misma manera, esta labor se desarrollará en coadyuvancia con las gestiones adelantadas por las entidades competentes en el desarrollo de sus funciones para garantizar y preservar, así como cumplir el objeto de este proyecto.

Asimismo, de acuerdo con la Sentencia C-127 de 2023 *“La restricción aplica, además de la protección del espacio público, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a la regulación que expidan las autoridades que ejercen poder de policía en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, con base en los principios pro infans, de proporcionalidad, razonabilidad y autonomía territorial, en los términos de la presente providencia. Lo anterior teniendo en cuenta que una es la atribución que corresponde a los alcaldes en cuanto a definir, razonable y proporcionadamente, las áreas del espacio público en las que por motivos de interés público se ejerce la prohibición de consumo de sustancias psicoactivas, y otra la propia de las entidades de representación popular territoriales, para establecer regulaciones subsidiarias o residuales que definan las condiciones a nivel local, para la aplicación de la restricción, en garantía del derecho de los menores de edad.”*⁸⁹, de forma que el monitoreo y seguimiento del presente proyecto podrá ser llevado a cabo por cualquier autoridad competente.

2.3.3.3 Campañas educativas

*Algunos de los adolescentes hoy en día, son incitados al consumo de cigarrillos y también de sustancias alucinógenas, esto frecuentemente sucede en los entornos que los rodean y se produce por medio de insinuaciones de otros jóvenes que por ignorancia se dejan llevar por factores generados del consumismo social y en otros casos por la moda*⁹⁰

ciudadana#:~:text=Medidas%20Correctivas%3A%20Las%20medidas%20correctivas,los%20deberes%20espec%C3%ADficos%20de%20convivenci
a.

⁸⁸ Código de la infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006. (s. f.). ICBF. Recuperado de <https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf>

⁸⁹ Sentencia C-127 de 2023. (2023). Corte Constitucional. <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2023/C-127-23.htm>

⁹⁰ Campañas de prevención al consumo de alucinógenos en niños, niñas y adolescentes en Bolívar. (2019, 6 julio). Policía Nacional de Colombia. Recuperado de <https://www.policia.gov.co/noticia/campanas-prevencion-al-consumo-alucinogenos-ninos-ninas-y-adolescentes-bolivar-0>

Con el fin de mitigar esta problemática social el Distrito con el apoyo de los distintos entes competentes, deberá implementar campañas que permitan a los niños, niñas y adolescentes determinar que existen riesgos por el consumo de estas sustancias, además las campañas empleadas deberán propender a los menores el buen uso de su tiempo libre, así como también la toma de sus propias decisiones en cuanto a la incitación de dichas sustancias.

2.4 Principios. El presente proyecto de acuerdo está dirigido bajo los siguientes principios:

Concurrencia: En el marco de sus respectivas competencias y misiones, debe realizarse una articulación entre el Gobierno Nacional y el Distrito Capital en la implementación del presente programa.

Coordinación: Las entidades distritales deberán coordinar sus actuaciones para el pleno cumplimiento del presente programa, garantizando los derechos de la comunidad, de acuerdo con las competencias y atribuciones legales.

Equidad: Reconocer e integrar cada sector poblacional por medio del proceso de formulación de las políticas públicas tendientes a un abordaje del fenómeno de las sustancias psicoactivas en espacios públicos que articulen los derechos de la comunidad en general y la salud pública.

Razonabilidad y Proporcionalidad: El principio de razonabilidad se ha convertido en un criterio metodológico efectivo para la aplicación jurídica, en especial, cuando se trata de los derechos fundamentales. Asimismo, se trata de determinar hasta qué punto resulta constitucionalmente admisible una intervención estatal, o lo que es lo mismo, cual es el grado de intervención compatible con el respeto a los derechos⁹¹, de forma que se busca garantizar el libre desarrollo de la personalidad.

3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA

Este proyecto busca fortalecer políticas públicas para la atención, prevención y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos de la ciudad, con el fin de promover las garantías necesarias y adecuada protección a las personas protegidas constitucionalmente (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores). De igual forma, busca que la comunidad en general acceda de manera libre a los espacios públicos y puedan hacer uso del derecho al goce de un ambiente sano, seguro y adecuado para el desarrollo de sus actividades de recreación, descanso, entre otras, procurando el cuidado integral de la salud individual y de la comunidad, sin vulnerar el derecho al

⁹¹ RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA DETENER EL ABUSO DEL PODER DEL ESTADO. (2020). *Universidad Santo Tomás*. Recuperado de <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/27460/Razonabilidad%20y%20proporcionalidad%20principios%20constitucionales%20para%20detener%20el%20Abuso%20del%20poder%20del%20estado.pdf?sequence=1>

libre desarrollo de la personalidad de las personas consumidoras, promoviendo la atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, por medio de seguimiento, monitoreo, medidas correctivas y campañas educativas.

Aunado a lo anterior, se exponen las normas de carácter internacional, constitucionales, legales, jurisprudencia, decretos y resoluciones que fundamentan la viabilidad jurídica de este Proyecto de Acuerdo, que institucionaliza y fortalece políticas públicas para la atención, prevención y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos de la ciudad.

3.1. Instrumentos internacionales

Mediante la Ley 13 de 1974, se aprueba la “Convención Única sobre estupefacientes” de 1961 y su Protocolo de modificaciones de 1972 de la Organización de las Naciones Unidas, que, de acuerdo con la Resolución 003 de 2022:

El Estado Colombiano reconoce el uso médico y científico de los estupefacientes y su necesaria condición de agentes mitigadores del dolor por lo que resulta indispensable mantener un delicado equilibrio entre su disponibilidad y el control de los mismos para evitar la desviación a mercados ilícitos dadas las graves consecuencias que genera su abuso en la salud pública, por lo que se asume el compromiso de cooperación y fiscalización internacional.

3.2. Normas constitucionales:

La Constitución Política de Colombia de 1991 acoge el modelo de Estado Social de Derecho, sobre el cual versan múltiples obligaciones que son responsabilidad del Estado en beneficio de la ciudadanía, así:

El artículo 49 de la Carta Política determina que *“Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad (...)”*

La ley restringirá el consumo y comercialización de cannabis o sus derivados en entornos escolares y reglamentará el porte y consumo de cannabis y sus derivados en espacios públicos, recreativos, en espacios privados y públicos abiertos al público, comunes, zonas comunes, en establecimientos carcelarios y de rehabilitación, entre otros.

Así mismo, el Estado atenderá con un enfoque de derechos humanos a toda la población con una relación problemática con sustancias psicoactivas y a su familia y/o redes de apoyo, garantizando su tratamiento y rehabilitación; y así prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará de manera permanente campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos nocivos, así como

estrategias de reducción de riesgos y daños en favor de los consumidores que tienen relación problemática o dependiente con sustancias psicoactivas.”

Asimismo, el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece como fines esenciales del Estado, entre otros, *“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta; así como asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, siendo obligación de las autoridades de la República, proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”*

De la misma manera el artículo 44 de la carta magna establece: *“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.”*

Se debe destacar que la iniciativa busca proteger tanto los derechos de los niños, como ya se mencionó en el artículo 44 de la constitución política de Colombia, pero también brindar garantías y protección a las personas que constitucionalmente se encuentran protegidas (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores) Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.” y la comunidad en general.

3.3. Jurisprudencia

El presente proyecto encuentra sustento en la **Sentencia C-127-23 (27 de abril)**, a través de la cual, la Corte mantiene la restricción del consumo de sustancias psicoactivas, incluso la dosis mínima, en parques y en espacios públicos, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme a la regulación que expidan las autoridades locales competentes, determinando que el gobierno nacional deberá proferir un protocolo de aplicación que garantice los derechos fundamentales, así:

i) la exequibilidad de la conducta porte, en el entendido de que esta restricción no se aplica cuando se trata del porte con fines de consumo propio o de dosis medicada; ii) la exequibilidad condicionada del comportamiento de consumo, en los espacios establecidos en las normas, para que la restricción aplique, además, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a la regulación que expidan las autoridades que ejercen poder de policía en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, con base en los principios pro infans (interés superior del menor), de proporcionalidad, razonabilidad y autonomía territorial, en los términos de la presente providencia.

“(…) En relación con la conducta de consumo, la Sala consideró que la medida busca la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente, la aplicación del principio de precaución frente a riesgos prohibidos, como el consumo de sustancias psicoactivas. (…)”

De igual forma, esta sentencia ordena:

“Al Gobierno nacional que, si no lo ha hecho, dentro de los 3 meses contados a partir de la notificación de esta decisión, expida un protocolo de aplicación de las normas estudiadas por la Corte. Aquel, deberá enfatizar en: i) la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; ii) el respeto por los derechos fundamentales de los consumidores; iii) la razonabilidad y la proporcionalidad de la actuación policiva para sancionar el porte y el consumo propio y con fines médicos de sustancias psicoactivas en los parques o zonas o áreas del espacio público determinadas por los concejos distritales y municipales en los planes o esquemas de ordenamiento territorial; iv) el respeto por la autonomía territorial y el autogobierno; v) la protección del carácter diverso y plural de la nación; y, vi) la observancia del debido proceso, la aplicación de los procedimientos sancionatorios y la necesidad y carga de la prueba que siempre recae en el funcionario que impone la sanción (…)”

Por lo tanto, en la misma sentencia la Corte Constitucional dio vía libre para que los concejos distritales y municipales sean los responsables de implementar las condiciones bajo las cuales debe aplicarse esta medida, ya que son ellos, los directos conocedores de la situación que enfrenta su ente territorial y las necesidades de los mismos.

En esta sentencia queda claro principalmente que *“El propósito de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una finalidad constitucional imperiosa. En efecto, el artículo 44 superior establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos. También, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento. Finalmente, consagra que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. De esta forma, la medida estudiada cumple con propósitos que configuran fines legítimos, importantes e imperiosos para la Constitución, pues pretende proteger a los niños frente al consumo y porte de sustancias psicoactivas en espacios públicos como los parques, que son frecuentados por ellos”*.

3.4. Normas con fuerza de ley

El presente proyecto tiene como sustento en las medidas necesarias que se deben tomar para que la comunidad en general, goce de un espacio público sano, para su esparcimiento, esto por medio de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, artículo 34 y 140, que establece:

ARTÍCULO 34. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse:

4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente ley.

ARTÍCULO 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse.

7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.

(Expresiones subrayadas, declaradas INEXEQUIBLES mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-253 de 2019)

(Expresiones subrayadas, declaradas INHIBIDAS para emitir un pronunciamiento, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-489 de 2019)

8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público.

14. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad.

(Numeral 14, adicionado por el Art. 3 de la Ley 2000 de 2019)

PARÁGRAFO 1. Las empresas de servicios públicos pueden ocupar de manera temporal el espacio público para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el respeto de las calidades ambientales y paisajísticas del lugar, y la respectiva licencia de intervención expedida por la autoridad competente.

PARÁGRAFO 2. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se genere bajo el Título XIII del Código Penal.

Del mismo modo, la Ley 2000 de 2019 “*por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones.*”, la cual, tiene como objeto:

establecer parámetros de vigilancia del consumo y porte de sustancias psicoactivas en lugares habitualmente concurridos por menores de edad como entornos escolares y espacio público.

Asimismo, la Ley 1566 de 2012 *Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”, determina que:*

Le compete al Estado controlar y disminuir “el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos.”

Por otro lado, el artículo 2° de la Ley 1098 de 2006 *“Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”*, señala como objeto de dicho código: *“(..) establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado ”.*

A su vez, el artículo 8° ídem se refiere al interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, definiendo este como:

“el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes” , y, en relación con el artículo mencionado, el artículo 9 íbidem, menciona la prevalencia de los derechos de los menores, determinando que:

“En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.”

3.5. Decretos

El Decreto Nacional 1504 de 1998 *Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial*, determina a través de sus disposiciones que:

Artículo 1.- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. (...)

Artículo 2.- El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Del mismo modo, el Decreto 825 de 2019 *"Por medio del cual se establecen los perímetros y zonas para la restricción del porte, consumo, facilitamiento, distribución, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la ley 2000 de 2019, modificatorios parcialmente de los artículos 34 y 140 de la Ley 1801 de 2016, y se dictan otras disposiciones."*, estipula:

"la necesidad de proporcionar a nuestros menores las mejores condiciones para su desarrollo integral, de tal forma que permita que ellos crezcan en un ambiente propicio para ejercer de modo pleno sus derechos (...)"

3.6. Resoluciones

Este proyecto cuenta con sustento jurídico mediante la Resolución 089 de 2019 *"Por la cual se adopta la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas"*, a través de la cual se determina que:

"teniendo en cuenta la complejidad de la problemática que plantea el consumo de sustancias psicoactivas. la cual, trasciende a la salud mental y genera un impacto a nivel sanitario, económico y social, se hace necesario adoptar la Política Integral de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas"

4. COMPETENCIA

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según artículo 313 de la Constitución Política numeral 1 que estipula lo siguiente:

*“ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (...)”*⁹²

Asimismo, esta Corporación es competente de acuerdo al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá -, numerales 1 y 25, que determinan:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

*25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes”*⁹³

Del mismo modo, el Concejo tiene competencia de acuerdo a la Ley 136 de 1994, la cual establece en su parágrafo 2 del artículo 32 que:

*“Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la Constitución y la ley”*⁹⁴

En esa misma línea, el Concejo tiene competencia para expedir normas relacionadas con el sustento del presente proyecto, puesto que, de acuerdo a la Sentencia C-127-23 (27 de abril), M.P. Juan Carlos Cortés González, Expediente: D-14771AC, el Alto Tribunal determinó que el protocolo de aplicación de políticas públicas relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos debe enfatizar en:

“(...) iii) la razonabilidad y la proporcionalidad de la actuación policiva para sancionar el porte y el consumo propio y con fines médicos de sustancias psicoactivas en los parques o zonas

⁹² Artículo 313 Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado de <https://www.constitucioncolombia.com/titulo-11/capitulo-3/articulo-313>

⁹³ Decreto Ley 1421 de 1993. (1993). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

⁹⁴ Ley 136 de 1994. (1994). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329>

*o áreas del espacio público **determinadas por los concejos distritales y municipales** en los planes o esquemas de ordenamiento territorial (...)*⁹⁵

Igualmente, para la implementación del presente proyecto es competente la Secretaría Distrital de Integración Social, por cuanto en el marco de sus competencias y de acuerdo al Decreto 607 de 2007⁹⁶ artículos 1 y 2, se establece lo siguiente:

Artículo 1°. Objeto. *La secretaría distrital de integración social, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.*

Artículo 2°. Funciones. *La Secretaría Distrital de Integración Social, tendrá las siguientes funciones básicas:*

- a) Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades.*
- b) Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.*
- c) Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objeto.*

A su vez, para la ejecución de este proyecto, es competencia de las Alcaldías Locales, de acuerdo al Artículo Tercero del Decreto 153 de 2010⁹⁷ y el artículo 86 del Decreto 1421 de 1993⁹⁸, que determinan lo siguiente:

⁹⁵ Corte Constitucional. (2023). Sentencia C-127-23 (27 de abril). *COMUNICADO 13 26 y 27 de abril*, 10-20. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2013%20Abril%2026%20y%2027%20de%202023.pdf>

⁹⁶ *DECRETO 607 DE 2007. (2007, 28 diciembre). Recuperado de <https://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/LGBT/Decreto%20607%20de%202007%20ESTRUCTURA%20SDIS%2026%2008%2010.pdf>*

⁹⁷ *DECRETO 153 DE 2010. (2010, 21 abril). Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Recuperado de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=39356>*

⁹⁸ *Decreto Ley 1421 de 1993. (1993, 21 julio). Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>*

“Artículo Tercero-. Alcaldías Locales. Son funciones de las Alcaldías Locales:

b. Garantizar el desarrollo armónico e integrado de la Localidad.

d. Las establecidas en el Decreto Ley 1421 de 1993.

e. Las demás que le sean asignadas o delegadas y que correspondan a la naturaleza de las Localidades. (...)”

“ARTÍCULO 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales.

3. Articular y coordinar en sus respectivas localidades las políticas distritales de cada sector a través del trabajo conjunto con su gabinete local.

4. Reglamentar los respectivos acuerdos locales.

9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.

17. Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial.

20. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor. (...)”

5. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” determina:

“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

En consideración a lo anterior, esta iniciativa **no tendría un impacto fiscal** en razón a que la misma no genera la obligatoriedad de gastos, ni implica la apropiación de recursos adicionales a los sectores y entidades responsables de su implementación y, por el contrario, promueve la atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la preservación del espacio público y la protección a personas protegidas constitucionalmente y comunidad en general.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

6.1 Delegación de la Unión Europea en México, & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2024). Informe mundial sobre las drogas: LOS DAÑOS DEL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS SIGUEN AUMENTANDO EN MEDIO DE LA EXPANSIÓN DEL CONSUMO Y LOS MERCADOS DE DROGA. Recuperado de: <https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/junio-2024/informe-mundial-sobre-las-drogas-2024-de-unodc-los-daos-del-problema-mundial-de-las-drogas-siguen-aumentando-en-medio-de-la-expansion-del-consumo-y-los-mercados-de-drogas.html>

6.2 Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud, Este estudio fue realizado por la Alcaldía de Bogotá – Secretaría Distrital de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. (2022). Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/ESTUDIO_DE_CONSUMO_DE_SUSTANCIAS_PSICOACTIVAS_BOGOTA_2022.pdf

6.3 LEY 1566 DE 2012: *por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional «entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias» psicoactivas.* (2012). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48678>

6.4 Ministerio de Salud y Protección Social & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2013). EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA. En *Guía práctica para entender los derechos en salud y la atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas.* Recuperado de <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO031052013-Cartilla.pdf>

6.5 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). *Decreto 825 de 2019.* Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

6.6 *Decreto Ley 1421 de 1993 - Gestor Normativo.* (1993, 21 de julio). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

6.7 Congreso de la República. (2016, 29 julio). *Ley 1801 de 2016.* Secretaria del Senado. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1801_2016.html

6.8 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). *Decreto 825 de 2019.* Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

6.9 Constitución Política 1 de 1991 Asamblea Nacional Constituyente - Gestor Normativo. (s. f.). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

6.10 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). *Decreto 825 de 2019*. Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

6.11 Términos claves que todo ciudadano debe conocer: Medidas Correctivas. (s. f.). Secretaría de seguridad, convivencia y justicia. Recuperado de <https://scj.gov.co/es/c%C3%B3digo-policial/c%C3%B3digo-nacional-seguridad-y-convivencia-ciudadana#:~:text=Medidas%20Correctivas%3A%20Las%20medidas%20correctivas,los%20deberes%20espec%C3%ADficos%20de%20convivencia>.

6.12 Código de la infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006. (s. f.). ICBF. Recuperado de <https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf>

6.13 Sentencia C-127 de 2023. (2023). Corte Constitucional. <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2023/C-127-23.htm>

Campañas de prevención al consumo de alucinógenos en niños, niñas y adolescentes en Bolívar. (2019, 6 julio). Policía Nacional de Colombia. Recuperado de <https://www.policia.gov.co/noticia/campanas-prevencion-al-consumo-alucinogenos-ninos-ninas-y-adolescentes-bolivar-0>

6.14 __DECRETO 607 DE 2007. (2007, 28 diciembre). Recuperado de <https://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/LGBT/Decreto%20607%20de%202007%20ESTRUCTURA%20SDIS%2026%2008%2010.pdf>

6.15 DECRETO 153 DE 2010. (2010, 21 abril). Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Recuperado de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=39356>

6.16 Decreto Ley 1421 de 1993. (1993, 21 julio). Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

6.17 Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). *Prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA)*. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/convivencia-desarrollo-humano-sustancias-psicoactivas.aspx#:~:text=Es%20toda%20sustancia%20que%20introducida,o%20los%20procesos%20de%20pensamiento>.

6.18 Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). *Prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA)*. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/convivencia-desarrollo-humano-sustancias->

[psicoactivas.aspx#:~:text=Es%20toda%20sustancia%20que%20introducida,o%20los%20procesos%20de%20pensamiento.](#)

6.19 Secretaria de Planeación. (s. f.). *Espacio Público*. Recuperado de <https://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/taller-del-espacio-publico/generalidades#:~:text=Definici%C3%B3n,intereses%2C%20individuales%20de%20los%20habitantes>.

6.20 Ministerio de Justicia y del Derecho. (s. f.). *SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL*. Recuperado de <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/Infografias/InfografiaComisarios/INFOGRAFIA%20SUJETOS%20DE%20ESPECIAL%20PROTECCION%20CONSTITUCIONAL.pdf>

6.21 Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.-a). *ABECÉ de la prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas*.

6.22 Instituto para la Economía Social. (s. f.). *ENFOQUE POBLACIONAL EN POLÍTICAS PÚBLICAS Ciclo vital y generacional* Recuperado de https://www.ipes.gov.co/images/informes/transparencia/politicas_publicas/toma_decisiones/BOLETIN%20DE%20POLITICAS%20PÚBLICAS%20POBLACIONAL%20DE%20ENFOQUE%20DIFERENCIAL%20-%201.pdf

6.23 DANE - *Enfoque diferencial e interseccional*. (s. f.). Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional>

Cordialmente,

DARÍO FERNANDO CEPEDA PEÑA
Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal.

PROYECTO DE ACUERDO NO 396 DE 2025
PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA Y SE FORTALECEN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD EN EL MARCO DE LA SENTENCIA C-127 DE 2023...”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas por artículo 313 de la Constitución Política numeral 1, al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá -, numerales 1 y 25, Ley 136 de 1994, la cual establece en su parágrafo 2 del artículo 32, Sentencia C-127-23

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: OBJETO: La presente iniciativa tiene por objeto institucionalizar y fortalecer políticas públicas para la atención, prevención y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos de la ciudad.

ARTÍCULO 2. FINALIDADES. Son finalidades del presente proyecto

2.1. Promover políticas públicas que permitan a la comunidad en general, el adecuado uso de los espacios públicos, con el fin de que estos sean exclusivamente aprovechables para el objeto de su creación.

2.2. Ofrecer programas educativos que le permitan a la población consumidora el libre desarrollo de su personalidad en cuanto a su ejercicio en espacios aptos para este tipo de acciones. Lo anterior con el fin de concientizarlos sobre los espacios de esparcimiento familiar que no son los apropiados debido al gran flujo de niños, adultos mayores y comunidad en general.

2.3. Ofrecer acompañamiento psicosocial con el cual la población consumidora de sustancias psicoactivas, puedan acceder a programas enfocados a la prevención y la resocialización dando como prioridad el conocimiento al uso adecuado y sin exceso de estas sustancias.

3.4. Las demás que la Administración Distrital considere pertinentes y congruentes con los objetivos del programa y que sean definidas en la reglamentación.

ARTÍCULO 3. ENFOQUES. La implementación del presente proyecto se hará teniendo en cuenta, los siguientes enfoques:

3.1. Enfoque de derechos humanos: Toda acción tendiente a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos debe estar orientada por el respeto de los derechos humanos,

mediante políticas públicas que protejan el derecho a la vida, a la salud, al goce de un ambiente sano, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física y al cuidado.

3.2 Enfoque poblacional: El ciclo vital o de vida es un enfoque, poblacional que permite entender y atender las dificultades por las que atraviesan los individuos, en este caso, brindar atención al cuidado de población constitucionalmente protegida para el pleno goce de sus derechos y desarrollar prevención en cuanto al consumo de sustancias en espacios públicos que puedan afectar la integridad de la comunidad.

3.3 Enfoque para la salud pública: Mitigación del impacto en temas de salud, tanto física como mental, producido por el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, así como la respectiva planificación para tratar el tema, que, para el caso del presente proyecto, resulta de vital urgencia.

4.4 Enfoque interseccional y diferencial: Reconocimiento de grupos poblacionales con características particulares en razón de su edad o etapa del ciclo vital, entre otras características; para promover la visibilización de situaciones de vida particulares y brechas existentes, y guiar la toma de decisiones públicas que permitan garantizar sus derechos en cuanto al goce de un ambiente sano y la prevención del consumo de sustancias en el espacio público.

ARTÍCULO 4. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Seguridad, promoverá la coordinación entre los Sectores Centrales, Secretaria de Educación, Secretaria de Integración Social, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, las Localidades en colaboración con las Alcaldías Locales, y demás entidades competentes, para la reglamentación, implementación, evaluación y acompañamiento del presente proyecto.

ARTICULO 5. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN. Las entidades Distritales vinculadas y las demás que por competencia de sustracción normativa tengan asignadas funciones en temas relacionados con la prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas, deberán formular un plan de acción en el marco de la Sentencia C-127 de 2023 y el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, en el cual deberá tener metas y líneas de intervención.

ARTICULO 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.